



Martín
Mujica

VIOLENCIA ESTATAL Y VIOLENCIA POLÍTICA
La guerra como principio de subsistencia
del modelo capitalista
La violencia como herramienta política

ADE
INSTITUTO ARGENTINO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

 **realidad
económica**

Mujica, Martín

Violencia estatal y violencia política: la guerra como principio de subsistencia del modelo capitalista: la violencia como herramienta política / Martín Mujica. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IADE, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-47691-9-0

1. Violencia. 2. Violencia Institucional. I. Título.

CDD 363

VIOLENCIA ESTATAL Y VIOLENCIA POLÍTICA.
La guerra como principio de subsistencia
del modelo capitalista
La violencia como herramienta política

Martín Mujica

ÍNDICE

Nota preliminar	9
La GUERRA como sustento imprescindible de la expansión del capitalismo	11
Algunas preguntas	11
Introducción.....	15
El nuevo tablero mundial: la guerra fría, pero cómo.. ¿seguimos en guerra?.....	19
Soldado, dispara contra tu pueblo	29
América latina: ¿qué pasaba acá?.....	35
El problema del indio (para los criollos) y de las montoneras y el Paraguay (para los porteños e ingleses).....	41
Siglo XX, cambalache.	59
1930: crisis económica mundial y primer golpe militar.....	79
La novedad del peronismo.....	87
“La Libertadora” va a la escuela... francesa... ..	103
Represión legal o ilegal, esa es la cuestión.....	117
<i>Ego te absolvo</i>	123
¿En qué circunstancias se formó políticamente la generación del ´60 y ´70?.....	137
La “ <i>revolución argentina</i> ” y la consolidación de la doctrina de seguridad nacional.....	153
¿A quiénes había que “desaparecer”?.....	161
1973 a 1976: de la primavera camporista a las coordinadoras de gremios en lucha.....	181
El Estado y las transformaciones hoy	197
Anexo I. ¿qué hacer?.....	211

Anexo II. Civiles y militares: la guerra fría y la tercera guerra mundialL	221
De las bombas atómicas sobre Hiroshima/Nagasaki al asesinato, vía dron, de Qassem Soleimani.	221
Bibliografía.....	227

“Son cada vez más las bases militares de países occidentales asentadas en Asia y África. Estos países dicen abiertamente que las armas atómicas son convencionales y se preparan para una guerra atómica. Los pueblos asiáticos no pueden olvidar que la primera bomba atómica cayó en su territorio ni que la primera víctima de las pruebas de la bomba de hidrógeno fue asiática”.

Zhou Enlai (1955)

NOTA PRELIMINAR

Este escrito es el resultado de diversas lecturas y reflexiones entre 2010 y 2016, pero también es producto de la maduración - durante años - de la experiencia política de las décadas de 1960-70 de la que fui partícipe y cuyas marcas y consecuencias sociales, a pesar del paso de los años, aún siguen dando debate hoy.

Estas ideas giraron en torno al tema del origen de la violencia política, su raigambre cultural profunda y matizada, que impregna de un modo u otro a todas las capas de la sociedad. Entendiendo por *violencia política* a aquella que se ejerce para defender o imponer un ideal, un modelo político y económico desde el poder hegemónico/Estado como la que se articula, a modo de réplica, desde diversos sectores de la sociedad. Para expresarlo de otra manera, es la violencia ejercida desde una posición dominante y la respuesta a ésta desplegada por aquellos sectores sociales sometidos.

En esa línea y tomando como eje esa definición de *violencia política*, transitaremos un recorrido que describe sucintamente el contexto histórico desde lo que conocimos como *la conquista española*, pasando por la formación del Estado/nación, hasta nuestros días, que intentará aproximarse a las fibras íntimas de la violencia como un ingrediente indispensable en lo que fue el proceso de construcción de nuestro modelo de sociedad actual en Argentina.

Ese itinerario está dividido en capítulos que podrán leerse y trabajarse de modo unitario dado que reflejan una coyuntura histórica definida, más allá de su conexión con el antes y el después.

Dejando a un lado el acto catártico de escribir y sacar afuera dudas, demonios, angustias y reflexiones, resulta difícil sustraerse al impulso de que este texto tenga alguna utilidad colectiva que exceda a quien lo escribe.

Sin la pretensión, desde una mirada académica, de estar a la altura de semejante desafío, entiendo que este trabajo puede ser introductorio, tanto para aquellos/as que se asoman por primera vez a la historia estimulados/as por inquietudes sociales y políticas, como para aquellos/as que conviven con una visión fragmentada de la historia. Lejos de pensarlo como una mirada cerrada y única, la búsqueda está en abrir una puerta a la comprensión y la reflexión de cómo se fue construyendo el conflictivo entramado social de lo que hoy es nuestro país. A partir de ahí surgirán debates y dudas que se podrán profundizar en base a la bibliografía mencionada, sumada a tanta otra, sobre cada uno de los momentos históricos que marcaron a fuego a nuestra convulsionada sociedad.

Visto de este modo, lo considero un modesto aporte, una mirada política sobre nuestra compleja realidad actual a través de un tema tan polémico como es el de la violencia, en un mundo abrumado por el farrago de una intoxicación informativa masiva y envuelto en un torbellino interminable de conflictos y guerras de diversa intensidad, que nos deja aturcidos y con escaso margen para la reflexión con ojo crítico.

LA GUERRA COMO SUSTENTO IMPRESCINDIBLE DE LA EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO

“Al proponer esta ley al Parlamento planteamos, a la vez, una cuestión sencilla y fundamental, que puede resolverse con dos preguntas y dos respuestas. ¿Cree usted que el comunismo es una doctrina que predica el derrocamiento violento del orden social existente? ¿Puede un Estado defender la propaganda y la difusión de una doctrina que predica su derrocamiento violento y el derrocamiento violento del orden social sobre el cual él se asienta? El que contesta negativamente a la primera pregunta es un ignorante; el que contesta afirmativamente a la segunda, es un comunista”.

Fragmento de la exposición del senador Matías Sánchez Sorondo en defensa de la ley derepresión al comunismo, el 24 de noviembre de 1936, en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Año 1936, Tomo I, p. 29. El senador Sánchez Sorondo era, además, titular de la compañía de seguros Franco Argentina Comercial y Financiera y abogado de la Standard Oil.

ALGUNAS PREGUNTAS

¿Es descabellado hablar de una 3ª guerra mundial? ¿Qué es la 3ª guerra mundial? ¿Comenzó la 3ª guerra mundial? ¿Cuándo? ¿Se desató en 1917 cuando estaba terminando la 1ª y triunfaba la primera Revolución Socialista en Rusia o tal vez antes, a partir de la experiencia de la Comuna de París en 1871 o, más aún, del triunfo de la Revolución Francesa en 1789?

Muchos teóricos de la derecha internacional sostuvieron la tesis de la 3ª guerra mundial a partir de la “*guerra fría*” decretada al final de la Segunda Guerra Mundial. En el plano regional fue (y es) el soporte argumental de las FFAA y sus aliados civiles que participaron del terrorismo de Estado, en el caso argentino, en el período comprendido entre 1975 y 1983. Veremos por qué.

En línea con este planteo analizaremos cómo se diversificó el concepto de guerra y cómo ésta se sigue desarrollando hoy a nivel global por muchísimos medios más, además de los convencionales. Un ejemplo de ello es la *lawfare* o guerra jurídica, otro siempre de moda son las *fake news*, o noticias falsas también llamado *periodismo de guerra*, todos dispositivos incluidos en las denominadas *guerras de cuarta generación*¹. También la hoy conocida como *guerra híbrida*² instrumentada por EEUU y la OTAN en países como Túnez, Jordania, Egipto (llamadas “primavera árabe” o “revolución de los colores”) y en Siria y Ucrania. Continuando ese trazo, indagaremos el rol del Estado en nuestro país y cuál fue su evolución hasta la actualidad.

Finalmente veremos, en un recorrido histórico, cómo la necesidad de la guerra fue y es un alimento imprescindible para el desarrollo y sustentabilidad del modelo socio-económico capitalista lo que implica, siempre, la necesidad de

¹La llamada *guerra de cuarta generación* es una denominación dentro de la doctrina militar estadounidense que comprende a la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la guerra popular, la guerra civil, el terrorismo y el contraterrorismo, además de la propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, la población civil y la política. Fuente: <https://es.wikipedia.org/>

² *Guerras híbridas: De las revoluciones de los colores a los golpes*, Andrew Korybko. Edición Expressão Popular, São Paulo 2015.

crear un oponente, una amenaza, un enemigo en apariencia lo suficientemente poderoso y peligroso, como para que en esa guerra todo esté justificado.

INTRODUCCIÓN

No puedes al mismo tiempo, evitar y prepararte para la guerra.

Albert Einstein.

La guerra existió desde tiempos remotos y ha estallado por diversos motivos de acuerdo a las coyunturas económicas, sociales, políticas y culturales de cada época. Es muy cierto también que la pasión amorosa desenfrenada, el fútbol, o el amor desmedido a sí mismo han desatado encarnizadas guerras. Pero, para decepción del/a lector/a, no es de éstas de las que hablaremos.

Para no irnos tan lejos en el tiempo y en la historia, fue a partir del Renacimiento y en los últimos 500 años donde el modelo occidental y cristiano europeo resolvió expandirse y dominar todo el planeta, “conquistar” en su discurso. La guerra entonces tomó un carácter más específico y a la vez más global: la cultura occidental en ascenso, encarnada en los distintos imperios europeos (España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, etc.) se estableció como la única valedera y aquel que no lo entendió así, fue sojuzgado por la fuerza de las armas.

Luego de la Revolución Francesa en 1789, a medida que avanzó la transformación del modelo económico y este se convirtió en capitalismo puro y duro, la propiedad de los medios de producción se concentró en pocas manos -la burguesía-, configurando un sofisticado y pujante sistema de

dominación cada vez más desigual y excluyente. Así el principio de la guerra o, lo que es lo mismo, el uso de la violencia como forma de sometimiento, se tornó en una necesidad vital para su sostenimiento.

Durante los siglos XIX y XX la expansión del modelo capitalista se desarrolló con prisa y sin pausa, y la guerra como garantía de sustentabilidad del mismo, se instaló definitivamente en el núcleo duro del poder económico.

Las dos guerras mundiales ocurridas en el siglo XX tuvieron diversas causas, pero centralmente se enmarcaron en conflictos entre países capitalistas que se disputaban, con distintos matices, su expansión y su participación en el reparto del mundo, a la vez que observaban con recelo el surgimiento de un actor inesperado: la Unión Soviética. Como resultado, además de establecer un nuevo liderazgo en el occidente cristiano, implicaron ambas un muy buen negocio para pocos, entre ellos los fabricantes de armas, que no cesaron de crecer y desarrollarse desde entonces. De este modo se consolidó definitivamente una industria muy poderosa y muy rentable: la industria de guerra. En ella los países centrales concentraron cuantiosos recursos económicos, humanos y científicos para alcanzar metas tecnológicas tan ambiciosas como inquietantes.

Concluida la segunda guerra mundial, EEUU emergió sin mayores daños como líder indiscutido de occidente, ante una Europa devastada, la Unión Soviética arrasada y Japón aniquilado, no solo por la guerra sino también por el lanzamiento el 6 y 9 de agosto de 1945 de dos bombas atómicas norteamericanas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que, además del saldo de 286.000 y 162.000 civiles muertos en cada ciudad, significaron un claro mensaje para el mundo en general y para la Unión Soviética en particular.

Este hecho no fue para nada menor en la historia mundial. EEUU realizó un férreo control sobre la prensa del mundo para invisibilizar ese genocidio y mostrarlo como “algo necesario”, a la vez desplegó un aparato de propaganda tan vasto como su maquinaria industrial-militar. Desde el cuartel central del general Douglas Mc Arthur, comandante supremo de las fuerzas de ocupación en Japón, se censuró cualquier mención, siquiera de orden científica, referida a las bombas. Documentos desclasificados de EEUU, avalan la hipótesis de que Japón ya estaba derrotado y dispuesto a firmar su rendición antes de que las bombas fueran arrojadas, lo que desmiente la “necesidad” de ese crimen; es más, tres meses antes, el 8 de mayo, Alemania, la principal fuerza militar del Eje, había firmado la capitulación incondicional ante los aliados.

Pero EEUU, junto con Inglaterra y Canadá, ya desde el año 1939, en el marco del denominado Proyecto Manhattan, se habían abocado secretamente a la fabricación de una bomba de nuevo tipo, lo que daría inicio a la carrera armamentista nuclear. En ese año, Albert Einstein le envió una carta a Franklin Roosevelt, presidente de los EEUU, confirmando la posibilidad de crear armas atómicas de un poder de destrucción nunca visto. Para 1945, EEUU ya tenía su bomba nuclear lista y había realizado la primera prueba. La *Prueba Trinity*, así se denominó, se produjo en el desierto de Nuevo México y el resultado de la explosión asombró a los científicos: fue mucho mayor de lo esperado.

Hiroshima y Nagasaki fueron la demostración más contundente de la perversidad sin límites de la política imperial. Ninguna de estas ciudades japonesas eran objetivos militares, no había bases militares, ni industrias de guerra, ni soldados. Solo civiles. La idea era probar el poder de las bombas atómicas y enviar un mensaje al mundo. De hecho, la

ocupación militar norteamericana en Japón, que duró casi siete años, continuó haciendo experiencias atómicas en territorio japonés, razón por la cual ese país es de los más contaminados de radiactividad en el mundo.

Sin dudas fue el mayor crimen de guerra que la humanidad recuerde. Hoy, a más de 70 años, este asesinato en masa aún sigue impune, mientras continúan muriendo japoneses por efectos de la radiación.

Entre 1945 y 1992 EEUU hizo detonar, en diferentes lugares del planeta, la friolera de 1.129 bombas atómicas. Este fue el inicio de *la era atómica*.

Finalizadas las hostilidades y como contrapartida al horror de las bombas, la destrucción y muerte de la guerra y el holocausto, el nuevo reordenamiento de occidente introdujo un corpus de ideas sobre los derechos y deberes que las naciones miembros deberían suscribir en la naciente Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otros tratados internacionales, se firmó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hasta aquí, y a pesar de la ominosa sombra proyectada por los hongos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, a los ojos del ciudadano de a pie, todo parecía indicar que el mundo se comprometía plenamente con la paz mundial y se inauguraba un futuro de prosperidad general en convivencia pacífica y civilizada.

Pero esta esperanza se fue resquebrajando día a día y esa paz, anhelada por los hombres y mujeres de bien de todo el mundo, se fue desvaneciendo con el avance de un nuevo concepto de guerra que convirtió en letra muerta aquellos tratados.

EL NUEVO TABLERO MUNDIAL: LA GUERRA FRÍA, PERO CÓMO... ¿SEGUIMOS EN GUERRA?

Decíamos que finalizada la 2ª Guerra Mundial se configuró un nuevo reparto del mundo: por un lado, el bloque occidental con el flamante líder imperial, los EEUU, defensor del modelo capitalista, controlando todo el territorio europeo occidental, Japón y zonas de influencia, además de América latina. Por el otro lado el bloque socialista o *soviético* con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) al frente, que cerró sus fronteras y se abocó a restañar las heridas de una guerra devastadora que dejó el saldo de 27 millones de soviéticos muertos y el país y sus industrias arrasados.

A diferencia de los EEUU, la Unión Soviética fue por segunda vez, en menos de 25 años, el campo de batalla de dos guerras mundiales de un nivel de destrucción desconocido hasta entonces. Sin tiempo aún para reponerse de semejante sangría, ya era objeto de una tercera. A partir de aquí quedó establecido el mundo “bipolar”: el capitalismo occidental por un lado y el mundo socialista por otro.

Así las cosas, la guerra no cesó, sino que adquirió otras formas y se redireccionó, desde occidente, apuntando todo su poder de fuego hacia el territorio socialista y sus posibles aliados *dentro* de occidente. Desde ese momento se globalizó la cruzada contra el comunismo impulsada por los EEUU y fue lo que se denominó eufemísticamente como “*la guerra fría*”.

Durante esa “coexistencia pacífica” entre los dos bloques, que de pacífica no tuvo nada, EEUU como líder capitalista rápidamente creó y puso en movimiento toda una batería de herramientas que le permitieron consolidar el control del mundo occidental.

Las más importantes, tras los acuerdos de Bretton Woods, fueron la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), también conocido como Banco Mundial, a través del cual puso en marcha el *Plan Marshall* para la reconstrucción de Europa con metas inmediatas: rehabilitar la economía y de este modo asegurarse el mercado europeo para sus productos, pero especialmente garantizar el control territorial para alejar el peligro de un eventual avance comunista. Los argumentos que se expusieron en el Congreso de EEUU y ante la opinión pública para justificar la enorme inversión que implicaba el ambicioso Plan fue el *peligro comunista* y, dentro de lo que se denominó *la Doctrina Truman*, ayudar a los *pueblos libres* para salvarlos de ese *peligro*. El Plan, destinado a la reconstrucción de 18 países de Europa Occidental, fue apoyado por los dos partidos que desde siempre controlan la política norteamericana, el Republicano y el Demócrata. De este modo se convenció al mundo occidental y a la opinión pública de la urgente necesidad del Plan y, si bien las cifras varían, se estima que se aprobaron 16.000 millones de dólares -una suma descomunal para esa época- destinada a la aplicación del *European Recovery Program*. Entre 1948 y 1952 se invirtió la mayor parte de ese monto en el Reino Unido, Francia y Alemania occidental con la idea de generar una Europa con buenos niveles de producción, nueva infraestructura y *Estados de bienestar* que garantizaran un buen estándar de vida, de manera tal de alejar cualquier conflicto social que inclinara a la población europea a mirar con simpatía hacia la URSS y las ideas socialistas.

George Catlett Marshall, general del Ejército de los EEUU y jefe de su estado mayor durante la guerra, fue el ideólogo del plan que llevó su nombre. De esta manera se constituyó la base de una nueva Europa, de la futura Comunidad Económica Europea y de la instalación de numerosas bases militares norteamericanas a través del acuerdo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). El Plan Marshall fue, sin duda, la demostración del inicio por parte de EEUU de la *Guerra Fría* contra el bloque socialista y marcó un antes y un después en la política y la economía occidental.

Las grandes potencias vencedoras impusieron prerrogativas especiales en la ONU, como el derecho a veto en el selecto Consejo de Seguridad, clausurando para siempre el debate en términos de igualdad entre todos los países miembro, que era el rol original de la Naciones Unidas.

Con el dólar como moneda de referencia y patrón comercial y financiero, el BIRF (Banco Mundial) y el FMI se transformaron en los organismos financieros controlados por las grandes potencias, en particular EEUU, y funcionaron (y funcionan) como el instrumento principal de control del movimiento y flujo de capitales en el mundo. Ahí se decide a quien se le otorgan créditos, a quien no y bajo qué condiciones.

En definitiva, el Plan Marshall fue concebido estratégicamente como una política de contención ante un supuesto avance de la URSS sobre el occidente europeo y a la vez como una estrategia de acorralamiento del mundo socialista, conocida como *la cortina de hierro*.

La instalación de bases militares norteamericanas en toda la línea oriental de Europa y la misma creación de la OTAN exponen la fibra íntima de la *guerra fría* emprendida contra el

comunismo. Claro que este proceso de reordenamiento europeo (y mundial) no estuvo exento de ciertas rispideces internas, tal fue el caso de Francia que, herida por no haber sido invitada a la conferencia de Yalta, amenazó con abandonar la OTAN y le solicitó a EEUU el retiro de todas sus bases militares y armamento atómico del territorio francés. La solución a este entredicho fue acceder al anhelo de Francia de ingresar al reducido y exclusivo grupo de países con armas atómicas y tener acceso a los secretos de la construcción de una bomba nuclear propia.

¿Cuál era el motivo de la guerra *contra* el comunismo? Lo iremos viendo más adelante.

Podemos continuar con la siguiente pregunta: ¿en qué consistió esta “guerra fría”?

El aspecto más conocido se expresó en la carrera armamentista entre los dos bloques que compitieron a ver quién desarrollaba mayor poder de fuego convencional y atómico, en una pugna enfermiza y alocada en la que se dilapidaron miles de millones de dólares, materia gris, investigación científica y esfuerzo humano durante décadas. En un momento de esa carrera ambos lados llegaron a la conclusión de que una “guerra atómica” no le convenía a ninguno, puesto que hubiera borrado de la faz de la tierra a buena parte de los dos bandos y sus alrededores. Las armas atómicas entonces pasaron a cumplir el rol de *disuadir* al posible enemigo y la guerra tangible debió continuar por otros canales, es así que hubo que desarrollar *otros* conceptos de guerra.

Desde las usinas del Pentágono norteamericano se lanzó la “*Doctrina de Seguridad Nacional*”, cuyo eje fue garantizar a

toda costa la *seguridad* nacional de los EEUU y sus aliados; el modo de instrumentarla fue la tesis de la *guerra total*.

En este punto hay que entender algo: cuando EEUU habla de ***su seguridad nacional*** no se refiere solamente al aspecto interno, a lo que pueda ocurrir dentro de sus fronteras, se refiere al resto del mundo capitalista, y esto es así porque EEUU asumió su rol de potencia imperial con todas las letras y entonces considera ***su*** territorio a todos los países de la órbita occidental. La manera de verbalizarlo siempre fue “la defensa de intereses norteamericanos” en esos países. Sus intereses podían ser económicos, políticos, estratégicos, de empresas o ciudadanos estadounidenses. De hecho, esos intereses estuvieron y están presentes en todos esos países a través de sus corporaciones, de sus bases militares y de sus activas embajadas.

Esta férrea convicción tiene una profunda raíz en las creencias religiosas de la colonización inglesa en América del norte. Existe una rica bibliografía que analiza este aspecto, pero para no abundar, vale citar al escritor y ensayista norteamericano Herman Melville quien en 1850 dijo: “Nosotros, los americanos, somos el pueblo elegido, el Israel de nuestro tiempo. Nosotros cargamos el arca de las libertades del mundo. Dios concibió grandes cosas para nuestra raza y la humanidad las espera. En nuestros corazones también sentimos grandes cosas. El resto de las naciones marchará pronto detrás de nosotros. Somos los pioneros del mundo, la vanguardia enviada a través de la jungla de las cosas sin realizar, para abrir un camino en este Nuevo Mundo que es el nuestro”.

Esta raíz mesiánica no es patrimonio exclusivo de los EEUU, pero fue en este país que se conceptualizó como el mandato del *Destino Manifiesto*, un destino supuestamente asignado

por Dios que señaló, desde la conformación misma de la Unión, como la *Nación elegida*. Esta idea continúa hoy hondamente arraigada e inmutable en el pensamiento de la élite política norteamericana, y fue expresada por el presidente George W. Bush en 2003, para justificar la invasión militar a Irak: “Yo cumplo con una misión de Dios. Dios me dijo: *George, ve y combate a esos terroristas en Afganistán* y así lo hice. Entonces Dios me dijo: *George, ve y termina con esa tiranía en Irak*. Y así lo hice.”¹

El filósofo y escritor argentino José Pablo Feinmann, en su ensayo sobre la violencia afirma: “Cuando un pueblo se adjudica una misión histórica, cuando esa misión consiste en rescatar a los otros pueblos de su *decadencia espiritual* y remitirlos a un centro originario y puro que él, ese pueblo, representa, aquí, exactamente aquí, se abre el horizonte conceptual del genocidio”²

La doctrina de la *guerra total* se transformó así en política estratégica y permanente del Departamento de Estado norteamericano a partir de 1947. De esta forma se instaló la idea de que el mundo era un inmenso campo de batalla y consecuentemente esta guerra adquirió diversas características según el escenario: desde la demonización del comunismo a través de los grandes medios masivos de comunicación, hasta los bloqueos económicos y la instigación de golpes militares o la intervención militar directa en aquellos países que se inclinaban por opciones independentistas o cercanas al socialismo. En esta línea,

¹George W. Bush, cumbre de Sharm el-Sheikh, 3 de junio de 2003. Publicado en *The Guardian*, 6 de octubre de 2005. <https://www.theguardian.com/news/blog/2005/oct/06/georgebushgod>

² *La sangre derramada, ensayo sobre la violencia política*, José Pablo Feinmann, página 22. Editorial Planeta 2006.

EEUU no se quedó en los papeles o en teorías abstractas, entre el año 1947 y 1961 instaló 500 bases militares fuera de sus fronteras y cerca de 3000 bases secundarias, también fuera de sus fronteras. Imagine el lector/a una situación inversa, por ejemplo, Argentina u otro país emergente desparramando alegremente bases militares por el mundo: ¡impensable!

Ningún país en la historia de la humanidad hizo un despliegue tan extenso y veloz de su formidable maquinaria bélica, esto expone de modo evidente la agresiva política imperial basada en la guerra y la militarización de todo el planeta.

A la vez *el gran país del norte* invirtió, e invierte hoy, enormes presupuestos en la investigación científica y tecnológica y ha desarrollado una industria de guerra sin precedentes, siempre en el marco de consolidar la superioridad militar en el mundo y en el más allá. Y esto último no es una broma, ya que, desde mediados de los años 50, en plena revolución tecnológica, inundó el espacio de satélites militares espías, de comunicación y de todo tipo.

Atento al clima y la elevada temperatura de esta carrera desesperada por el control del mundo que raya con la paranoia, se creó en 1958 la agencia gubernamental ARPANET (Advance Research Projects Agency Network) dependiente del Departamento de Defensa de EEUU, donde se desarrolló la base de lo que hoy conocemos como Internet. En principio fue un sistema avanzado de comunicación militar ante un eventual ataque atómico. Más allá de los esfuerzos de algunos por desmentir esta afirmación y calificarla de “leyenda”, lo cierto es que la ARPANET contó con un abultado presupuesto y con un plantel de unos doscientos científicos de primer nivel. Para 1962 ya habían creado un programa de investigación para la conexión en redes de computadoras y hacia 1967 comenzaron

a conectar algunas de las Universidades privadas norteamericanas de donde provenían muchos de sus investigadores.

El proyecto revolucionó las comunicaciones y comenzó a ser habilitado para organismos estatales, instituciones, comercio, intercambio bancario y financiero, hasta que fue abierto a todo el mundo como un proyecto comercial.

El desarrollo fue tan vertiginoso que hacia 1980 el Departamento de Defensa decidió crear una institución aparte ante la masificación de la herramienta y el peligro de filtraciones. Así surgió MILNET (Military Network) donde circula la información sensible y secreta de carácter militar relacionada con la seguridad de EEUU. Más allá del brillante negocio que significó (y significa hoy), “la red de redes” sigue bajo un estricto control de los EEUU.

Casi en simultáneo, en una enérgica ofensiva política y diplomática, creó organismos internacionales diseñados de modo tal que su hegemonía absoluta quedara garantizada. En el caso de América latina estableció la Junta Interamericana de Defensa (JID) en 1942, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948. Los dos primeros se orientaron centralmente a la asistencia o intervención militar, en el caso de la OEA funcionó (y funciona) como un instrumento de presión política y económica sobre los países del área. El Acta de Seguridad Mutua de 1951 entre EEUU y los países del continente incluyó el Programa de Ayuda Militar y la posibilidad de presencia militar estadounidense en el país “ayudado”, porque la “ayuda militar” la proveía exclusivamente EEUU, con fines supuestos de “asesoramiento” o “ayuda humanitaria”, algo que sigue vigente hoy con los mismos eufemismos.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 fue la expresión de la alianza militar de EEUU con la Europa occidental y ha sido la herramienta de injerencia militar más utilizada por el imperio. Aún hoy continúa en plena actividad.

El Tratado de Defensa Colectivo del Sudeste Asiático (SEATO, 1954-1955), el Pacto de Bagdad en el Medio Oriente (1955) y numerosos acuerdos bilaterales considerados de “ayuda mutua” terminaron de cerrar el movimiento de pinzas de la diplomacia de guerra con la que EEUU se aseguró el dominio económico y militar de casi todo el planeta.

Quien lee esto puede observar la rapidez y el corto tiempo en que se firmaron todos estos tratados, donde el aspecto de la intervención, o al menos la *presencia* económica y militar estadounidense se enmascaró con expresiones tales como “ayuda humanitaria”, “asistencia recíproca” o “ayuda mutua”.

En estos organismos regionales el eje del acuerdo y del debate impuesto por EEUU giró siempre en torno al conflicto con el mundo socialista y la defensa del “mundo libre”, apuntalando de este modo un sofisticado andamiaje jurídico, legal y militar de alcance planetario montado para aislar, ahogar y quebrantar el bloque socialista. Por otro lado, estos acuerdos sirvieron para legitimar la instalación de las bases militares norteamericanas por todo el globo. En tanto que la JID y el TIAR fueron los organismos regionales a través de los cuales EEUU rediseñó la orientación de las FFAA latinoamericanas y monitoreó la lucha contra el comunismo en la región.

Como ya mencionamos, la conceptualización que hizo EEUU de la doctrina de *seguridad nacional* y su política guerrera dominante en todos los organismos internacionales, comprometió seriamente el papel de mediación en los

conflictos entre países, que inicialmente se le había asignado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como espacio de debate y resolución de disputas en un pie de igualdad entre todos los países miembro, por la vía diplomática.

Es así que la ONU quedó relegada definitivamente a un desempeño meramente burocrático y decorativo, que en los años siguientes la empujó a intervenir como fuerza de ocupación bajo el maquillaje de misión de paz de la ONU, por su sumisión a los mandatos imperiales y su melancólico papel en conflictos internacionales.

Esto impactó fuertemente y de modo especial en aquellos países denominados “emergentes” como los que integran América latina, África y Asia, que fueron desplazados a un rol de países “de segunda”.

De esta manera, como proclamó el general Juan Carlos Onganía en su discurso en la V Conferencia de Ejércitos Americanos en West Point el 6 de agosto de 1964, *“las fronteras ideológicas sustituyeron a las fronteras políticas o nacionales”* y fue así como se implantó un nuevo concepto de guerra y de enemigo: el “enemigo interno”.

SOLDADO, DISPARA CONTRA TU PUEBLO

“Soldado no dispaes contra tu pueblo”

Consigna difundida por los movimientos populares y guerrillas latinoamericanas.

Establecida esta nueva disposición del mundo, muchas cosas iban a cambiar, entre ellas las FFAA. Durante la década del '50 se inició el cambio del paradigma en las FFAA de los países emergentes. Los pensadores castrenses comenzaron a considerar secundarias las funciones tradicionales de los ejércitos nacionales que originalmente eran la “protección de las fronteras físicas ante un enemigo externo o extranjero”. Uno de los estrategas más influyentes entre los oficiales argentinos fue el general francés André Beaufre, quien sostuvo que: *“...al existir las armas atómicas, se hace imposible una guerra tradicional global y el futuro estará señalado por las guerras de baja intensidad”*.

Simultáneamente esos teóricos occidentales, en particular los franceses y los norteamericanos, ya tenían definidas las nuevas *guerras de baja intensidad*, que no eran otra cosa que una nueva estrategia de la guerra contra el comunismo. Así fue que, ante la necesidad casi desesperada de establecer una hipótesis de conflicto, ingrediente indispensable para justificar su existencia, las FFAA latinoamericanas, a instancia del imperio, abrazaron con fervor esas nuevas teorías y comenzaron a prepararse para proteger y ordenar las “fronteras ideológicas” conforme a los dictados de la

Doctrina de Seguridad Nacional que se aplicó a todas las FFAA de los países occidentales. En esta línea fue el discurso mencionado del general Onganía y también la formación de todos los oficiales y suboficiales de las FFAA y las FFSS de la región.

Las FFAA tradicionales, entrenadas y equipadas para la guerra convencional o la defensa nacional ante la agresión de un país extranjero, eran obsoletas. El país que no disponía de armas atómicas no podía competir. Las armas atómicas y el impresionante desarrollo tecnológico en materia de armas de destrucción masiva, dentro del mundo occidental, fueron privilegio de un reducido grupo de países centrales (EEUU, Inglaterra y Francia), el resto, los países del tercer mundo o “emergentes”, salvo escasísimas excepciones, no estaban autorizados a desarrollar tecnología de guerra nuclear y fueron redireccionados por el imperio estadounidense al combate interno contra el comunismo en las diferentes versiones que la paranoia norteamericana fue señalando.

No fue obra de la casualidad que el general Onganía diera su discurso en West Point, la academia militar más antigua y prestigiosa de los EEUU. La influencia norteamericana en los países de América latina fue aumentando silenciosa y permanentemente y una de las herramientas más eficaces en el territorio fueron las representaciones diplomáticas norteamericanas.

Un viejo chiste, atribuido a Terence Todman, activo embajador norteamericano en Argentina durante la primera gestión del gobierno de Carlos Menem, dice así: *¿Saben por qué no hay golpes militares en EEUU...? porque no hay embajada norteamericana.*

En 1960 el general Theodore F. Bogart, comandante del ejército norteamericano en el Caribe, cuya zona de influencia abarca desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos (lo que hoy conocemos como la 4ª Flota), convocó a sus colegas latinoamericanos a lo que luego se institucionalizó como la Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos. A partir de aquí se establecieron las pautas de modificación de las FFAA latinoamericanas. El secretario de defensa norteamericano, Robert Mc Namara en 1962 lo sintetizó así: “Hemos reorientado por completo nuestra política militar hacia América latina. Nuestro propósito ha sido poner aquella política en línea con la naturaleza y alcance de la verdadera amenaza que tenemos al Sur. Ahora reconocemos formalmente la escasa posibilidad de un ataque convencional sobre un Estado americano desde fuera del hemisferio. En consecuencia no vemos exigencia alguna de que los países latinoamericanos sostengan grandes fuerzas convencionales, particularmente las que requieren un equipo caro y complicado”.¹

Claramente lo que Mc Namara estaba anunciando era que ahora la defensa ante un hipotético ataque externo *al hemisferio* la harían ellos, dado que consideran a América latina su “patio trasero”, y las FFAA locales sería entrenadas y equipadas para enfrentar a “la verdadera amenaza que tenemos al sur”.

En esas Conferencias se puso en marcha el Programa de Ayuda Militar norteamericano donde el material bélico aportado, en préstamo con obligación de devolución y permiso de inspección, sólo incluyó material liviano y de

¹*Memoria Debida*, José Luis D’Andrea Mohr, pág. 41, Editorial Colihue. 1999.

comunicaciones aptos únicamente para la represión interna y la lucha contrainsurgente.²

En ese contexto surgió dentro de las élites militares el concepto de la 3ª *guerra mundial*. Esta era una guerra distinta, más silenciosa, menos visible, de “*baja intensidad*”, pero permanente. Se libraba en todo el mundo, no tenía límites ni fronteras y podía ocurrir fronteras adentro, por eso también era una guerra más compleja, más *sucia*, cuyo oponente podía ser un connacional, un vecino o un familiar: era una guerra ideológica que se desató definitivamente en 1917 a partir del imprevisto triunfo de la Revolución Socialista en Rusia y la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS).

¿Por qué afirmamos esto? Aquí retomamos la pregunta de por qué occidente decidió combatir al comunismo.

El marxismo, hasta entonces, era solo una teoría que se encargó de desenmascarar con argumentos teóricos sólidos la injusticia y desigualdad del sistema capitalista y la conflictividad social que estas generaban, a la vez propuso un modelo alternativo: el socialismo. En sus inicios, la novedosa teoría desarrollada por Carlos Marx y Federico Engels sólo suscitaba comentarios burlones y risas socarronas en los selectos clubes de ricos empresarios y nobles europeos. No obstante durante el siglo XIX, en plena revolución industrial donde la clase obrera se transformó en el motor de la economía ya que era ella la que producía la riqueza, hubo intentos exitosos de poner en práctica este innovador modelo de sociedad, pero fueron ahogados en sangre, tal fue el caso de la Comuna de París en 1871³.

²José Luis D´Andrea Mohr, Op. Cit. pág. 41.

³Ver *La guerra civil en Francia*, Carlos Marx, 1871.

Sin embargo, ocurrió que en 1917 el marxismo, siempre tozudo y reincidente, reapareció con una revolución triunfante, en una Rusia arrasada por la Primera Guerra Mundial. Este suceso aterrizó a la sociedad occidental y le atragantó el scotch *Royal Lochnagar* a más de un lord.

Ante este nuevo y preocupante escenario de entreguerras, el mundo capitalista empezó a diseñar *su* guerra secreta y comenzó por llamarse a sí mismo “el mundo libre” en guerra contra el “totalitarismo comunista”.

Esta fue (y es) una guerra que se hizo todo el tiempo y con todos los recursos disponibles: armas, invasiones, bloqueo económico y militar, golpes financieros, control de medios masivos de comunicación, desinformación, noticias falsas, campañas mediáticas, operaciones de inteligencia, espionaje en todas sus formas, atentados, asesinatos masivos, asesinatos selectivos, todo lo imaginable y más... porque el objetivo era (y es) la supremacía del sistema a cualquier precio y para eso era imperioso abortar toda posibilidad de surgimiento y desarrollo de un modelo socialista o siquiera alternativo.

Lo que horrorizaba al poder económico mundial, no era sólo la perspectiva de perder *sus* propiedades y el control sobre los medios de producción y los recursos económicos a manos del aluvión colectivista. Aunque no hubieran perdido la posibilidad de conservar sus medios de vida, su vivienda, acceder a la salud, a la educación y las garantías sobre las necesidades básicas, entraron en pánico. Esto era inaceptable, no podían rebajarse a esa situación humillante. No se podía admitir la construcción de un sistema social y económico que tendiera a la justicia y la igualdad de todos, que todos fuéramos efectivamente iguales ante la ley y tuviéramos las

mismas oportunidades en detrimento de su renta ¡no!! ¿cómo admitirlo? ¡Imagínese usted, mi estimado!! ¡Qué ocurrencia!

De haber permitido la construcción en paz de un modelo socialista sin hostigarlo, sin esmerilarlo sistemáticamente, sin demonizarlo, como ocurrió con la URSS, Cuba y China, la comparación hubiera sido un escarnio, una derrota, pero el capitalismo, el occidente cristiano, el poder de los banqueros, del capital financiero y de la Iglesia no estaban dispuestos a tolerarlo. De modo que ese pánico se transformó en odio: odio de clase.

El escenario de esta confrontación a todo o nada que hoy continúa fue, en primera instancia, el territorio de los países “emergentes” o del llamado “Tercer Mundo” o “en vías de desarrollo”, esto es América latina, Asia y África.

Es así que el autodenominado “*mundo libre*” se abocó de lleno a suguerra más importante: la guerra de los muchos nombres, de los muchos demonios: *anarquismo* a fines del siglo XIX y principios del XX, *socialismo y/o comunismo* después, *peronismo* en un momento de la Argentina, *marxismo*, *insurgencia*, *guerrilla*, *terrorismo*, *narco-terrorismo*, *subversión*, *fundamentalismo islámico*, *extremismo*, etc.

La élite de cada país pudo elegir el término más adecuado a su realidad: en Argentina fue desde comienzos del siglo XX, pero en particular durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la guerra contra *la subversión*, *el terrorismo*, *el marxismo* y *la guerrilla apátrida*.

AMÉRICA LATINA: ¿QUÉ PASABA ACÁ?

El Renacimiento europeo significó una revolución, esencialmente económica y cultural y simultáneamente impulsó a los imperios dominantes en Europa (el Reino de Castilla, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, etc.) a expandirse. La Corona Castellana, que pronto se unificaría como Reino de España, fue la avanzada en la búsqueda de nuevas rutas marítimas que ampliaran sus dominios y así llegó, sin saberlo, al continente que hoy llamamos *América*.

Claro que aquello que nos enseñaron en los manuales escolares como un ingenuo y aventurero “descubrimiento” del intrépido navegante Cristóbal Colón, con el fin de conseguir sal y pimienta para la ensalada del Rey y cacao para la merienda de Isabel la Católica y sus cortesanas, fue en realidad una invasión sangrienta con la cruz y la espada como herramientas de dominio, indispensables para sojuzgar a las múltiples culturas que existían desde siglos antes en estas tierras. No vinieron solo por especias, fue el comienzo de un genocidio sin precedentes. Esta parte no nos la enseñaron en la escuela.

El imperio colonial español en América se asentó en un vasto territorio, de ahí que las prioridades imperiales se centraron en el Virreinato de Nueva España (México y Centroamérica) y el Virreinato del Perú, de donde salieron aquellas materias primas que buscaban los Reyes Católicos: oro, plata y otros metales preciosos.

Alejado de esta centralidad, allá en el sur, se encontraba el Virreinato del Río de la Plata al que el imperio español, si bien lo utilizó como una de las rutas de salida de materias primas hacia Europa, le otorgó una importancia menor, dado lo limitado de sus recursos explotables.

En el siglo XVIII, Buenos Aires era una aldea pobre, con una población escasa, mientras que Potosí, por ejemplo, era una ciudad pujante, habitada por más de 150 mil personas, con universidades y con minas llenas de oro, plata y estaño, además de una disponibilidad de mano de obra esclavizada heredada de los Incas de entre 10 y 12 millones de “*indios*”,¹ a los que se sigue llamando “*indios*” perpetuando el error de Colón, pero que en realidad eran (y son) kollas, aymaras, diaguitas, comechingones, querandíes, guaraníes, qom, tehuelches, mapuches, etc. es decir las naciones de pueblos originarios de este continente.

Sin embargo, en el lejano y relegado Río de la Plata, una emergente clase social concentrada en Buenos Aires y Montevideo, beneficiada por las *mercedes de estancia* ², compuesta por unos pocos hacendados y comerciantes, comenzó a amasar fortuna. Desde una posición de dominio sobre la naciente sociedad rioplatense, esa nueva burguesía empezó a madurar la idea de que, en esas grandes extensiones de tierras fértiles llenas de ganado cimarrón, originalmente introducido por los españoles, había una fuente de riquezas tan grande como las minas del Alto Perú.

La “*mina de cueros y carne*” potenció a su vez el excelente vínculo mercantil que estos comerciantes tenían con

¹“*Pampas y Lanzas*” Liborio Justo, (Quebracho), Ed. Palestra, 1962.

²Tierras de las colonias otorgadas graciosamente por el rey a españoles y criollos.

Inglaterra, iniciado desde antaño con el contrabando de mercancías. Por entonces las trabas comerciales y los altos aranceles que imponía el Virreinato español comenzaron a ser un obstáculo que había que eliminar. El nacido en América, el *criollo*, era considerado un súbdito de segunda por los españoles de la península, y esto comenzó a pesar en el ánimo de esos hacendados y comerciantes que querían progresar y ser artífices de su propio futuro.

Manuel de Lavardén, además de poeta y escritor, fue uno de los pioneros de estas ideas en la segunda mitad del siglo XVIII. Formado en la Universidad de Chuquisaca, por donde pasaron luego Moreno, Castelli, Monteagudo y tantos otros, introdujo el concepto de “patria” referido a esa independencia latente que estaba germinando, impulsada por esta nueva burguesía criolla pensante y activa, compuesta por esos hacendados que explotaban la naciente industria del cuero y la carne gracias a la innovación de los saladeros y los comerciantes que introducían, de forma legal e ilegal, las manufacturas inglesas.

Del mismo modo que dos siglos antes Ruy Díaz de Guzmán, nieto de Irala nacido en Asunción fue de los primeros en usar el término *patria* aplicándolo a su ciudad natal, este clan social se atribuyó la representación del conjunto de la sociedad porteña y encadenó el concepto de *patria* y prosperidad a su propio progreso y a sus propiedades.

Fueron ellos los que terminaron finalmente de dar contenido y forma a la Revolución de Mayo, desplazando cualquier ideario que cuestionara su hegemonía. Así aquella Revolución de Mayo más radicalizada, impulsada por Moreno, Castelli, Monteagudo, entre otros, se desdibujó y fue un fenómeno que se desarrolló centralmente en el río de la Plata, más precisamente en Buenos Aires, y al que el resto del Virreinato,

observó a la distancia, algunos con desconfianza otros con indiferencia. Para Juan Bautista Alberdi fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires, sobre las provincias argentinas. El coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español.³

Desde el rechazo a las invasiones inglesas de 1806/7, pasando por la independencia del Imperio Español entre 1810 y 1816, fue el momento de la historia argentina en que el naciente Ejército Nacional, surgido en esas lides, tuvo un papel progresista ligado a las ideas independentistas y de unidad latinoamericana que enarbolaron militares como San Martín, Belgrano, Bolívar, O'Higgins, Güemes, Artigas y tantos otros.

Pero en el vértigo de esas luchas de ideas anidaban dos proyectos contrapuestos, como lo señala Dardo Scavino: "En la narración americana la revolución venía a establecer la igualdad entre los diversos grupos; en la narración criolla la revolución venía a restablecer la superioridad de los criollos. Las revoluciones hispanoamericanas instauraron, por un lado, el principio de igualdad republicana de todos los ciudadanos y, por el otro, el principio de hegemonía política de esa minoría criolla"⁴

Es así que el flamante Ejército Argentino (EA) terminó ligado y asociado a las ambiciones de esa minoría criolla y las efímeras glorias soberanas de 1806/7, del combate de San Lorenzo y las gestas sanmartinianas, quedaron congeladas en los manuales escolares y en el bronce inerte de los monumentos.

³Juan Bautista Alberdi, *Escritos Póstumos*.

⁴*Narraciones de la independencia, arqueología de un fervor contradictorio*, Dardo Scavino pág. 55. Editorial Eterna Cadencia 2010.

EL PROBLEMA DEL INDIO (PARA LOS CRIOLLOS) Y DE LAS MONTONERAS Y EL PARAGUAY (PARA LOS PORTEÑOS E INGLESES)

“¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”.

Domingo Faustino Sarmiento. El Progreso, 27/9/1844; El Nacional, 25/11/1876.

Si bien las invasiones inglesas fueron derrotadas, la penetración imperial, en este caso inglesa, se produjo por otros medios. George Canning, ministro británico, lo enunció alguna vez con aguda astucia: “No debemos entrar como guerreros sino como mercaderes”. Y así fue. Debemos tener en cuenta que Inglaterra estaba en plena revolución industrial y necesitaba desesperadamente nuevos mercados donde colocar sus productos.

En la medida en que se fue asentando una clase dirigente criolla, económicamente acaudalada, que pasó de la dependencia del alicaído imperio español a estrechar vínculos económicos y políticos con el pujante imperio inglés, el Ejército en formación, fue cooptado y lanzado a combatir a los opositores internos del momento.

El discurso en esa oportunidad fue la *civilización y el progreso*. Había que integrar al país territorial y socialmente, y en esa línea hubo un largo y cruento camino de disciplinamiento de todos aquellos que no comulgaran enteramente con este nuevo ideario.

Los más díscolos fueron los caudillos de las provincias más alejadas de la metrópoli que se oponían al dominio porteño, también el Paraguay gobernado por José Gaspar Rodríguez de Francia, sucedido por Carlos Antonio López y luego por su hijo, Francisco Solano López, quienes pusieron en marcha un pujante modelo económico y social soberano. Finalmente estaban los *indios* que ocupaban las extensas y fértiles tierras pobladas de ganado cimarrón, pretendidas por la naciente oligarquía criolla.

La disputa por la tierra, que fue (y sigue siendo) central, ya se arrastraba desde el inicio de la colonización española, pero fue en este siglo, el XIX, que el proyecto de expansión de la oligarquía criolla se consumó.

A las tierras ya usurpadas se sumaron nuevas extensiones a través de la Ley de Enfiteusis, dictada por Bernardino Rivadavia en 1826. Aun cuando el espíritu de esta ley aparentemente fue fomentar la agricultura, quienes hicieron el reparto fueron ni más ni menos que los grandes apellidos de la oligarquía criolla y, de esa manera “corriendo el alambrado”, incorporaron miles de hectáreas más a sus ya

extensas estancias. “Basta leer las listas de enfiteutas para comprobarlo. La mayoría de los nombres son bien conocidos. Los oímos pronunciar todos los días [...] Los llevan los personajes más encumbrados de nuestro gran mundo [...] han de haber estado lejos de sospechar que la tierra pública que el gobierno concedía en el año 1822, de valor ínfimo, casi nulo, convertiría en millonarios a sus descendientes de tercera y cuarta generación, haciéndolos dueños del suelo de la provincia.”¹

Se repartieron 8.600.000 hectáreas entre 538 propietarios. ¡Una bicoca!

Algunos de los apellidos famosos “beneficiados” fueron: Anchorena, Alvear, Álzaga, Ezcurra, Ortiz Basualdo, Sáenz Valiente, Gowland, Lynch, Miguens, Ocampo, Arroyo, Bernal, Otamendi, y tantos otros.

En cuanto al Paraguay se ejecutó un crimen aún mayor: la *Guerra de la Triple Alianza* en 1865. Esta alianza entre Buenos Aires, Montevideo y el imperio brasileño, estimulada por Inglaterra, en cinco años de guerra encarnizada, acabó con el 90% de la población masculina del único país de Latinoamérica que había logrado un sorprendente desarrollo económico y social, independiente de cualquier imperio. De esta destrucción y genocidio el Paraguay aun no pudo reponerse. Esa guerra se sostuvo sobre tres pilares: uno fue el escarmiento ideológico contra ese único país económicamente próspero, soberano y autónomo que, a los ojos del imperio inglés, daba un mal ejemplo a la región, el segundo fue quebrar cualquier posible alianza con las

¹Jacinto Oddone: *La burguesía terrateniente argentina*, pág. 75, Ed. Populares Argentinas, Buenos Aires 1956, citado por Juan José Sebrelli en *Los Oligarcas*, pág. 23/24, Ed. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1971.

montoneras de los caudillos federales de las provincias en contra del dominio de sus socios porteños y, finalmente el tercero fue lograr el control territorial y la libre navegación de los ríos para extender definitivamente el “libre comercio” tan ansiado por los británicos.

Vale la pena citar a Edward Thornton, representante británico ante Buenos Aires, para acceder a una muestra cabal del pensamiento imperial de la corona británica. En un despacho a Lord Russell fechado en Asunción el 6 de septiembre de 1864 vuelca sus impresiones sobre Paraguay: “Cabría suponer que semejante tiranía, como no titubeo en calificarla, no podría durar mucho. No pienso, sin embargo, que ningún cambio sea inminente. La gran mayoría del pueblo es suficientemente ignorante como para creer que no hay país tan poderoso o tan feliz como el Paraguay, y que ese pueblo ha recibido la bendición de tener un presidente digno de toda adoración (...) Habrá tres o cuatro mil que saben más y para quienes la vida bajo tal gobierno es una carga (...) Si a la larga se produjera una revolución, sería traída por los paraguayos que ahora se educan en Europa, o *será la obra de una invasión extranjera* o de un ejército paraguayo en campaña en el exterior.” Al año siguiente los anhelos de Mr. Thornton estaban en vías de cumplirse² (las cursivas son nuestras).

Existe una gran cantidad de trabajos e investigaciones referidas al genocidio paraguayo. Sería importante releer y profundizar sobre el tema, para no perder de vista la dimensión política y social de ese episodio ocurrido en el siglo XIX, que dejó una marca indeleble en el proceso de unidad latinoamericana cuyas secuelas persisten aún hoy.

²El Paraguay de Francia el Supremo a la guerra de la Triple Alianza, Vivian Trías, cuadernos de Crisis n°19, pág. 49. Ed. Del noroeste. 1975.

El sector más liberal de nuestra clase política y nuestro Ejército, fueron un engranaje fundamental de la maquinaria utilizada para perpetrar semejante crimen, un dato para nada menor si se tiene en cuenta que el EA fue adoctrinado para invadir un país vecino, echando por la borda todos los principios de defensa de la soberanía y respeto a los países de la región. Es así que muchos autores e investigadores rebautizaron a esa guerra como la guerra de la *Triple Infamia*.

Al iniciarse las hostilidades el general Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación, arengó desde los balcones de su casa en la calle San Martín 336 de Buenos Aires: “En 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en tres meses en Asunción.”³ Pero fueron cinco años de sangrienta y encarnizada lucha de tres países contra un heroico pueblo paraguayo que resistió en los campos de batalla hasta la última gota de sangre junto a su presidente, Francisco Solano López, que cayó combatiendo en la batalla final de Cerro Corá el 1 de marzo de 1870.

Un dato por demás oprobioso que da cuenta de la crueldad sin límites de los ejércitos aliados fue la masacre de Acosta Ñu ocurrida en 16 de agosto de 1869, cuando una diezmada tropa paraguaya de 500 soldados y 3.500 niños de entre 9 y 15 años tuvieron que enfrentar al ejército brasileño compuesto por 20.000 hombres. Fueron arrasados, y el comandante brasileño, el conde D’Eu, ordenó pasar a degüello a todos los sobrevivientes, varones y niños. Las madres, que observaban desde un bosque cercano con los niños más pequeños, fueron rodeadas e incendiaron el bosque. Nadie sobrevivió. Es por esto que en Paraguay el día del niño es el 16 de agosto. No se celebra, solo se conmemora.

³Vivian Trías, Óp. Cit. Pág. 76.

Sobre los cadáveres aún humeantes del pueblo paraguayo se terminó de conformar un ejército argentino ya permanente y de alcance nacional.

El exterminio continuó, con prisa y sin pausa, tanto contra los caudillos federales que buscaban una integración más democrática y mejor repartida y se oponían a que las decisiones se tomaran sólo en Buenos Aires, como también con las tristemente célebres *Campañas al Desierto* para erradicar al *indio*. En el primer caso hubo que diferenciar entre aquellos caudillos federales de las provincias más alejadas de la metrópoli de otros que eran referentes de las provincias más ricas, con mayor peso político y más roce con la clase acomodada porteña, dada su pertenencia a la élite dominante.

Entre estos últimos podemos señalar el caso de Justo José de Urquiza, un acaudalado estanciero del litoral que prefirió concretar muy buenos negocios, entre otros con Brasil, aunque ello implicara hacer la vista gorda ante el genocidio paraguayo. Otro ejemplo fue Juan Manuel de Rosas que, además de ser un referente federal, fue también un poderoso estanciero bonaerense que participó activamente en la campaña contra el *indio* en la provincia de Buenos Aires. Solo basta revisar la historia y el destino final de cada uno de los líderes federales para entrever las diferencias. La interminable guerra civil iniciada por los unitarios-porteños contra las montoneras federales del interior, fue lo que se conoció como las guerras punitivas o “guerras de policía”, como las llamó Mitre. Los más perseguidos fueron aquellos caudillos de las provincias más alejadas y menos favorecidas: Facundo Quiroga, caudillo riojano, fue ultimado en una emboscada en Barranca Yaco en 1835 y el Chacho Peñaloza, también riojano, fue arrinconado por el Ejército Nacional en la pequeña localidad riojana de Loma Blanca, lanceado, luego

degollado y su cabeza exhibida en una pica en 1863. En tanto Urquiza fue asesinado por sus propias huestes en su confortable palacio de San José en 1870. Rosas, luego de ser derrotado en la batalla de Caseros, marchó al exilio dorado en Southampton, Gran Bretaña en 1852.

Como detalle de época y para destacar la sorprendente continuidad de ciertas metodologías para resolver los conflictos políticos, podemos mencionar que durante el gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires (1835-1852) se conformó un grupo parapolicial, *la Mazorca*, que se encargó de aplicar correctivos a aquellos opositores a Rosas o sospechosos de serlo, con diversos niveles de violencia que incluyeron el asesinato y el ensañamiento. Podemos citar el libro *Mueran los salvajes unitarios*, de Gabriel Di Meglio que desarrolla un interesante y detallado estudio sobre el surgimiento de esa organización: “Lo que en verdad distinguió a los mazorqueros de otros restauradores no fue que estuvieran dispuestos a llevar su fervor por Rosas hasta las últimas consecuencias, sino que casi todos ellos eran a la vez parte de la Policía. La Mazorca fue un grupo que podemos llamar parapolicial, integrado mayormente por empleados de la Policía en actividad” y ¿qué era la Policía en aquella época? “La institución era pequeña y se remontaba al período revolucionario inicial, fue creada en diciembre de 1811”.⁴

Claro está que no fue Rosas quien inauguró estos “métodos”, en realidad eran moneda corriente en la sociedad de la época, donde el degüello, “pasar a cuchillo” o exhibir la cabeza de un opositor político en una pica estaba naturalizado y se expresaba con crudeza en obras literarias como *El matadero*, de Esteban Echeverría, el *Facundo* de Sarmiento, *Amalia* de

⁴Ver ¡*Mueran los salvajes unitarios! la Mazorca y la política en tiempos de Rosas*, Gabriel Di Meglio, pág. 81 y 82, Ed. Sudamericana. 2007.

José Mármol, o el poema de Hilario Ascasubi, *La refalosa*, que no es ni más ni menos que un poema dedicado al degüello. A la vez, estas obras de amplia difusión en aquel momento, destilaban un profundo odio de clase.

Mientras los unitarios-porteños volcaban en las grandes obras literarias del siglo XIX una esmerada y abundante descripción del horror y la crueldad de las huestes federales y descalificaban la violencia de sus rivales políticos, instrumentaban a la vez los mismos métodos contra ellos.

El caso de la *Mazorca* se destaca más que nada por su organicidad y vinculación con el Estado de ese momento representado por las figuras de Rosas y de su mujer, Encarnación Ezcurra. Sin duda es un antecedente por demás relevante de que nuestra policía, desde sus orígenes, ya hacía horas extras incursionando en la represión ilegal, bajo la forma de grupos clandestinos, parapoliciales organizados desde el Estado.

El primer Triunvirato creó un cuerpo de vigilancia centralizado en una Intendencia de Policía, que luego se tradujo en una reestructuración más orgánica en 1821, durante la gestión de Bernardino Rivadavia como Ministro de Gobierno. Queda de manifiesto los estrechos vínculos entre el poder económico y la clase política de la época con las nacientes instituciones armadas como la Milicia, (luego Ejército Nacional) y la Policía a la hora de imponer modelos políticos y de disciplinar a los disidentes.

Una breve reseña histórica nos pondrá al tanto de los orígenes y mandatos de la institución Policía en nuestro país. El trabajo de investigación realizado por el comisario general

e historiador Adolfo Enrique Rodríguez⁵ nos habla de ello. En el siglo XII surgió en España la institución de la *Santa Hermandad*, avalada por la Corona, donde en las poblaciones se organizaron cuerpos armados para protegerse de las bandas de salteadores y ladrones de caminos. Esta idea se replicó en estas tierras y a mediados del 1600 se instrumentó con el título de *Alcaldes Ordinarios*. Quienes las integraban, para ser avalados por el Cabildo, debían ser vecinos reconocidos, poseer casa, estar casados, tener caballos, tener armas y saber leer y escribir.

Semejantes requisitos dejaban afuera a la amplia mayoría de la población, por esa razón lo más habitual era que los Alcaldes fueran comerciantes o estancieros pudientes. Tenían funciones policiales y judiciales y las facultades policiales eran muy amplias, su misión entre otras, era la represión de vagos, viciosos, ebrios y malentretenidos, asistir a los ganaderos que denunciaban robos de reses, celar las ofensas a Dios, pecados públicos, robos, muertes, heridas, prevenir raptos y violaciones de mujeres *honestas*. En cuanto a esto último se había dispuesto que las mujeres “*mal opinadas*” tuvieran vivienda alejada de las *honradas*, lo que derivó en el desalojo hacia los arrabales de las “*mal opinadas*” que vivían en la ciudad.

Las penas por lo general eran muy severas: por robar o hurtar por primera vez el reo era quemado con un hierro al rojo en la espalda, dejándole una marca que lo identificaba como ladrón. Si reincidía terminaba en la horca. Las infracciones eran castigadas con mayor severidad aún si los acusados eran *indios*, negros o mulatos, quienes, por cierto, eran los más

⁵*Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio, génesis y desarrollo desde 1580 a la fecha*. Crio. Gral. (R) Lic. Adolfo Enrique Rodríguez y Crio. Insp. (R) Eugenio Juan Zampietro, Ed. Policial, 1999.

pobres de la sociedad. En el caso de los individuos de origen africano, que habían llegado a estas tierras secuestrados y esclavizados por los imperios español y portugués, eran el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires y más del 50% en provincias como Santiago del Estero.

Hacia 1815 se instrumentó la Ley de vagancia y el uso de la *papeleta de conchabo*. Se calificaba de *vagos* a quienes no tuviesen la papeleta que funcionaba como comprobante de trabajo. Esta ley se aplicó centralmente en la campaña a través de un Bando a la Policía Rural que custodiaba las estancias. La papeleta de conchabo era otorgada por los patrones de las estancias. El gaucho, peón golondrina o “no propietario” que careciera de ella era arrestado y luego de un tiempo en el cepo era enviado, como condena, a la milicia en la línea de fortines por uno o cinco años de acuerdo a la gravedad de la contravención.

Pero el marcado carácter punitivo de la legislación no se limitó solamente a hechos relacionados con la moral pública, delitos contra la propiedad o el conflicto social, también abarcó a aquellos considerados *delitos de opinión*, lo que orientó la persecución hacia los opositores políticos. Un ejemplo elocuente fue la “Instrucción para el desempeño de los alcaldes de barrio” donde, entre otros deberes, estaba el de “descubrir a las personas adictas a las máximas francesas”.⁶

La Policía como institución siguió desarrollándose en la medida que crecía la población y se complejizaba el entramado social. En el año 1821 comenzó a consolidarse como tal con el reordenamiento jurídico y organizativo y el

⁶Cuatrocientos años de Policía en Buenos Aires, Crio. Adolfo Enrique Rodríguez, pág. 41. Editorial Policial, 1981.

nombramiento del primer Jefe de Policía, cargo que recayó en Joaquín de Achával.

Si bien, como menciona Di Meglio, era una institución pequeña en esa época, no dejó de crecer y de sumar mayor peso y atribuciones en consonancia con las demandas que emanaban del poder de turno. Luego del derrocamiento de Rosas, la Policía quedó identificada, ante los ojos de la sociedad, como una institución oscura y brutal, vinculada a la Mazorca. Esto generó un rico debate entre los intelectuales de la época (Sarmiento, Alberdi, Vicente Fidel López, entre otros) sobre cuál debía ser el eje de la organización policial.

Para hombres como Alberdi la reforma de Rivadavia había destruido la potestad de los Cabildos que elegían y controlaban a la policía y la había convertido en una estructura militarizada, autoritaria y verticalista al estilo del “modelo francés”. Este modelo se oponía al “modelo anglosajón”, que proponía una policía “*popular*”, respetuosa de los derechos civiles y subordinada al control de los vecinos, a través de los miembros del Ayuntamiento.⁷

A su vez Vicente Fidel López acompañó esta opinión afirmando que “...no hay garantía verdadera para las libertades individuales y públicas. En lugar de esto quedó imperando un Departamento de Policía que, por su carácter más militar que civil, era poco compatible con los fundamentos del gobierno libre, liberal y representativo, aunque contenía medidas excelentes sobre higiene, mejoras y

⁷*Elementos de derecho público provincial para la República Argentina*, Juan Bautista Alberdi, 1853.

represión de riñas, uso de armas, etc. tanto en la ciudad como en la campaña.”⁸

Finalmente, para disgusto de Alberdi, prevaleció el “modelo francés”, influencia que se repetirá, en la segunda mitad del siglo XX sobre las FFAA, como veremos más adelante.

En cuanto a la guerra contra el *indio* podemos mencionar a un militar argentino que concentró en su trayectoria el perfil de país y de Ejército que heredamos en el siglo XX: el general Julio Argentino Roca, dos veces presidente de la nación (1880 y 1904) y célebre impulsor de las *Campañas alDesierto*, destinadas a exterminar al *indio* con el fin de consolidar la hegemonía territorial y vigorizar el modelo agro exportador de la flamante generación del ´80.

Para esto fue imperioso aniquilar las culturas originarias, en esta línea la consigna que sintetizó esta política fue “civilización o barbarie”, puesto que había que demonizar al *otro* para legitimar el genocidio y de ese modo proceder al arrebato de millones de hectáreas de tierras fértiles y millones de cabezas de ganado cimarrón, de acuerdo al censo de 1888.⁹ Ya en ese entonces términos como *exterminar* y *aniquilar* al *otro* se fueron arraigando en el léxico tanto del EA como de la sociedad.

Los intelectuales y la clase política de la época jugaron un rol destacado en la instalación de estos conceptos. Luego de consumado el genocidio paraguayo de la mano de Bartolomé Mitre y la Triple Alianza, los nombres más destacados de la política del momento se unieron, por acción u omisión, para

⁸*Historia de la República Argentina*, Vicente Fidel López, tomo V, pág. 74. Editorial Sopena, 1970.

⁹ VerCenso 1888.

llevar a cabo la erradicación definitiva del “problema del *indio*”. Además de Esteban Echeverría con su poema *La Cautiva*, la filosa pluma de Sarmiento, según consta en la cita que inicia este capítulo, fue fundamental en la formación de una opinión favorable a la “civilización” y demonizadora de la “barbarie”, sentencias que aún hoy siguen siendo enarboladas por los herederos de la oligarquía criolla. Si bien Sarmiento estaba fascinado con el modelo de colonización de América del norte, que promovía el reparto de tierras entre colonos europeos para trabajar la tierra y edificar sobre ésta un país blanco y pujante, fue funcional al modelo que finalmente prevaleció aquí, es decir el de grandes latifundistas que arrendaban parcelas de sus inmensas estancias y vivían de la renta y la exportación de materias primas. Algo bastante parecido al viejo y atrasado modelo del imperio español.

Para mayor precisión podemos citar a Milcíades Peña quien señala “En resumen, la conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 personas. De tal modo queda sellado, lacrado y remachado el proceso de acumulación latifundista.”¹⁰. Todo esto sin contar el saqueo de los siglos anteriores.

En este punto es importante reflexionar ante el hecho de que el joven Ejército Argentino, luego de la campaña contra Paraguay, se abocó durante la segunda mitad del siglo XIX a la guerra contra el *indio*. Conocida, y sólo conocida, bajo la denominación *campaña del desierto* en el relato historiográfico oficial, fue invisibilizada y vaciada de contenido. Pero... ¿por qué? Evidentemente la premisa de nuestro Ejército de “defender las fronteras de la patria ante el

¹⁰*Historia del pueblo argentino (1500 1955)* de Milcíades Peña, pág. 322. Emecé (Grupo Editorial Planeta) 2012.

enemigo externo” como lo hizo durante las invasiones inglesas, no se verificó en esta oportunidad, puesto que era ese Ejército, era esa “patria” venida de Europa, la que estaba invadiendo tierras ajenas, o al menos habitadas por otras culturas desde mucho antes.

Lo confirma el destacado intelectual y político de la época, Estanislao Zeballos en su obra *Laconquista de quince mil leguas*: “... pero una vez realizada la gloriosa batida en la llanura, acampadas en triunfo nuestras tropas sobre la margen del río Negro, sin enemigos a retaguardia, aquellos campos se verán libres de salvajes, y las estancias de argentinos y de ingleses que ya se acercan a Choele-Choel, prosperarán tranquilas y seguras, sirviendo de base a nuevos centros de población y de trabajo.”¹¹

Desde la llegada de los españoles la relación con las diversas naciones originarias – se sabe - fue de diálogo y enfrentamiento permanente en todo el continente. Tal vez Juan Manuel de Rosas, durante su campaña contra el *indio* en la provincia de Buenos Aires, fue quien mejor comprendió la opción de generar una política de diálogo con ciertas tribus en función de alejarlas de otras más beligerantes. De hecho, la política de *seducción* que Rosas implementó con los caciques Juan Catriel y Juan Manuel Cachul rindió claros resultados a favor de los blancos criollos que pudieron seguir extendiendo cada vez más allá la línea de fronteras en la provincia. Las huestes de Catriel y Cachul conformaron un colchón protector entre la línea de fortines y los malones de las tribus más belicosas. Este *negocio pacífico*, porque de eso se trataba, ya venía de la época de la colonia, pero fue Rosas quien lo institucionalizó como estrategia permanente. El negocio

¹¹ *La conquista de quince mil leguas*, de Estanislao Zeballos. Capítulo III, pág. 315. Editorial Hyspamerica.

incluía regalos, paseos por Buenos Aires, banquetes, agasajos, abastecimiento de insumos, mercaderías y caballos para toda la tribu, a cambio de sumarse como auxiliares del Ejército e inclusive como combatientes. Pero lo cierto es que nunca hubo, más allá de falsas promesas, un reconocimiento de derechos sobre las tierras que las naciones originarias habitaban. Del mismo modo esta política de seducción sirvió para dividir y para inclinar a algunas huestes aborígenes a favor de los porteños o de la Confederación durante las guerras entre unitarios y federales.

Cientos de documentos y cartas testimonian la intención de las distintas comunidades originarias de convivir en paz. “*Hay lugar suficiente para indios y cristianos*” reflexionó el cacique tehuelche Lorenzo, a fines del siglo XVIII. Claros fueron los argumentos que los nativos plantearon: “*yo no sé por qué quiere usted sacarnos de mi tierra. Yo no le he quitado a su pueblo; yo estoy en tierra propia y usted sí que está en tierra ajena*”, reza un fragmento de una de las cartas que le envió el cacique Vicente Pincén al coronel Hilario Lagos, jefe de frontera norte y centro de la provincia de Buenos Aires en 1874¹². Pero no; aquí no valieron los “derechos adquiridos” que luego de consumado el despojo, la misma oligarquía y el EA hicieron valer con vehemencia a su favor para legitimar semejante latrocinio. El EA reforzó, de este modo, su alianza ideológica con la oligarquía criolla en esta larga guerra que fue enorme, terriblemente cruenta y que muchas veces estuvo a punto de perder.

Al tiempo que adulteró su contenido y se la disfrazó de falsa gloria y engañosos honores para disimular la ilegitimidad de la campaña, la oficialidad del EA obtuvo, como recompensa,

¹²*La Argentina de los caciques o el país que no fue*, Carlos Martínez Sarasola, Ed. El Nuevo Extremo, 2012 pág. 268.

miles de hectáreas para su usufructo y su inclusión definitiva en la élite dominante que fue la generación del `80. Otra quizás habría sido la historia si no se hubiese concretado en 1872, bajo la presidencia de Sarmiento, la compra del primer fusil oficial del EA: el moderno Remington “Patria” procedente de EEUU que vino a reemplazar a los viejos fusiles a chispa. Entre esa fecha y 1891 fueron 75.000 los Remington con los que se equipó al EA que luego serían reemplazados por el Máuser de origen alemán. Este dato tecnológico sumado a la incorporación del telégrafo y del ferrocarril fueron elementos determinantes para el éxito de las “*campañas al desierto*”.

Una vez más fue Sarmiento, la voz que más claramente verbalizó la concepción ideológica y cultural del país que se estaba cimentando. En un discurso pronunciado ante los diputados y senadores de la Nación, el 20 de septiembre de 1866 dijo: “Cuando decimos ‘pueblo’ entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gente decente. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues, no ha de verse en nuestro Congreso ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir patriota”.

A partir de aquí el país será otro, moldeado en la indeleble matriz social, cultural y económica incrustada por el imperio español. El *sentido común*, los debates y las posturas políticas estarán dentro del marco del mundo occidental, incluida nuestra propia mirada de la historia. De ese modo se arraigó la oligarquía local, asociada al imperio inglés, conocida como “la generación del ´80”, que institucionalizó el país y consolidó el modelo de Ejército que tenemos hasta hoy.

Sin embargo, toda esta etapa de nuestra historia, no estuvo exenta de fuertes crisis económicas y políticas. Tal vez la más recordada de ese fin de siglo fue la crisis de 1890, que

contribuyó al surgimiento de un movimiento político, integrado por estudiantes y jóvenes profesionales, que se oponían a la arbitrariedad y los turbios negocios de la elitista oligarquía gobernante y reclamaban la ampliación de esa democracia restringida a través del sufragio universal. Sus consignas fueron “moral administrativa” y “libertad de sufragio”. Los sectores más radicalizados de esta naciente Unión Cívica Radical produjeron el 26 de julio de 1890 una insurrección armada conocida como “*la Revolución del Parque*”.¹³ Fueron dos días de cruentos enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno y los rebeldes que contaron con apoyo de algunos sectores del EA. Finalmente, la rebelión fue derrotada dejando un saldo de aproximadamente 300 muertos y cientos de heridos. Más allá de la violencia armada a la que recurrió la Unión Cívica, sus postulados no cuestionaban la estructura económica del modelo agroexportador; su reclamo central era un espacio de mayor participación política a través del voto universal que, como veremos más adelante, se puso en práctica recién en 1912 en Santa Fe y Buenos Aires y en 1916 fue la primera elección presidencial. Pero volvía a repetirse el recurso de las armas por parte de sectores civiles, frente a la displicencia del poder ante esas demandas.

En esta apretada exposición, se puede advertir durante el siglo XIX una persistente cultura del uso de la violencia extrema -física y verbal-, tanto con fines de control político y social por parte de quienes detentaron el poder del Estado, como también como expresión de rebeldía de los diversos sectores sociales emergentes, que fueron acallados a fuerza de cepo, sable y fusil. Esta tendencia, como veremos, perdurará y se profundizará en el futuro bajo otras muchas modalidades.

¹³ Ver María Cecilia Míguez en *Historia de la Economía Argentina del Siglo XX*, Alfredo Zaiat y Mario Rapaport, Ed. Página 12, 2010 páginas 28/29.

Queda planteado entonces, que las FFAA en Argentina y en muchos países de la región, ya desde el siglo XIX, asumieron el rol de controlar y reprimir fronteras adentro. Las FFAA nunca estuvieron ajenas a los vaivenes políticos y sociales del país a la hora de dirimir espacios de poder y fueron casi siempre el ariete del poder de turno, que se propuso eliminar o al menos impedir a sangre y fuego, el ascenso y la participación de los nuevos movimientos sociales y políticos emergentes. Esta política continuó así hasta nuestros días.

SIGLO XX, CAMBALACHE.

“...a los muertos los apilaban uno sobre otro, les clavaban el cuchillo en la nuca por si estaban vivos, desde ese día tenía miedo de volver a trabajar porque nos miraban con odio, como si fuéramos perros sarnosos.”

Anotación en el cuaderno del capataz Aniceto Barrientos, después de la represión en La Forestal.

El nuevo siglo trajo consigo conflictos diversos y de variada intensidad.

Los turbulentos acontecimientos europeos, tuvieron un reflejo inmediato en las ex colonias americanas. La arrolladora revolución industrial, los descubrimientos y el avance tecnológico, rebotaban y se expandían por todas partes. Los cambios sociales y políticos que generaron estos sucesos produjeron a su vez una gran crisis de ideas y el surgimiento de otras nuevas.

Las guerras y las permanentes disputas territoriales en la Europa monárquica hicieron que, buena parte de esa gran maquinaria productiva en pleno desarrollo, fuera puesta al servicio de la industria bélica.

Entre las nacientes grandes fundiciones de acero, se destacó la empresa fundada por Friedrich Krupp en la ciudad alemana de Essen. Fue esta firma la que, en 1844, construyó el primer material de guerra en acero fundido: un cañón de 50 toneladas que fue expuesto en la exposición de París de 1855. Luego la empresa inauguró el Gran Pabellón Krupp donde

instaló una imponente muestra de armas modernas durante la exposición colombina de 1893 en Chicago, lo que marcó un claro indicio de que el convulsionado mundo capitalista se preparaba para grandes guerras.

En este marco el EA también se alistaba para la nueva era e ingresó, como veremos, al nuevo siglo signado por novedosos conflictos sociales.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, desde una Europa agitada donde muchos veían a “*América*” como la posibilidad de un futuro próspero y prometedor, fueron llegando numerosos contingentes de inmigrantes europeos que trajeron, además de su fuerza de trabajo y sus sueños, nuevos saberes y nuevas ideas surgidas durante la revolución industrial, entre ellas el marxismo, el anarquismo y la novedad del socialismo.

Dentro de los países capitalistas, tanto los centrales como los emergentes, la incipiente clase obrera comenzó a organizarse y a luchar por sus modestas reivindicaciones. En Argentina, durante las primeras décadas, esas luchas fueron aglutinadas por los anarquistas y los socialistas que introdujeron la sindicalización de la clase obrera, como forma organizativa unificada para reclamar por sus derechos laborales.

La novedad y los cambios cada vez más vertiginosos pusieron en crisis la identidad de ese modelo de país, joven por cierto, celosamente diseñado por la generación del ´80. La alarma se esparció entre la rancia y apoltronada élite dominante, motivo por el cual estos acontecimientos no estuvieron exentos de la desmedida violencia represiva que, como respuesta, se instrumentó desde el Estado.

Como se señaló, el predominio de las ideas anarquistas y socialistas entre los obreros y el desconcertante triunfo de la Revolución Rusa en 1917, inquietó en extremo al poder capitalista mundial y la oligarquía local no fue la excepción. Para ella y para los intereses de la corona británica en el país todo conflicto social olía a *comunismo*. La clase obrera olía a *comunismo* cuando solicitaba jornada laboral de ocho horas, aumento del salario, derecho a agremiarse, descanso dominical, seguridad en el trabajo y vacaciones pagas. La irrupción de todos estos reclamos verbalizados, a veces, vehementemente por esa masa de desarraigados de dudosa higiene y escasa instrucción, era algo que nunca se había visto por estos lares. A la vez todo lo que redujera los márgenes de ganancia de los empresarios era apuntado como *comunismo*. De este modo lo subrayó el escritor David Viñas: “Y en relación a Eduardo Wilde – primer ministro *in partibus* del inaugural gobierno de Roca- es quien resalta el tránsito desde 1880 al segundo gobierno del ‘Héroe del Desierto’, dado que el eje problemático de la élite señorial se ha desplazado del problema de ‘las tolдерías bárbaras’ hacia las ‘tolдерías rojas’[...] Al fin y al cabo no eran tantos años: desde 1871 las élites se ponían histéricas ante el solo nombre de ese acontecimiento revolucionario de París despiadadamente reprimido”¹.

Pero la oligarquía no ignoraba la situación de la clase obrera, al contrario, fue un ítem preocupante incluido en su agenda. Fue el general Julio A. Roca quien, durante su segunda presidencia en 1904, acordó con su ministro del Interior, Joaquín V. González, encargarle al doctor Juan Bialet Massé la tarea de elaborar un informe de situación de la clase obrera de la época. Joaquín Víctor González era de los personajes

¹*Literatura argentina y política, de Lugones a Walsh*, David Viñas, página 14. Ed. Sudamericana 1996.

más lúcidos, entre los funcionarios del gobierno conservador y, tal vez como político, historiador y educador como era, aspiraba a entender la nueva situación planteada por la revolución industrial y la inmigración europea.

Luego de una minuciosa investigación y un profundo trabajo de campo realizado por Biale Massé, el resultado fue lapidario en cuanto a la claridad y crudeza con que describió la situación de pobreza y explotación extrema de los trabajadores argentinos en todo el país. Pero de poco sirvió el laborioso informe “*El estado de las clases obreras argentinas*” de Biale Massé²; si bien el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reformas laborales elaborado por el propio Joaquín V. González (Ley del Trabajo), éste fue rechazado por un Congreso dominado por los tradicionales apellidos criollos de alta alcurnia, y tanto el proyecto de ley como el trabajo de Biale Massé se diluyeron en el olvido.

La élite oligárquica, ya tenía claro cómo sosegar a sus trabajadores y creó las herramientas legales que respaldaron esa tarea. Se promulgó la *Ley de Servicio Militar Obligatorio* en 1901, de esta manera no solo se proveyó de “carne de cañón” al EA y la Policía, sino que también sirvió para domesticar a aquellos jóvenes pertenecientes a los sectores sociales excluidos y combatir la penetración de las ideas de izquierda entre ellos. La creación de un Servicio Militar Obligatorio no es un dato menor, dado que en esta propuesta confluyeron varios objetivos: acercar a las clases populares al EA, mantener un firme control social sobre los jóvenes pobres, marcarles el cuerpo y la mente con la rígida y violenta disciplina marcial y darles un lugar de referencia desde donde mirar la sociedad en la lógica binaria de “patria o

²*Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzo del siglo*, Juan Biale-Massé, Centro Editor de América Latina (tres tomos). 1985.

antipatria”. A la vez puede entenderse como la primera política pública del Estado hacia ese sector al que proveyó de alimento, techo, vestimenta y reconocimiento social a cambio de portar un arma y obedecer ciegamente a la consigna “subordinación y valor para defender a la Patria”.

A pedido de la Unión Industrial Argentina, el senador Miguel Cané impulsó la sanción en 1902 de la *Ley de Residencia*³ para detener a aquellos extranjeros, (más del 30% de la población del país en esa época y en la ciudad de Buenos Aires llegaba al 50%) que traían ideas de izquierda, lo que permitió expulsar del país a socialistas, marxistas y anarquistas, con un trámite simple y rápido. A la vez se reprimió a sangre y fuego las huelgas, como fue el caso de la gran huelga de inquilinos de 1907 y la conmemoración del 1º de mayo de 1909.

Al año siguiente fue sancionada por el Congreso en solo 48 horas la *Ley de Defensa Social* (ley 7029), que prohibía y castigaba duramente toda forma de organización social, de manifestación o demanda y habilitaba al Poder Ejecutivo a arrestar a *sospechosos* de adherir al anarquismo. El carácter de dicha ley, autoritario y violatorio de todo derecho individual o social al reclamo y a la petición, era una clara evidencia de las limitaciones políticas de la vieja élite gobernante para resolver o canalizar las disputas sociales del nuevo siglo, donde se habían incorporado nuevos actores.

Esta inédita situación de violentos conflictos urbanos, puso de relieve que el modelo capitalista dependiente argentino se desarrolló rápidamente y generó fuertes tensiones sociales que reclamaron, para descomprimir la situación, la urgente

³*Ley de Residencia*, (4144) impulsada por el escritor y político Miguel Cané, tuvo vigencia hasta 1958.

inclusión de nuevas normativas que a la vez se complementarían con la legislación represiva.

En 1912, el Congreso votó la llamada *Ley Sáenz Peña* que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, solo para los varones argentinos o naturalizados mayores de 18 años. Esto significó un avance para una incipiente clase media que exigía participación ciudadana y permitió, en 1916, el triunfo electoral de la flamante Unión Cívica Radical (UCR), con Hipólito Yrigoyen como presidente de la república. Hasta ese momento, el voto era “calificado” y solo la élite podía elegir a los representantes. Como menciona Viñas “Lo que condicionaba el proyecto de Ley Nacional del Trabajo como el voto secreto y obligatorio era lo mismo: conceder para que el sistema sobreviviera”⁴.

La crisis del ideario liberal se expresó de variadas formas. Mientras la naciente Unión Cívica Radical basó su legitimidad en el voto popular (que no lo era tanto), la oligarquía ponía en duda ese criterio, fundando el suyo en “la calidad y capacidad” de sus dirigentes.

El estudiantado universitario también hizo valer su espíritu renovador a través del movimiento que desencadenó la *Reforma Universitaria* de 1918 que, contraponiéndose al carácter elitista tradicional, aplicó una novedosa democratización de la enseñanza, impuso la autonomía universitaria y tuvo gran repercusión en toda América latina.

El radicalismo, como movimiento político emergente, fijó su objetivo en la inclusión de los sectores medios urbanos a la política institucional. Sus esfuerzos se concentraron en la instalación de una democracia representativa, con algunas

⁴David Viñas, Óp. Cit. página 15.

reformas moderadas, que en lo económico tuvieron su expresión más visible en los sectores nucleados alrededor de la Federación Agraria Argentina.

El conflicto entre los grandes propietarios de las tierras y los arrendatarios estalló en 1912 en lo que se conoció como *el Grito de Alcorta*, localidad de la provincia de Santa Fe. El problema central era el régimen de propiedad de la tierra en manos de unos pocos terratenientes que arrendaban a los chacareros algunas hectáreas a precios muy altos. “Los sucesos del Grito de Alcorta, donde se reclama por contratos de arrendamiento más duraderos, libertad para comercializar la cosecha y baja en los cánones de arriendo, son solo una muestra del enfrentamiento entre grandes propietarios y arrendatarios”.⁵ Las condiciones de arriendo eran bastante desfavorables para los inquilinos que debían sembrar por su cuenta y riesgo, alquilarían a los propietarios – y sólo a los propietarios - los elementos de labranza y las trilladoras, les entregarían los cereales limpios y embolsados – en bolsas que sólo podían comprarles a los dueños del campo - listos para su traslado al puerto y quedaría para los dueños entre el 40 y el 50% de la producción, como lo describe Felipe Pigna en su página web *El Historiador*.

La lucha de los chacareros generó disputas permanentes durante la gestión radical. Sin embargo, el gabinete original que acompañó a Hipólito Irigoyen en su primera gestión incluyó entre sus ocho ministros a cinco miembros de la Sociedad Rural Argentina - que representa a los grandes terratenientes-, lo que habla de la complejidad de esa transición. El universo social del radicalismo se conformó con los poderosos ganaderos de la pampa húmeda, los grandes

⁵*Ayer y hoy de la Argentina rural, gritos y susurros del poder económico (1880-1997)* Noemí Girbal-Blacha, pág. 19, Ed. Página 12.

exportadores, las clases medias urbanas y los chacareros organizados en la naciente Federación Agraria Argentina. La gran masa de trabajadores urbanos y rurales quedó afuera, excluida y sin ninguna representación política institucional. Tal vez esto sea parte de una explicación de la violenta represión al movimiento obrero como única respuesta del Estado, durante la gestión radical. Promediando la década del '20 se manifestó claramente la fractura interna del partido radical, donde terminó predominando el sector más afín con la SRA. La dificultad en la radicación de colonos en las zonas periféricas de la pampa húmeda tuvo que ver con que se la pretendió implementar sin modificar el régimen de tenencia de la tierra, lo que prolongó el conflicto con los arrendatarios.

Así, la confrontación de clases continuó en ascenso, la legislación no alcanzó para encorsetar al creciente movimiento obrero y la dirigencia política volvió a recurrir a la violencia una vez más, haciendo uso de la Policía y el Ejército.

En 1919 se desató una huelga en los talleres metalúrgicos de la firma Vasena en la ciudad de Buenos Aires, reclamando la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas y mayor salubridad en el trabajo. Ante la intransigencia de los dueños de la empresa, la huelga se extendió por toda la ciudad y luego de muchas y fallidas negociaciones, sobrevino una sangrienta represión, inducida por la patronal y la *Liga Patriótica*. La Policía fue superada por la masividad de la protesta y en esa situación el gobierno constitucional ordenó la intervención del Ejército, que aprovechó la oportunidad para hacer uso de los nuevos fusiles Máuser comprados en Alemania y las flamantes ametralladoras Maxim de origen inglés.

Se la conoció como la *Semana Trágica* y dejó un saldo estimado, según la fuente, de entre 700 y 1500 obreros muertos, 5000 heridos y 50.000 prontosuados. La embajada norteamericana, ya atenta y activa en esa época, informó a su gobierno más de 1300 muertos. La imprecisión de las cifras se debió a que la orden era enterrar y/o incinerar los cadáveres para que no hubiera conteo ni identificaciones. Una versión precursora de la futura figura de *desaparición forzada de personas*.

Dos años más tarde en 1921 el Ejército, en connivencia con la Sociedad Rural Argentina y con la venia del gobierno radical, fusiló en la Patagonia a más de 1500 peones rurales que estaban en huelga también por mejoras laborales.

Una represión igualmente brutal ocurrió durante la huelga en 1921 en la empresa inglesa *The Forestal Land Timber Railways and Co. Ltd*, conocida como *La Forestal*, en el Chaco santafesino. Esta empresa, que explotaba más de 1.000.000 de hectáreas, fue la principal exportadora de tanino y de rollizos de quebracho que enviaba a Alemania; poseía varias fábricas, 400 kilómetros de vías férreas y puertos propios para exportar sus productos. Durante 1919 y 1921 se produjeron una serie de huelgas que culminaron ese año con la masacre de aproximadamente 600 obreros, como describe la cita que encabeza este capítulo. *La Forestal* tenía un ejército propio, privado, conocido como *Los Cardenales* que era financiado por la empresa, pero fue armado y equipado por el gobierno provincial del radical Enrique Mosca. Pocos años después Mosca sería abogado de la empresa. Fue este grupo parapolicial, junto con otro, la *Liga Patriótica*, más las fuerzas legales del Ejército los que consumaron la masacre.

Para constatar que la guerra contra el *indio* continuó (y continúa al día de hoy), solo mencionaremos la masacre en la

reserva chaqueña de Napalpí, en 1924, contra la etnia qom y mocoví y la de Rincón Bomba, en Formosa, contra la etnia pilagá en 1947. Todas eran familias de trabajadores jornaleros de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy asesinados por la Policía, la Gendarmería y los estancieros.

En todos los casos citados, que solo son algunos, tal vez los más conocidos por la cantidad de muertos y heridos, lo expuesto se asemeja a una guerra... pero los muertos son de un solo bando: el de los trabajadores, lo que lo aproxima más a un exterminio planificado que a una guerra.

Ya en esa época era pública la actividad de los grupos parapoliciales de ideología ultranacionalista y filo fascista organizados por personajes como Manuel Carlés, quien fue diputado nacional por el radicalismo, profesor del Colegio Militar de la Nación, de la Escuela Superior de Guerra y fundador de *La Liga Patriótica* junto con el contraalmirante Manuel Tomás Domecq García. La existencia de estos grupos está mencionada en la obra citada del comisario Rodríguez, que hace referencia a la Semana Trágica y señala: “El día 10 aparecieron los autodenominados *Defensores del Orden*, jóvenes armados y reclutados en el Centro Naval por el almirante Pedro (sic) Domecq y dirigidos por el Dr. Manuel Carlés para cooperar con la Policía y las Fuerzas Armadas”⁶. Estos jóvenes, en general provenientes de familias ricas y de doble apellido, “pitucos y cajetillas” como se los conocía popularmente, se dedicaron a perseguir, golpear, violar y asesinar a obreros, anarquistas, comunistas, extranjeros y judíos con total impunidad, con la anuencia del Estado, las FFAA y la Policía. Cuando eran reprendidos por alguno de sus *excesos* repetían “Yo, *argentino*”, diferenciándose de sus víctimas, en general inmigrantes y pobres. En el caso de la

⁶Óp. Cit. Crio. Adolfo Enrique Rodríguez, pág. 264.

Patagonia estas bandas estaban organizadas e integradas por policías, civiles y miembros de la Sociedad Rural Argentina que, en su mayoría, eran estancieros extranjeros (ingleses, alemanes, franceses, etc.). Aquí no hacían gala de argentinidad, lo cual habla de la esencia de clase y los intereses que defendían con su violento accionar. Esta modalidad represiva por parte del Estado perdurará hasta nuestros días.

El cimbronazo de la Primera Guerra Mundial y de la triunfante Revolución Rusa extremó el debate y el posicionamiento ideológico de los intelectuales y la sociedad. Mientras algunos miraban con simpatía las ideas y los logros de la Rusia soviética, otros se recostaron en el ideario nacionalista de corte autoritario. Al igual que Carlés, hubo muchos intelectuales que se fascinaron con estas ideas y conformaron el basamento ideológico de lo que fue la ultraderecha nacionalista en nuestro país. Los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta, el filósofo, poeta e historiador Ernesto Palacio, el doctor Juan Carullas, lector de Charles Maurras y tantos otros, nucleados alrededor de *La Nueva República*, publicación desde donde propalaron sus ideas, son solo algunos. Pero quizás el más destacado fue el escritor Leopoldo Lugones quien, luego de un viaje por Europa en 1921, quedó impresionado por el avance del fascismo e inusualmente dejó de lado sus ideales socialistas. Dio conferencias en el teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, patrocinadas por la Liga Patriótica y el Círculo Tradición Argentina, donde proponía la alianza cívico-militar para salvar al país de “la acción subversiva de conspiradores extranjeros de ideas izquierdistas”. Los conceptos de autoridad, jerarquía, orden y la exaltación del rol purificador del Ejército se machacaron en sus notas en el diario La

Nación, para rematar con la frase que lo hizo célebre: “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada”.⁷

Una reflexión: Si bien existían instancias de negociación (aunque muy escasas) entre patronos y obreros, si estas fracasaban o eran incumplidas por la patronal, como fue el caso de las huelgas patagónicas, desde el Estado estaba absolutamente naturalizado el uso de la fuerza y la violencia extrema como respuesta final ante los reclamos de los trabajadores.

Se ordenaba sin más trámite sacar al Ejército a la calle, armado hasta los dientes y disparar sobre multitudes de personas en su mayoría desarmadas. Sin duda esta violencia desmedida y sangrienta ejercida desde el Estado, fue respondida de diversas formas por los movimientos sociales emergentes.

En el caso de la Patagonia, el movimiento anarquista que lideró las huelgas, al menos un sector, organizó grupos armados de autodefensa, teniendo en cuenta el accionar de los estancieros enrolados en la Sociedad Rural Argentina, que acostumbraban a practicar tiro con sus Winchesters y Remington usando de blanco a los indios. También estaba la amarga experiencia de las “policías bravas” que no escatimaban garrote, plomo y cepo para los obreros díscolos. Así fue que se produjo la primera huelga que, por su persistencia y masividad, empujó al gobierno radical a enviar un destacamento del EA al mando del coronel Héctor Benigno Varela. Tómese nota que la primera intervención del Estado Nacional en el conflicto es enviar al ejército.

⁷La Triple A, Ignacio González Janzen, pág. 21 y 22. Edit. Contrapunto, 1986.

Llamativamente – o no- el coronel Varela, cuando tomó cartas en el asunto, consideró que los reclamos obreros eran justos e indujo a la renuente Sociedad Rural a firmar un convenio de cumplimiento efectivo de las reivindicaciones. Logrado esto, se resolvió la huelga y el coronel Varela volvió a Buenos Aires con su tropa.

La Sociedad Rural indignada, denostó al coronel por la “humillación” a que la había sometido, movió sus contactos en Buenos Aires y no cumplió con lo acordado, razón por la cual se produjo la segunda huelga que, como la primera, fue totalmente pacífica. En ese contexto, el gobierno nacional envió nuevamente al destacamento del coronel Varela, evidentemente con otras órdenes, ya que ni bien llegó a Santa Cruz comenzó a fusilar huelguistas, con el beneplácito de la Sociedad Rural, los comerciantes y la eficiente colaboración de la Liga Patriótica.

Tras la represión sanguinaria llevada a cabo por el Ejército, el obrero anarquista alemán Kurt Wilckens mató, meses después en Buenos Aires, al coronel Varela quien fuera el ejecutor de los fusilamientos.

Sorprende enterarse que en octubre de 1921 el Congreso, con el voto de los radicales, había derogado la pena de muerte para los delitos comunes mientras meses después ese mismo gobierno radical autorizó la matanza indiscriminada de los peones en huelga de la Patagonia.

Conversando con Osvaldo Bayer, autor de una profunda investigación sobre el tema en su obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica⁸, comentó que una vez, en los años ´70, concluida su investigación, le reclamó a un alto dirigente

⁸Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Osvaldo Bayer, Ed. Galerna, 1974.

radical que nunca habían pedido perdón públicamente por aquella masacre y le pidió explicaciones por el cambio de actitud entre una huelga y la otra; este le respondió que, debido a las fuertes presiones de la embajada británica, que tenía estacionados en las Malvinas varios buques de guerra, el gobierno radical se vio obligado a proceder como lo hizo. Triste respuesta.

*En relación a este comentario, es importante destacar la ausencia del concepto **soberanía** en el léxico y pensamiento de cierta clase política y también el abismo que siempre separó a las masas trabajadoras, a los pobres, de la vida institucional del país, de la política partidaria legal y de las instituciones del Estado, es decir de los espacios donde se toman las decisiones. Aún con el avance del voto universal, obligatorio y secreto (aunque solo masculino) del año 1912 con la mencionada Ley Sáenz Peña, las masas obreras estaban lejos de ser tenidas en cuenta por la dirigencia política, que siguió manejándose bajo la concepción elitista, de raíz colonial, robustecida por la generación del '80. Leyendo los reclamos de los peones rurales, conmueve comprobar la modestia de los mismos y lo simple e insignificante que hubiera sido para la Sociedad Rural concederlos. De hecho así lo entendió el mismo coronel Varela en su primera incursión.⁹*

Pero lejos estuvo esta clase dirigente de conmoverse por la necesidades obreras y populares, y mucho más lejos estuvo de abrir las puertas, para incorporarlas a la vida política, aunque no fue por desconocimiento de esas necesidades (ya mencionamos el informe de Biale Massé), sino más bien por soberbia, autoritarismo extremo, por un temor paranoico a ser avasallada y ver en peligro sus intereses económicos, su

⁹Óp. Cit., Osvaldo Bayer, tomo I, pág. 120.

confort, su rentabilidad y su poder. Es por esto que, el único modo de relación que se estableció entre el trabajo y el capital, fue el reclamo a través de la huelga para ser escuchados y la respuesta del capital (los empresarios y estancieros) a través del Estado fue invariablemente cruenta.

Esto y todo lo anterior forma parte de una posible explicación sobre los orígenes de la cultura de la violencia política de las masas como respuesta a la violencia estatal, que buscó siempre someter a esas masas, sin admitir las desigualdades sociales y económicas y sin reconocerlas como sujeto político. Aquellos sectores que no aceptaron la disciplina impuesta por el poder a través del Estado, fueron demonizados y aniquilados.

En cuanto a la violencia popular y/o revolucionaria cabe también una reflexión, dado que habitualmente se la hace aparecer como algo condenable y brutal, (en este caso la violencia anarquista), al ser ésta más selectiva, más directa, más visible, es decir un hombre mata a otro en un atentado a la vista de todos. Excluida del contexto político y social queda registrada en las páginas policiales de los diarios como un crimen anarquista. Mientras que la violencia estatal, al ser más intermediada, más burocrática, escudada tras un uniforme militar es más impersonal, está más naturalizada, sustentada por la “autoridad”, amparada por la Ley, por el sentido común y por ende es más “aceptable” y menos o nada condenable. Solo el Estado tiene licencia para matar, solamente el Estado detenta el famoso “monopolio de la fuerza” y de ese modo legitima el uso de la violencia. Sin duda aquí hay que tener en cuenta el rol de las empresas de medios masivos de comunicación que son los que les ponen nombre a las cosas, forman opinión, sentido común y determinan cultura que, en general, tiende al

reduccionismo y excluye la reflexión y profundización sobre estos temas y otros tantos. Para los medios de la época, los anarquistas asesinaban personalidades socialmente importantes como el coronel Varela o el coronel Ramón Falcón y estos hechos aparecían en la primera plana de los diarios con grandes titulares. En cambio, el Estado mataba peones, obreros, anarquistas, rebeldes, delincuentes, gente pobre, desconocida, sin derechos, irrelevantes y nadie se enteraba porque ningún diario lo informaba. Pero esto no alcanza para encubrir la tremenda asimetría entre la violencia que pudiera utilizar un movimiento social y la que ejercía el Estado haciendo uso de toda su maquinaria de guerra legal e ilegal.

En la formación de las FFAA podemos encontrar datos significativos relacionados con su comportamiento. Un aspecto importante a analizar y, tal vez poco observado, es el ingrediente cultural: por un lado, la instrucción de los cuadros superiores de las FFAA, sumado a esto su ligazón con los sectores dominantes y, por ende, su pertenencia a una élite cerrada y pudiente. Esto nos lleva a indagar el aspecto cultural que predominó en la formación intelectual de esa clase dirigente. Un camino puede ser el de tomar a aquellos personajes que encarnaron en cada momento las ideas dominantes, tal el caso del general y ex presidente Bartolomé Mitre, impulsor de la guerra de la Triple Alianza y fundador del diario *La Nación* cuyo lema, *tribuna de doctrina*, es toda una declaración de principios. El general y también dos veces presidente, Julio Argentino Roca, conductor de las *campañas al desierto* y líder de la generación del '80 junto con José Clemente Paz, dueño fundador del diario *La Prensa* cuyo lema, *libertad, progreso y civilización* es otra prístina declaración de principios. Ya en el siglo XX, los generales Agustín Pedro Justo y José Félix Uriburu como los primeros rostros de la usurpación violenta del aparato del Estado por parte de las

FFAA, que contó con cierto apoyo del diario *Crítica* fundado por Natalio Botana y, más recientemente, aquellos oficiales que llevaron adelante los golpes de Estado de 1955, 1966 y 1976, como los generales de la doctrina francesa, del aniquilamiento, y la alianza estratégica con las empresas multinacionales, los multimedios y el imperio norteamericano, en este caso. Una clara y cristalina línea de continuidad histórica.

La estructura corporativa, cerrada y verticalista, donde se repiten apellidos de rancia estirpe militar y la ligazón entre grupos de poder, habla de una consolidación cultural de casta, en este caso militar, y de una profunda raigambre en el modelo del arcaico Imperio español. El filósofo argentino Oscar Terán menciona una cita de un periódico socialista, *Afirmación*, del año 1962 donde se denuncia “un manual de guerra contrarrevolucionaria con el que se había comenzado a instruir a oficiales de aeronáutica, contenía enseñanzas que mostraban al liberalismo como antesala del comunismo, y a la Revolución Francesa como el origen de todos los males optando, en cambio, por un contramodelo histórico conformado por la España de los reyes católicos, de Carlos V y Felipe II, como la más amplia expresión política de la cristiandad occidental.”¹⁰

A esta marca cultural indeleble, que perdura a través de los siglos, se sumó la etapa de modernización del Ejército argentino, que se instrumentó a partir de fines del siglo XIX. Como mencionamos al principio de este capítulo, esta *modernización* se expresó en un fuerte vínculo con el ejército alemán. La formación a imagen y semejanza del modelo germano-prusiano, dentro de la estricta disciplina marcial, el

¹⁰Nuestros años sesentas, la formación de la nueva izquierda intelectual argentina, Oscar Terán, pág. 218. Siglo XXI Editores, 2013.

autoritarismo extremo, un arraigado y abstracto concepto de “*patria*” y un nacionalismo racista, fue la impronta cultural adoptada como patrimonio exclusivo de las FFAA, la Sociedad Rural, la *Liga Patriótica* y la *Legión Cívica*, grupo civil paramilitar sobre el que se apoyó el general Uriburu para dar el golpe de Estado en 1930.

Ya desde fines del siglo XIX el EA tenía convenios con el ejército alemán. De hecho, la mayor parte del equipamiento y armamento era de ese origen, puesto que el general Pablo Riccheri, creador del Servicio Militar Obligatorio, se ocupó de viajar a Alemania en 1890 para negociar la compra de los fusiles Máuser que reemplazarían a los viejos Remington *Patria*, aprovechando también su paso por Inglaterra, donde adquirió las poderosas ametralladoras Maxim, utilizadas en la represión de la Semana Trágica y la Patagonia. En ese período se consolidó el comercio de armas entre Alemania y Argentina con la introducción de los cañones Krupp, además de buques de guerra y armas portátiles. Estos negocios, se complementaron con la fuerte presencia alemana en la formación y reorganización del EA.

Fue durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca cuando en 1900 la flamante Academia de Guerra (hoy Escuela Superior de Guerra), abrió sus puertas.

En sus comienzos nada menos que el director y buena parte del plantel de profesores fueron oficiales alemanes, esto marcó la impronta del EA en el nuevo siglo. Esta particularidad se mantuvo durante años en la nueva etapa de modernización y más de doscientos oficiales argentinos fueron enviados a instruirse en Alemania, (Uriburu fue uno de los más destacados) e inclusive hubo observadores argentinos del lado alemán en el inicio de la Primera Guerra Mundial. A raíz de la guerra, se suspendió el intercambio, pero ya existían varias

camadas de oficiales instruidos en el “profesionalismo” del poderoso y severo ejército alemán, formados ideológicamente en un sentimiento nacionalista con fuertes rasgos autoritarios y discriminatorios. Muchos militares argentinos miraron los regímenes de Primo de Rivera en España y Benito Mussolini en Italia como buenos ejemplos de paz social y orden político.

De este modo, siempre mirando hacia Europa y casi nunca hacia adentro de nuestro continente, se fue robusteciendo con nuevos matices el viejo autoritarismo elitista heredado del Imperio español, el Virreinato y la generación del ´80. Fue con esta mirada y el ceño fruncido que el EA observó el surgimiento de los nuevos conflictos sociales, dentro de la emergente sociedad capitalista argentina.

Hubo generales visionarios, como el nombrado Riccheri y el general Enrique Mosconi, que le otorgaron al EA un gran protagonismo en las decisiones políticas que tenían que ver con temas centrales, como el diseño de la matriz industrial y energética del país, temas para nada menores en los que el EA impuso modelos propios. Durante la década del ´20 el Ejército, a través del Ministro de Guerra, el general Agustín P. Justo, logró un aumento considerable del presupuesto para su modernización y profesionalización y adquirió también mayor peso en las decisiones políticas. Pero en los exclusivos clubes de caballeros, como el *Círculo de Armas* y el *Jockey Club*, donde se reunía a tomar whisky y a conspirar lo más granado de la oficialidad del Ejército y la alta sociedad, siguió amplificándose la idea de que el gobierno *demagógico* de Yrigoyen mostraba debilidad a la hora de combatir el conflicto social, a la vez que seguía siendo una espina incrustada en los genitales de la oligarquía las concesiones en la legislación laboral que el radicalismo había otorgado.

1930: CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y PRIMER GOLPE MILITAR

A tono con el surgimiento arrollador de los movimientos fascista y nacional-socialistas europeos, e incitadas por la oligarquía agro-exportadora que vio peligrar sus negocios ante la crisis económica mundial, en 1930 las FFAA se embarcaron por primera vez en la aventura política de derrocar por la vía de las armas a un gobierno constitucional a través de un golpe de Estado y usurpar las instituciones de gobierno, tomando control total del aparato del Estado. Con este acto se derrumbó definitivamente el mito del “profesionalismo” y la “prescindencia política” del EA, falso, por cierto, algo que se seguirá confirmando con creces en los acontecimientos políticos por venir.

La crisis económica mundial impactó fuerte en una Argentina dependiente de la exportación de carne y granos y de la necesidad de divisas, lo que redundó en un deterioro considerable de las condiciones de vida de los trabajadores. La desocupación y los bajos salarios generaron mayores conflictos y la respuesta desde el Estado fue la represión.

Ya consumado el primer golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, se disolvió el Congreso y se decretó el *estado de sitio*. La represión sobre quienes difundían el ideario marxista y anarquista recrudeció. A comienzos de 1931 fueron fusilados en la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, en Buenos Aires, los militantes anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó, tras un vergonzoso

juicio sumario que duró menos de un día. Les siguieron muchos más.

En los años de la llamada “*década infame*” y del “*fraude patriótico*”, etapa en la que predominó una dictadura disfrazada de democracia restringida, continuada por el general Agustín P. Justo, se sancionó la *ley de represión al comunismo*(1936) que, de hecho, regirá durante muchos años. A instancias de la Comisión Popular Argentina Contra el Comunismo (CPACC) liderada por el nacionalista Carlos Silveyra,¹ y de la Iglesia Católica entre otros, el ya citado senador Matías Sánchez Sorondo, junto con el senador por Salta Carlos Serrey por la *Concordancia* (conservadores), fueron los impulsores del proyecto. Por supuesto que en la argumentación que desplegaron para imponer la ley, resaltaron el aspecto “violento”, “antidemocrático” y “totalitario” del comunismo discurso que, en boca de Sánchez Sorondo, sonó poco convincente dado que fue el ministro del interior de la dictadura del general Uriburu. Pero la ley ya estaba acordada antes del debate y, como señalaron los senadores Lisandro de la Torre (Partido Demócrata Progresista) y Mario Bravo (Partido Socialista), apuntaba a restringir derechos de la clase trabajadora y a su disciplinamiento.

Vale la pena destacar parte del alegato del senador Bravo para confirmar la sanción previamente pactada de la ley: "Este es un debate que casi sería innecesario, porque la ley ha surgido como consecuencia de un pacto político, de un partido y de un gobierno. Esta ley es la coincidencia perfecta entre el presidente de la República y la Concordancia, y sean cuales

¹La cuestión comunista y la criminalización en la ley de represión al comunismo de 1936, de Mercedes López Cantera. Facultad de Filosofía y Letras UBA. 2014.

fueren las razones que pudieran darse en su contra, ojalá pudiéramos traer la palabra revelada para que la mayoría de esta Cámara y el presidente de la República modifiquen sus puntos de vista, nada se conseguiría ya que tienen su resolución tomada y la sanción, por lo menos en esta Cámara, está resuelta." Y continua "...esta ley va dirigida contra la clase trabajadora del país; es una ley que hiere en sus derechos esenciales a la población argentina que vive del salario (...) Esta no es una ley para reprimir el crimen del trust explotador de los trabajadores de la Nación argentina; ésta no es una ley para la asociación ilícita del capital financiero. No; ésta es una ley para la organización sindical, para el programa de reivindicaciones de la clase trabajadora".²

El contexto era especialmente favorable teniendo en cuenta la abundante difusión de las ideas ultranacionalistas y anticomunistas, expresadas en el gran número de bibliografía y publicaciones de corte *nacionalista*, como los periódicos *La Fronda*, *Crisol*, *Bandera Argentina* entre otros. Esta ideología penetró profundamente en las esferas de poder, la clase política, los partidos tradicionales y sectores de la clase media, en consonancia con los movimientos fascistas, nazi y falangista emergentes en Italia, Alemania y España respectivamente.

Esta década estuvo signada por el fraude electoral sistemático y la represión a un movimiento obrero debilitado y dividido. Con el Partido Comunista en la clandestinidad y el radicalismo proscrito, los restantes partidos políticos buscaron negociar algún margen de participación con variado éxito, pero sin oponer demasiada resistencia al nuevo

²Fragmento de la exposición del Senador Mario Bravo en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación*, Año 1936.

orden militar que había quebrantado las reglas constitucionales. El marco social lo completaba el despilfarro del que hizo gala y ostentación la oligarquía vacuna, donde tampoco se ocultaba la simpatía por el naciente régimen nazi en Alemania. Coincidentemente con el triunfo de Hitler, se organizó en el teatro Colón una gala en homenaje a Wagner.

Eran habituales los desfiles de la *Legión de Mayo* y la *Legión Cívica* por la avenida de Mayo, la avenida Callao, o la avenida Alvear de Buenos Aires, con sus camisas pardas y el brazo derecho extendido a media altura. La *Legión Cívica* contaba con más de diez mil miembros, tenía cobertura legal otorgada por el gobierno militar y era considerada una *fuerza de reserva* del Ejército.³ Tampoco era un secreto la existencia del partido nazi en la Argentina de ese período. Con la anuencia del gobierno de entonces, el 10 de abril de 1938 se realizó un acto del partido en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Asistieron más de 15.000 personas y fue el mayor acto público nazi fuera de Alemania. El Partido Nacional Socialista Alemán en Argentina, luego disuelto, contaba con casi 70.000 adherentes, según la crónica periodística. En el país funcionaban más de 200 escuelas alemanas que dependían económicamente de la embajada alemana, lo que hace suponer una fuerte penetración de la ideología nazi, al menos dentro de la colectividad alemana de la época.⁴

Sin intención de agotar la paciencia del lector/a, es interesante hacer un repaso por la lista de hombres que ocuparon cargos en el gabinete del general Uriburu, quien por su simpatía por el nacional-socialismo alemán fue apodado por sus íntimos como “*Von Pepe*”. Citamos el libro de Enrique

³Ver *El ejército y la política en la Argentina 1928 – 1945*, Robert Potash, pág. 106. Ed. Sudamericana, 1981.

⁴Fuente: diario *La Prensa*.

Vázquez, *El osario de la rebeldía*⁵, veamos: el mencionado Matías Sánchez Sorondo, además de ministro del Interior y acérrimo impulsor de la ley anticomunista era titular de la compañía de seguros Franco Argentina y abogado de la Standard Oil. El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, era titular de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo, subsidiaria de la Anglo Persian; el ministro de Justicia e Instrucción, Ernesto Padilla, era director de la Germano Argentina Compañía de Seguros; el ministro de Agricultura, Horacio Béccar Varela, era titular de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia, de capitales ingleses, síndico de Astra, abogado del National City Bank de Nueva York, director de la destilería El Cóndor, abogado del frigorífico Anglo, presidente de Firestone, y miembro del directorio de Sol Compañía Petrolera (un muchacho muy ocupado, digo yo!). Luego el ministro de Obras Públicas, Octavio Pico, era gerente de la Petrolera Andina y asesor de la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia. Cualquier similitud con otros futuros gabinetes en nuestra historia no es casualidad.

Queda a la vista la convivencia del ideario político *nacionalista* que cautivaba a los militares argentinos de aquel momento, con una economía totalmente extranjerizada, donde los funcionarios del gobierno de facto eran representantes de empresas multinacionales inglesas, holandesas, norteamericanas, alemanas y francesas. La íntima y ya consolidada sociedad entre las FFAA y el poder económico multinacional queda aún más clara y confirma, una vez más, que todos los golpes militares contaron siempre con un fuerte apoyo de sectores civiles influyentes y

⁵El *osario de la rebeldía, Campo de Mayo de Mayo de Roca a los Kirchner*, Enrique Vázquez, Ed. Planeta 2015, pág. 45.

económicamente poderosos ligados a intereses del imperio de turno.

Ese ilusorio *nacionalismo*, que nada tiene que ver con el concepto de *soberanía*, tanto territorial como económica y política, se puede apreciar en la siguiente anécdota: “*La Argentina es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico*” esta sentencia fue enunciada por el vicepresidente de facto Julio Argentino Roca (h), el 10 de febrero de 1933 en el Club Argentino de Londres, durante un agasajo al príncipe de Gales. A confesión de parte, relevo de pruebas.

No es casual el comentario risueño del hijo del “héroe de la campaña al desierto” ya que éste en su función de vicepresidente firmó en Londres el pacto Roca-Runciman donde otorgaba el monopolio total de la industria de la carne argentina a los británicos. Este pacto generó un agrio debate en el Congreso, también protagonizado por Lisandro de la Torre, quien acusó al gobierno de facto y en particular al ministro de Hacienda Luis Duhau y al ministro de Agricultura Federico Pinedo, de otorgar concesiones inaceptables a los británicos a cambio de prebendas. En ese debate no faltaron las agresiones físicas por parte del ministro Duhau y, ante la evidencia, un esbirro del ministro, el ex comisario Ramón Valdés Cora, extrajo un arma y disparó tres tiros sobre Lisandro de la Torre que impactaron en su correligionario, Enzo Bordabehere, quien lo estaba cubriendo con su cuerpo. Bordabehere agonizó en el piso de la Cámara de Senadores y falleció poco después en el hospital Ramos Mejía.

Este episodio habla a las claras que la violencia extrema también era moneda de cambio dentro del propio Honorable Congreso de la Nación, cuya honorabilidad era tan dudosa

como la legitimidad de los sucesivos gobiernos durante la década infame.

La Argentina no fue inmune a la crisis económica mundial de 1929, la puja de intereses por el petróleo, el golpe militar y la consolidación del ideario nacionalista y autoritario, fueron una muestra del impacto local de esa crisis. Dentro del movimiento obrero, una vez aniquilado el anarquismo y neutralizado el Partido Socialista, comenzó a hegemonizar la lucha sindical el clandestino Partido Comunista, sometido a su vez, a una dura represión que lo empujó a cobijarse cada vez más bajo el ala de la URSS, resignando independencia política. Entretanto surgió la Confederación General del Trabajo (CGT), de carácter “independiente” no partidario, como proyecto de una central sindical única que, de a poco, aglutinaría a buena parte del mundo del trabajo.

La crisis mundial generó un declive en la importación de insumos lo que redundó en un proceso de sustitución de esas importaciones y consecuentemente cierto florecimiento de la actividad industrial local. El *Plan de Acción Económica Nacional*, concebido por el economista Raúl Prebisch en 1933 determinó, en el marco de la crisis, la intervención del Estado en la economía lo que dio lugar a esa leve recuperación. Promediando 1935 comenzó a manifestarse un cambio social de la mano de esta incipiente industrialización. Esto se expresó con la llegada de una masa migratoria interna de trabajadores rurales desocupados provenientes de las provincias, que se fueron instalando en el conurbano bonaerense y constituyeron la mano de obra que abasteció la reactivación industrial.

A diferencia de los blancos y blondos inmigrantes europeos de principios de siglo, estos nuevos obreros urbanos provenían de las provincias más empobrecidas del país. Su

piel oscura, su mirada torva marcada por la miseria extrema, muchos descendientes de los pueblos originarios; todos ellos eran campesinos pobres corridos por la desocupación y la falta de recursos, no tenían formación laboral en fábricas, carecían de experiencia sindical y fueron poblando los suburbios de las grandes ciudades. Desde los pedestales inmaculados del poder los llamaron “cabecitas negras”. Pronto irrumpirían sorpresivamente en la vida política del país.

LA NOVEDAD DEL PERONISMO

Luego de una década de gobiernos locales fraudulentos, conocida como *la década infame*, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial que trastocó el tablero político internacional y tuvo una fuerte repercusión en los países periféricos como la Argentina.

En los debates que se daban en los palacios del poder, rondaban las posturas sobre la neutralidad o no de parte de la Argentina ante el conflicto europeo. Los ya tradicionales vínculos económicos con Gran Bretaña pesaban positivamente a la hora de apostar por la neutralidad, dado que era una oportunidad de acrecentar el intercambio con Inglaterra consolidado por el pacto Roca-Runciman, aunque ya había una mirada económica perceptible dirigida hacia los EEUU como fuente de recursos más seguros.

El conflicto político por la neutralidad argentina tenía más que ver con las disputas comerciales entre EEUU (imperio ascendente) y Gran Bretaña (imperio absorbido por la guerra) que con supuestas simpatías locales con el eje nazi-fascista. Aunque no se debe soslayar la consolidada formación germano-prusiana del EA desde principio de siglo y, por otra parte, las arraigadas simpatías anglo-francesas que siempre tuvo nuestra oligarquía.

Fue en este proceso de intervención estatal que se desarrolló el complejo industrial-militar local de la mano del general de división e ingeniero militar Manuel Nicolás Savio.

Los sectores nacionalistas del Ejército denostaban la corruptela de los partidos políticos conservadores y observaban con desconfianza las interferencias tanto de los británicos como de los EEUU.

Algunos jóvenes oficiales miraban hacia adentro del país y vislumbraban la potencialidad de un desarrollo autónomo, en línea con las iniciativas del general Savio.

En ese contexto comenzó a tomar relevancia política una facción del EA encabezada por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) del que formaba parte un desconocido coronel Juan Domingo Perón. En el Ejército, el GOU encarnó la tendencia *populista* que triunfó en ese momento sobre el ala liberal tradicional y, desde los cargos que ocupó a partir del golpe de 1943, desarrolló una audaz campaña política de acercamiento a la clase trabajadora, en la que el coronel Perón se proyectó como figura central. Esto le valió el apoyo de las masas obreras y lo llevó, 17 de octubre mediante, a la presidencia en las elecciones de febrero de 1946.

Sin duda el GOU, de algún modo, revolucionó la forma de hacer política que hasta ese momento era patrimonio exclusivo de los militares y la élite acaudalada y cuyos instrumentos fueron la exclusión, el paternalismo, los negociados palaciegos y la represión.

La clase obrera argentina llegó a esta nueva coyuntura política con claros signos de debilidad. La *década infame* fue acorralando a un movimiento sindical endeble y fragmentado. En esa etapa prevalecieron las alternativas más reformistas donde la negociación reemplazó a la acción directa, particularmente en el caso de los sindicatos dirigidos por los socialistas. Simultáneamente la represión golpeó fuertemente a los gremios conducidos por los comunistas,

cuyo partido sobrevivía a duras penas en la clandestinidad. Los sindicatos controlados por los socialistas e independientes, partidarios de la negociación y la prudencia, también sufrieron la represión, aunque en menor medida.

Con el advenimiento del peronismo la situación de los trabajadores se modificó. Se abrió una alternativa política inédita a partir de la cual la clase obrera obtuvo muchas de las reivindicaciones por las que tanto luchó y tanta sangre ofrendó, aunque no fue enteramente producto del triunfo de estas luchas, sino que la novedad fue que les fueron concedidas desde el Estado, lo que marca una diferencia sustancial. En este sentido, también hay que destacar que fue la primera vez que desde el Estado se instrumentaron políticas públicas a favor de los trabajadores en lugar de la represión como única respuesta estatal.

El coronel Perón era un oficial del Ejército difícil de clasificar para los norteamericanos y los europeos aliados; fue catalogado como “filo-fascista” y “comunista” también. La postura neutralista que sustentaban los oficiales del GOU en relación a la guerra era un escollo para los EEUU, que anhelaba mitigar la influencia de los británicos y controlar todo el hemisferio, mientras presionaba a favor de sumarse activamente al bando de los aliados. Al mismo tiempo el estilo *populista* que distinguió a los dos primeros gobiernos peronistas, encarnados en las figuras del caudillo y de Eva Duarte, y el protagonismo que se les otorgó a las clases populares, preocupó al imperio e irritó por demás a las clases dominantes locales, que no estaban habituadas a semejante espectáculo.

Vale aclarar que el término *populista* era (y es) usado por la élite económica y social con una fuerte carga despectiva y estigmatizante, que intentó por todos los medios devaluar el

concepto “nacional y popular” suplantándolo por el de “populismo demagógico y totalitario”. Un caudillo con ideas propias que confrontaba con los aliados y con el país del norte y a la vez asentaba su poder político en las masas trabajadoras, era considerado peligroso e incontrolable. La preocupación del Departamento de Estado norteamericano se expresó claramente con la intromisión del ex embajador norteamericano en nuestro país, Spruille Braden, quien, como Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de su país, inició una fuerte campaña para impedir la elección de Perón. Para esto, entre otras cosas, difundió una publicación oficial de EEUU, conocida como el *Libro Azul*, en la que se intentó vincular a Perón y a los gobiernos anteriores con el eje nazi-fascista; como se ve las *fake news* no fueron un invento del siglo XXI.

La *Unión Democrática*, alianza electoral opositora al peronismo, utilizó este libro durante la campaña buscando inhabilitar al caudillo, pero éste la aprovechó hábilmente adoptando una postura antiimperialista, denunciando la injerencia norteamericana en los asuntos internos del país y, con la consigna *Braden o Perón* logró el triunfo electoral con el 55% de los votos en febrero de 1946.

Así todo el peronismo, como movimiento político, nunca se identificó con orientaciones marxistas o comunistas, y esto ya quedaba claro en las Bases de la Constitución del Grupo de Oficiales Unidos¹, logia secreta creada en 1943, de la que Perón fue miembro activo y relevante. La propia historia lo demostraría más tarde; justamente el planteo de los oficiales del GOU y de Perón en particular fue cooptar los sindicatos y a sus dirigentes para debilitar o eliminar la influencia

¹ Ver Óp. Cit. *El ejército y la política en la Argentina 1928 – 1945*, Robert Potash, pág. 266. Ed. Sudamericana, 1981.

comunista sobre los trabajadores. A esta tarea se abocó durante su campaña con buenos resultados gracias a su habilidad y pragmatismo que claramente lo podría encuadrar en aquel dicho atribuido a Lyndon Johnson, para explicar la cooptación de ciertos personajes: *“es mejor tenerlo dentro de la tienda orinando hacia afuera que fuera de la tienda orinando hacia adentro”*.

También los detractores del peronismo lo identificaron con el fascismo, por el perfil autoritario del gobierno y por el hecho de que muchos oficiales del EA, - la mayoría de ellos, incluido el propio Perón - habían realizado cursos de instrucción en la Italia fascista, la Alemania pre-nazi o la España de Franco. Pero esto no fue así. El EA desde principios de siglo ya tenía como referente al ejército alemán, lo que no lo convierte *per se* en un ejército nazi.

Por otra parte, es importante destacar que aquellos movimientos políticos europeos surgieron en una coyuntura de gran convulsión social en la Europa de entreguerras y se destacaron por ciertos rasgos ideológicos que el peronismo nunca profesó.

La consolidación de una raza blanca, única y superior, la persecución extrema y el exterminio de judíos y otras minorías raciales, étnicas, religiosas y políticas, el afán de conquista, la invasión militar a países limítrofes y la concepción de un dominio total del continente por medio de la fuerza militar no fueron políticas del peronismo, más allá de sus aspectos autoritarios, el corporativismo sindical y la persecución a los opositores de izquierda. En todo caso estos ingredientes fueron el reflejo de los trazos de una cultura ultranacionalista y de un “sentido común” que anidó en una porción de la sociedad argentina durante esa primera mitad

del siglo XX, como lo hemos enunciado antes, pero no es algo atribuible de modo exclusivo al peronismo.

Perón fue un líder de innegable carisma y habilidad política y supo adaptar su discurso a las distintas coyunturas y auditorios a los que se dirigió. El 25 de agosto de 1944, en una alocución en la Bolsa de Comercio ante un público compuesto por los más poderosos sectores de la economía dijo, entre otras cosas:

“Señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estaría seguro el capitalismo... Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores, para que el Estado los dirija y les marque rumbos, y de esta manera se neutralizarían en su seno las corrientes ideológicas y revoluciones que puedan poner en peligro nuestra sociedad capitalista en la postguerra.”

En otras circunstancias, ya derrocado por el golpe militar de 1955 y en el exilio, Perón continuó su actividad política y volcó en uno de sus libros, *Los Vendepatria* (1956), conceptos como este: *“La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este.”*

Pero lo cierto es que el peronismo irrumpió en la escena política como un novedoso movimiento popular que le dio un lugar en la sociedad a la clase obrera,² porque además de las muchas reivindicaciones, la incluyó como sujeto político. Este aspecto, entre otros, tuvo su correlato de oposición y rechazo entre los sectores dominantes poco acostumbrados a ver a esas masas andrajosas, ese “aluvión zoológico” emerger

² Ver *La vieja guardia sindical y Perón*, Juan Carlos Torre, Ediciones RyR, 2011.

sudoroso, triunfante y bullicioso desde el submundo. En esta expresión se sintetizó un odio de clase que iría *in crescendo*: “Debe mencionarse entonces al señor Ernesto Sanmartino, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) cuando hizo pública en la Cámara de Diputados, en la sesión del 7 de agosto de 1947, un término discriminatorio y descalificador, comparando al peronismo surgente en cuanto a la condición social de sus integrantes como ‘un aluvión zoológico’. De ahí en más una catarata de xenofobia y racismo inundó el contexto político argentino para quedarse, y la masa peronista pasó a ser despectivamente y según los tiempos: grasas, cabecitas negras, cabezas, negros, negrada, negros de mierda.”³

Es indiscutible el liderazgo y la astucia política que demostró Perón y el profundo impacto que tuvo su figura y la de Eva Duarte (Evita) en la clase trabajadora argentina, atributos estos, que generaron un particular encono hacia él y en especial hacia Evita, que fue el personaje político de la historia argentina con mayor arraigo entre los sectores populares. Definitivamente dejó una marca imborrable en el corazón de la clase obrera, que se identifica hasta el día de hoy con ese movimiento, ese líder y esa mujer que les otorgó, por única vez en la historia, el reconocimiento político como clase y buena parte de sus justos derechos.

Un modelo de características “colectivista” o “distribucionista”, que sancionó una nueva Constitución en 1949, inscripta dentro de lo que se denominó el *constitucionalismo social* que incorporó a la carta magna los derechos sociales entre muchos otros, además de la inclusión del controvertido artículo 40 que garantizaba el control de

³La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964, su consecuencia directa, Roberto Baschetti, pág. 109, Ed. Corregidor, 2013.

áreas estratégicas de la economía por parte del Estado y, como dato descollante, el concepto de la *función social de la propiedad*, fue señalado por algunos aristócratas sobrealimentados como la antesala del comunismo.

Sustentado en el carisma del líder y la pasión arrolladora de Evita, no podía sostenerse semejante modelo en un país con una tradición oligárquica tan enraizada.

La presencia de una mujer dando órdenes por los suntuosos palacios del poder del Estado era algo mal visto por muchos funcionarios, tanto militares como civiles. La combinación de juventud, belleza e inteligencia, más poder de decisión, tuvo un impacto negativo de tal magnitud que inflamó las criadillas de ese selecto mundo de solo hombres.

Por primera vez el odio de clase, concentrado en las dos figuras que encarnaban los anhelos de los sectores populares, se hizo sentir con una virulencia y crueldad nunca vista hasta entonces. Ese odio llegó a expresarse también en los muros de Buenos Aires con la frase *¡viva el cáncer!* mientras Evita agonizaba y moría a causa de esa enfermedad a los 33 años, el 26 de julio de 1952. Ya veremos que no fue esta la única expresión de odio por parte de la oligarquía.

La crisis económica se hizo sentir durante la segunda gestión de gobierno (1952).

Si bien la guerra favoreció, en un principio, las exportaciones de bienes primarios, a la vez complicó las importaciones de insumos y equipos para la renovación tecnológica de la industria nacional. El Plan Marshall implementado por EEUU en la Europa devastada implicó una disminución en el comercio exterior argentino. EEUU tenía el control y ponía condiciones, tanto en las exportaciones como en las

importaciones, dado que era el principal proveedor de maquinarias. Las malas cosechas por sequías, la necesidad del ahorro interno, más el congelamiento de salarios para reducir el déficit de divisas fueron alterando el humor social y esto generó mayor espacio crítico a la oposición. Ya había ocurrido un frustrado intento de golpe en 1951 encabezado por el general Benjamín Menéndez y la conspiración entre los sectores liberales de las FFAA era permanente; estos factores se sumaron a otros, entre los que estaba el perfil personalista del gobierno y la exaltación de las figuras de Perón y Evita que tanto incomodaba a cierta clase media.

A la vez la relación con la Iglesia se fue deteriorando por el control que ejercía el Estado sobre la educación religiosa. La Iglesia aspiraba a tener un dominio total de la educación y pretendía adjudicarle un tinte confesional a la educación formal en todos sus niveles. El conflicto se agudizó también por la intervención de *La Sociedad de Beneficencia* por parte del gobierno, un organismo creado en el siglo XIX por Rivadavia, que hasta ese momento había sido territorio exclusivo de las damas de la alta sociedad con gran influencia de la Iglesia. La gota que tal vez rebalsó el vaso, fueron los proyectos de ley presentados al Congreso para la abolición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y la ley de divorcio⁴, más la disputa por el control ideológico de la juventud y los trabajadores. De este modo se fue configurando un clima enrarecido que contribuyó para aglutinar aún más a la oposición y que contó, como ya venía ocurriendo, con la activa participación conspirativa de la embajada norteamericana. Fue así que el 16 de septiembre de 1955, Perón finalmente fue derrocado por un golpe militar.

⁴*Bombardeo, 16 de junio de 1955*. Coordinación de Investigación Histórica del Archivo Nacional de la Memoria, pág. 55. Edición Archivo Nacional de la Memoria, 2010.

Pero este no fue un golpe más, similar a los que ya habían ocurrido. Por primera vez en nuestra historia, el odio de clase y la violencia estatal (en este caso del sector antiperonista de las FFAA) se manifestó de modo extremo y encarnizado tres meses antes, el jueves 16 de junio de 1955, con el bombardeo perpetrado por aviones de la Armada y la Aeronáutica sobre la Plaza de Mayo, la casa de Gobierno, la residencia presidencial y distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Treinta y seis aviones de combate con 90 tripulantes bombardearon y ametrallaron la ciudad de Buenos Aires por al menos cinco horas.

Fue un asesinato en masa de civiles que circulaban por las calles de la ciudad y fue el bautismo de fuego de la aviación naval... contra sus propios conciudadanos, civiles, desarmados y en tiempos de paz.

Creo que solo hubo dos casos en que las FFAA de un país latinoamericano bombardearon la Casa de Gobierno y a su propia población, para derrocar a un gobierno constitucional elegido en elecciones libres: Argentina el 16 de junio de 1955 y Chile el 11 de septiembre de 1973.

Muchos señalan a este hecho como el pico máximo de violencia estatal conocido hasta ese momento en el siglo XX y en ese sentido lo marcan como un punto de inflexión en la espiral ascendente de violencia ejecutada desde el Estado. No se equivocaron, aunque aún faltaba lo peor.

Es pertinente citar al dirigente gráfico Rolando Hnatiuk para comprender el impacto que causó entre los sectores populares el bombardeo del '55:

“Lo del 16 fue un genocidio, eso me golpeó muy duro. Ese día me di cuenta de que la lucha era cruenta, no era un asunto de

política así nomás. Hasta entonces había sido miembro de un montón de comisiones de bien público, pero la crudeza de los hechos presenciados cambió mi forma de pensar. La lucha ya no era pacífica, era una lucha a muerte. La cosa pasaba por otros carriles. No se trataba de un cambio de palabras, la acción debía ser distinta. Esa era la lección del bombardeo. Imposible ver eso y quedarse sin reaccionar. Todo el cambio que se produce en mi vida a raíz de ese hecho fue un antes y un después de un estado de vida en el país. Creo que ese cambio se produjo en muchos compañeros.”⁵

Si bien ese intento de golpe no triunfó y el derrocamiento definitivo del gobierno fue tres meses después, es un dato por demás significativo la saña y la extremada violencia con que desde sectores del Estado (en este caso las FFAA), del poder económico y eclesiástico se dirimían los diferentes proyectos políticos de país. A la vez marcará los métodos de lucha que la clase obrera adoptará que, sin duda, contemplarán el uso de la violencia, hecho que quedará registrado en los años posteriores con la llamada *resistencia peronista*.

Es importante dejar en claro que la represión legal, semi legal o clandestina desde el Estado, siempre existió y nunca se detuvo bajo ningún gobierno, fuera éste constitucional o *de facto*. Tampoco durante el gobierno peronista.

Bajo el peronismo se cobijaron diversos grupos de choque, nacionalistas de derecha que intentaron integrarse al nuevo movimiento, como la *Alianza Libertadora Nacionalista* liderada por Juan Queraltó y Guillermo Patricio Kelly, pero no dejaron de ser lo que eran: reducidos grupos

⁵Tomado del archivo de Roberto Baschetti y citado en *Rebelde acontecer, relatos de la resistencia peronista*, Gonzalo Leónidas Chaves, pág. 39, Ed. Colihue, 2015.

anticomunistas que propiciaban la pedagogía de la violencia, hijos nostálgicos del nacionalismo filo fascista de los años 30.

La ley contra el comunismo seguía vigente, los movimientos de izquierda y el Partido Comunista sobrevivían en una ambigua semi-clandestinidad y, en esta etapa, la represión a estos movimientos estaba en manos de la Policía.

Podemos citar un caso emblemático de esa época y poco mencionado por la historiografía: dos días después del sangriento bombardeo sobre la Plaza de Mayo, el 18 de junio de 1955, funcionarios de la *Sección Orden Social y Político* de la Policía de Rosario procedieron a arrestar en su casa al médico Juan Ingalinella, miembro del Partido Comunista. El operativo incluyó otras detenciones, lo que permitió la presencia de testigos, que luego denunciaron que Ingalinella fue bárbaramente torturado en la oficina de *Leyes Especiales* de la Jefatura de Policía de Rosario y murió a causa de la tortura. Su cuerpo aún permanece desaparecido.

Si bien el caso Ingalinella se investigó gracias a la tenacidad de sus familiares y compañeros, e incluso se llegó a individualizar y condenar a sus torturadores y asesinos, su cuerpo nunca apareció y quienes llevaron adelante la investigación fueron perseguidos y uno de ellos asesinado.⁶

Lo trágicamente paradójico del caso es que el PC, más allá de formar parte de la oposición, tuvo una postura contraria al bombardeo y salió a denunciarlo públicamente ese mismo día en que Ingalinella fue secuestrado.

⁶Felipe Vallese, *proceso al sistema, a 40 años, la lectura del crimen*. Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde. Ed. Punto Crítico 2002.

Es notable y recurrente cómo la genérica “*lucha contra el comunismo*” encubrió (y lo sigue haciendo) la disputa por la distribución de la riqueza y la propiedad de los medios para producirla. De acuerdo a las diversas etapas y coyunturas políticas, esta guerra sorda y pertinaz desatada por las clases dominantes se irá reformulando, y en los años posteriores al golpe del '55 será la resistencia peronista, como veremos más adelante, la que quedará en la mira del Estado y será sometida a una dura represión.

Otra reflexión: Si hacemos un repaso de los primeros 70 años del siglo XX, salta a la vista que la participación popular en la vida política institucional, especialmente a la hora de las grandes decisiones sobre el destino nacional, los derechos ciudadanos y la distribución de la riqueza, fue entre escasa y nula.

Hasta 1916 el voto era calificado, es decir que votaba solo la élite gobernante junto al poder económico y solo podían ser electos aquellos que fueran ¡propietarios!, esto último es un dato revelador. De hecho, durante todo el siglo XIX las distintas constituciones que se fueron sancionando excluían del derecho a ser electos a los jornaleros, peones y analfabetos. El reglamento provisorio de Córdoba en 1821, exigía un capital de \$400 para poder ejercer el derecho electoral.⁷ La naciente burguesía criolla tomó nota que la exclusión de las mayorías y de la clase media emergente generaba permanentes conflictos que ponían en peligro la estabilidad del sistema, es así que surgió la idea de una reforma electoral que abriera la posibilidad del voto masivo, pero bajo condiciones de control convenientes. De este modo la participación política de sectores más amplios de la

⁷Las guerras civiles argentinas, Juan Álvarez, pág. 127. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), 1972.

población se ciñó al solo acto electoral. Si bien la ley Sáenz Peña en su momento fue un avance importante, solamente tenían derecho a votar los varones y eran muchos los excluidos: las mujeres, los extranjeros, que eran casi la mitad de la población económicamente activa en esa época, mientras que en el interior profundo del país a muy pocos les llegaba información de la novedad electoral, ni hablar de los trabajadores tanto de la ciudad como del campo. Pero algo más serio aún era la imposibilidad de hecho de que pudieran candidatearse personas pertenecientes a la clase obrera o sectores humildes.

A partir de 1930 sólo hubo golpes de Estado a manos de las FFAA, proscripciones, fraude electoral y represión permanente, hasta 1946.

De 1946 a 1955 fue el único momento en que hubo un reconocimiento de derechos y participación política de la clase obrera, aunque esa participación era mediada desde el Estado por el líder, Evita y los jefes sindicales. Pero duró poco.

Entre 1955 y 1973 se reiteraron los golpes de Estado, las proscripciones, gobiernos civiles débiles y sin legitimidad constitucional y más persecución y represión a la militancia política y sectores populares.

La fórmula “proscripción, represión violenta y fraude” se repitió insistentemente como política de Estado en la historia argentina del siglo XX, y parece repetirse en el siglo XXI con nuevas herramientas.

A la vez hay un dato importante sobre el que volveremos más adelante y es que ciertos organismos del Estado siguieron (y siguen) funcionando de modo autónomo y

haciendo su tarea silenciosamente, sin ningún tipo de control y más allá de los gobiernos de turno. Tal es el caso de la Policía, las fuerzas de seguridad y los servicios de información del Estado que continuaron siempre disponiendo de gran libertad e impunidad en su tarea de eliminar opositores en connivencia (o no) con los gobiernos del momento.

Hay cientos de ejemplos de esto durante gobiernos constitucionales, ni hablar de las dictaduras, pero hoy con más de 30 años de democracia representativa esto sigue ocurriendo; funcionan como Estados autónomos dentro del Estado. No está demás agregar que existe una compleja trama entre grandes empresas (léase poder económico), sectores de la clase política, sindicatos y buena parte del poder judicial que encubren, promueven y alimentan esta situación. Esta reflexión amerita algunas preguntas: cuando hablamos de “democracia” ¿de qué estamos hablando? ¿Es la “democracia” el eje del debate? ¿Qué es lo que hace “menos democrática” a una sociedad si no es la desigualdad? Cuando las clases dominantes enarbolan el discurso de “la democracia” en realidad buscan correr el eje del debate, que es la desigualdad y sus causas. Es así que el concepto “democracia” en boca de estos sectores, carece de un contenido claro y concreto, forma parte de un discurso vacío que, de acuerdo a la necesidad del momento, se rellena convenientemente con cualquier contenido funcional para esa coyuntura. “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”, reza el artículo 22 de la Constitución Nacional de 1994. Quienes redactaron este artículo (entre otros), buscaron garantizar un control férreo sobre ese “pueblo” sin representantes en las instituciones, sin

acceso al bienestar, acorralado en la pobreza y criminalizado de antemano si llegara a sublevarse.

En última instancia la única política de Estado dirigida a los sectores populares, entendiendo por esto a una política que el Estado sigue aplicando siempre, más allá de quien lo administre, ha sido la represión. Ya hablaremos de esto.

“ LA LIBERTADORA” VA A LA ESCUELA... FRANCESA...

“Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero”
Contralmirante Arturo Rial, citado en Peronismo
autocrítica y perspectiva, Miguel Gazzera, Ed. Descartes,
Buenos Aires 1970, pág. 64.

Una vez instalada la dictadura militar, autodenominada “*Revolución Libertadora*”, que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, la relativa independencia económica que implementó el peronismo fue rápidamente reemplazada por el orden económico que, desde EEUU, se estableció para el bloque occidental tras los acuerdos de Bretton Woods de 1944. El conjunto de resoluciones surgidas de esa reunión dispuso las pautas del sistema monetario internacional, con el dólar como única moneda de intercambio, generó normas nuevas en materia de circulación de capitales eliminando las barreras arancelarias. A la vez se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el organismo regulador de la economía mundial; todo diseñado a medida por EEUU que, como ya dijimos, de esa manera se afianzó como la mayor potencia económica y militar dentro de occidente.

En este contexto *la Libertadora* derogó la Constitución de 1949, con lo que dejaron de tener vigencia derechos y garantías de la clase trabajadora, la función social de la propiedad y se abolió el marco jurídico que protegía aspectos esenciales

relacionados con la soberanía económica y política del país. Consecuentemente, por iniciativa del presidente *de facto*, general Pedro Eugenio Aramburu, se ingresó al FMI y se contrajo el primer préstamo con ese organismo.¹

El derrocamiento del gobierno de Perón generó una lógica reacción popular que luego fue conocida como la *resistencia peronista*. Al año siguiente, entre el 9 y 12 de junio de 1956 hubo un intento insurreccional promovido por sectores del Ejército y civiles comandado por el general Juan José Valle, con el propósito de recuperar el poder y restablecer el gobierno peronista. El movimiento fue reprimido sin miramientos.

La pena de muerte, prohibida en la Constitución Nacional, estuvo a la orden del día, más aún, pocos meses antes, en febrero de 1956, los mismos dirigentes de la *Libertadora* habían eliminado la pena de muerte en el Código Militar; en junio la aplicaron sin ruborizarse a dieciocho militares y nueve civiles.

Los *Comandos Civiles* actuaron con total impunidad, saqueando domicilios, secuestrando y asesinando a simpatizantes peronistas, al mejor estilo de la *Liga Patriótica* y *La Legión Cívica* en las décadas del '20 y '30 y a lo que sería la *Triple A* (Alianza Anticomunista Argentina) en los años '70. Además de los cientos de militantes detenidos, el 9 de junio se consumó el fusilamiento clandestino de un grupo de jóvenes peronistas en los basurales de José León Suárez, localidad de la provincia de Buenos Aires.²

¹Ver *Museo de la deuda externa*, <http://museodeladeuda.econ.uba.ar/19-de-abril-de-1956-ingreso-de-la-argentina-al-fmi/>

²Ver *Operación Masacre*, de Rodolfo Walsh, Ed. De la Flor, Buenos Aires 1972.

Ante la perspectiva de fracaso de la intentona, el general Valle se entregó para detener la sangría, pero fue fusilado junto a otros, en la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras, igual que Severino Di Giovanni 25 años antes. Los nombres del pelotón de fusilamiento fueron clasificados como secreto de Estado, no hubo registro de responsables, ni orden escrita, ni decreto de fusilamiento. El presidente *de facto* Aramburu, responsable de los fusilamientos, calificó la intentona como “de cabeza comunista y cuerpo aliancista peronista”.³

El almirante Rojas, años después, declaró: “Tuvimos la sensación que el movimiento contrarrevolucionario era muy poderoso y que debía ser detenido drásticamente”.⁴

En esta tentativa de recuperación del poder por parte de los seguidores de Perón fueron asesinados 38 militares y civiles⁵ y no faltó picana y cachiporra para los cientos de encarcelados. Pero la resistencia recién empezaba.

Mientras las páginas de los diarios se ocupaban del día a día, en 1957 el teniente coronel Carlos Jorge Rosas, al regresar de un curso de dos años en la *École Supérieure de Guerre* de Francia, fue designado subdirector de la Escuela Superior de Guerra de nuestro país. Los militares argentinos consolidaron desde entonces un fuerte vínculo institucional con los militares franceses, referentes de ese país tan admirado por nuestra sociedad y del que en los libros escolares siempre nos hablaron de *Libertad, Igualdad y Fraternidad*.

³José Luis Andrea Mor, Op. Cit. pág. 22. Editorial Cuihue 1999.

⁴Robert Potash, Op. Cit. tomo II, 1945-1962 *De Perón a Frondizi*, pág. 317. Editorial Sudamericana 1994.

⁵Alain Rouquié *Poder militar y sociedad política en Argentina*, tomo II pág. 137. Editorial Emecé 1982.

Esta relación introdujo un cambio sustancial en la formación de las FFAA argentinas. Por un lado, el EA quedó fuera de la órbita de influencia histórica del ejército alemán que había sido el gran derrotado en la Segunda Guerra Mundial. A la vez, ante la necesidad de llenar ese espacio de referencia y de negocios (de armas, entre otros), estableció un fluido diálogo bilateral que redundó en una considerable influencia del ejército francés sobre el EA. Simultáneamente, la *Guerra Fría* decretada por los países occidentales capitalistas contra el bloque socialista, estaba en pleno auge. Estos acontecimientos, sumados al cruento episodio del bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 y al odio antiperonista incitado por la oligarquía y buena parte de la clase media, terminaron de definir el nuevo perfil de nuestras FFAA y marcaron, indefectiblemente, un punto de inflexión en el rol de las FFAA y en el futuro político del país, tal como lo mencionamos antes.

Francia ocupaba Indochina desde el siglo XIX. Promediando el siglo XX los vietnamitas desarrollaron una guerra de liberación, encabezada por el líder comunista Ho Chi Min, que culminó en 1954 con una humillante derrota de las tropas francesas en *Dien Bien Phu*, a raíz de lo cual Francia se tuvo que retirar de Vietnam.

Los militares franceses, luego de esta amarga experiencia, se abocaron a profundizar y perfeccionar la novedosa estrategia de guerra contrainsurgente que habían aplicado sin éxito en el sudeste asiático y se convirtieron en los pioneros de lo que se llamó la *guerra sucia* contra el comunismo. La emplearon luego en Argelia -otro país invadido por ellos- y si bien también tuvieron que abandonar Argelia, el método utilizado fue calificado como efectivo: era la *guerra clandestina*, que consistía en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los opositores políticos a manos de grupos comando no

identificados. La matriz conceptual fue la combinación entre la aniquilación física de la militancia política organizada y la aplicación del terrorismo sobre el conjunto de la población. Un aspecto singular especialmente destacable consistió en que los opositores no eran solo las organizaciones políticas, armadas o no, sino la población toda. Es evidente, en la implementación de esta teoría, que los franceses percibían con razón una oposición generalizada por parte de la población de Argelia, toda vez que ellos eran el ejército invasor de una potencia extranjera -Francia- ocupando Argelia. Cualquier país que se precie de tal hubiera reaccionado ante semejante violación de su soberanía. Para combatir el surgimiento de una resistencia armada clandestina, instrumentaron el método de secuestro, tortura y desaparición ya practicado en Indochina y, a la vez, pusieron en práctica lo que denominaron “guerra psicológica” realizando toda clase de actos de terrorismo sobre la población civil (bombas en espacios públicos, amenazas, ametrallamientos, etc.), de modo tal de crear un “humor social” basado en el miedo y favorable al incremento de la presencia militar. Como ejemplo basta mencionar a la organización clandestina creada por los militares franceses en Argelia, la OAS (*Organisation de l’Armée Secrète*), que realizó 2.600 atentados en Argelia y 415 en Francia con cientos de muertos⁶ y heridos, la mayoría de los cuales les fueron atribuidos convenientemente al Frente de Liberación Nacional argelino a través de los medios masivos de comunicación.

El grueso de los militares argentinos se formó con ellos y los norteamericanos también. En el caso argentino las aulas de la Escuela Superior de Guerra, que en sus inicios estrenaron y

⁶*La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la guerra sucia 1957-1962.* Daniel Mazzei, pág. 111.

dirigieron los instructores alemanes, ahora fueron ocupadas por instructores de la misión francesa. Sin duda la dilatada trayectoria de represión e intervención del EA, más su férrea ligazón con la élite económica y eclesiástica conservadora, generó un terreno por demás fértil para la instalación de la novedosa hipótesis de conflicto difundida por los militares franceses en el marco de la *guerra fría*.

Uno de ellos, el teniente coronel Henri Grand d' Esnon, pronunció una conferencia en esa casa de altos estudios militares el 26 de junio de 1960, en la que describió con precisión la teoría francesa. La misma se publicó con el título “*Guerra subversiva*” en la revista de la Escuela Superior de Guerra, en julio de 1960 (Nº 338)⁷ y formó parte del vasto corpus doctrinario desplegado por los franceses en la región.

La Escuela Superior de Guerra es donde se desarrolla e inculca el Pensamiento Militar. Es allí donde se forman los oficiales superiores que integrarán el Estado Mayor, la élite militar, y la revista de esta Escuela fue el medio de información y difusión más activo a la hora de promover la doctrina francesa. Ya en 1955 el teniente coronel Manrique Miguel Mom instruyó el primer curso de Guerra Revolucionaria, en base a los materiales que le enviaba desde París su amigo, el teniente coronel Rosas, muchos de ellos, ya traducidos, fueron publicados en la revista de la ESG.⁸ Otro medio de difusión importante entre la oficialidad fue la Revista del Servicio de Informaciones del Ejército.

⁷La figura del enemigo interno en el marco del Plan Conintes, de Natalia Ayala Tomasini y Sebastián Chiarini (seminario 2016).

⁸Una aproximación a los fundamentos del terrorismo de Estado en la Argentina: la recepción de la noción de “guerra revolucionaria” en el ámbito castrense local (1954-1962), Mario Ranalletti. PDF 2011.

En esa época, el Ejército Argentino destinaba al mejor graduado de la Escuela de Guerra a realizar un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo un mes de práctica en Argelia. Entre 1954 y 1958 se formaron allí más de 150 oficiales argentinos. Uno de ellos fue el entonces teniente coronel Alcides López Aufranc, quien luego dirigió aquí en 1961 el primer *Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria*, al que asistieron oficiales de catorce países. Por estas aulas pasaron militares del EA tristemente célebres, como el general Ramón Camps, el general Acdel Vilas, primer comandante del “Operativo Independencia” en 1975, también miembros de la Policía Federal, como el comisario Alberto Villar, entre muchos otros, que fueron alumnos aplicados a la hora de poner en práctica las enseñanzas de la “guerra antisubversiva”. El propio López Aufranc, ya como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, instrumentó la intervención del Ejército para reprimir el levantamiento popular conocido como el *Viborazo* en 1971. Como sostuvo el general Osiris Villegas en su libro *Guerra revolucionaria comunista*, (Círculo Militar 1962, pág. 221), “una guerra sin cuartel, sin transacción posible, donde todos los métodos de lucha son lícitos y, por eso, resulta muchas veces cruel y antiética”.

Los norteamericanos no perdieron tiempo y aprendieron rápido, dado que no les resultaba simpático que los franceses intentaran monopolizar su influencia en estos temas y en tantos otros, en una región que consideraban propia y estaba bajo su control. De hecho invirtieron esfuerzo y mucho dinero en la formación de los oficiales latinoamericanos, como lo reconoce el ya citado Robert Mc Namara, secretario de Defensa de EEUU en 1962: “Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y especialistas clave en nuestras escuelas militares y sus

centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar [...] Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de estos hombres [...] Tenemos un largo camino que recorrer para crear e instrumentar las contramedidas efectivas a la guerra revolucionaria.”⁹

Ya en 1956 EEUU enviaba material didáctico a las academias militares argentinas y comenzó un fluido intercambio entre ambos ejércitos¹⁰. Por Fort Bragg, Fort Gordon, la Base Albrook, la Base Rodman y otras 140 instalaciones militares en territorio norteamericano, además de la USARSA (*United States Army School of the America*) más conocida como la Escuelas de las Américas, ubicada en el canal de Panamá, pasaron entre 1960 y 1975, 3.676 militares argentinos y 40.000 de otros países latinoamericanos. La *Escuela de las Américas* fue abierta por los EEUU en 1946 para instruir a militares latinoamericanos en la cruzada contra el comunismo. Desde 1955 en adelante la reorientación de las FFAA latinoamericanas hacia la guerra contra el comunismo adquirió una intensidad inusitada. La instrucción contrainsurgente y la formación anticomunista de todos los miembros de las FFAA fue particularmente penetrante y profunda. Hubo una frondosa bibliografía para consolidar estas ideas en el seno de nuestras FFAA¹¹, como botón de muestra vale la pena repasar el Manual de Conducción Interior, Boletín de Educación e Instrucción del Ejército (BEIE), referido por D´Andrea Mohr en el libro citado, página 23, para advertir la dimensión de esta influencia.

⁹José Luis D´Andrea Mohr, Óp. Cit. pág. 39.

¹⁰Ver “*Las fuerzas armadas en 1956*” La Nación, 6 de enero de 1957.

¹¹Ver *Operación Hierro*, 1959 y *Operación Hierro Forjado*, 1960 para ver la intensidad de la penetración de las ideas anticomunistas entre los miembros de las FFAA y las FFSS.

Sobreabundaba la circulación de publicaciones de marcada tendencia anticomunista y, en particular, dentro de las FFAA basta repasar la cantidad de artículos que se refieren al tema en la *Revista Militar* y en la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*. Los medios masivos de comunicación formaron parte en esta campaña y a la cabeza de la misma se encontró, ¡a no dudarlo!, el diario *La Nación*. “*Sería provechosa una relación más estrecha entre el ejército argentino y el francés. Si no se pueden adoptar pura y simplemente las doctrinas francesas, ellas exigen al menos un estudio más profundo para adaptarlas a nuestro caso particular, considerando nuestras posibilidades y necesidades*”.¹²

A pesar de que en Argentina no habían surgido aún movimientos armados, sí existía una creciente convulsión social a raíz de la desigualdad, las proscripciones, los recurrentes golpes militares y la falta de espacios de participación política para las mayorías. Ante esta realidad en las FFAA predominaba la idea de la intervención total sobre toda la población. Para eso se preparaban tanto en nuestro país como en todo el continente.

Esta doctrina, que ya estaba en marcha, se formalizó en 1959 cuando se suscribió un convenio entre los ejércitos de Francia y la Argentina y comenzó a ponerse en práctica en febrero de 1960, con la instalación en el edificio Libertador de una misión militar francesa permanente, integrada por tres oficiales superiores veteranos de Argelia, en calidad de “asesores”. La misión estuvo presente hasta 1980.

Podemos certificar entonces que a mediados de la década del '50 las FFAA ya se entrenaban para torturar, asesinar y hacer

¹²Declaraciones del jefe del Ejército, teniente general Carlos Severo Toranzo Montero al retornar de un viaje a Francia. *La Nación* 29 de junio de 1960.

desaparecer a quienes, en esa época, recién andaban en pañales o jugando a la bolita y a la rayuela.

Mientras el ciudadano de a pie hacía malabares para sobrevivir bajo una nueva dictadura militar, desde 1955 se desarrolló silenciosamente dentro de las FFAA el proceso de penetración de la teoría francesa sobre “la guerra revolucionaria” y se formaron centenares de oficiales y suboficiales argentinos en un intercambio tan usual como profundo que se coronó con el establecimiento definitivo de la misión militar francesa. Esta reorientación de las FFAA indudablemente contó con el beneplácito y el estímulo de los sectores más conservadores de la clase política, la dirigencia empresaria y la cúpula eclesiástica que bendijo todos y cada uno de los cursos que se instruyeron con estos objetivos. Toda la estructura del Estado y sus principales poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se adecuaron a esta estrategia. Para entonces las FFAA argentinas ya habían desarrollado sus propios reglamentos y se convirtieron en los difusores de la doctrina francesa a nivel regional. A esta altura se habían afinado los conceptos que planteaba la nueva hipótesis de conflicto: dentro del “enemigo interno” se incluyó, además del movimiento obrero, al resto de la población, de ahí la importancia que cobró el control ideológico de toda la sociedad. En esta línea emergió la idea del *Estado Policial* que todo lo controla, toda vez que el enemigo no es solo un posible foco guerrillero, sino toda la población que es la que potencialmente le provee apoyo logístico, información y combatientes. Así, en el contexto de la guerra fría, *el peligro comunista* no estaba solamente en el peronismo, en los partidos comunistas, en movimientos anarquistas o en grupos guerrilleros, sino que estaba en todos lados, la sociedad toda era susceptible de “ser comunista” o de ser manipulada por los comunistas para “sus oscuros fines”, fines que, a los ojos del poder y las FFAA, se definían como

“totalitarios y antidemocráticos”, calificativos idénticos a los aplicados por *la Libertadora* al peronismo.

El general de brigada Ernesto López Meyer, perteneciente a una antigua familia de militares argentinos, nos ayudará a comprender el pensamiento castrense dominante en ese momento:

“Con el advenimiento de la Revolución Libertadora irrumpe en el Ejército un pensamiento doctrinario distinto. La fuerza es encabezada por un grupo de oficiales que, a pesar de adherir formalmente a posturas democráticas, ejercita la discriminación política en sus cuadros, extendiéndola a toda la sociedad – a través de la proscripción del peronismo – cada vez que avanza sobre el poder del Estado. La mayoría de los oficiales, confundidos por la prédica antipopular, no termina por definir su posición ideológica. Conserva un difuso sentimiento nacional, pero ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, se inclina por apoyar a aquellos que respondían a los mandatos de los Estados Unidos y sus aliados y acepta considerar a sectores de nuestra sociedad como enemigos. Un número no despreciable de oficiales, sin embargo, mantiene intactos los postulados nacionales y populares. [...] A partir de entonces se afianza y desarrolla la doctrina de seguridad nacional, que responde a los intereses del enfrentamiento Este/Oeste, debilita en los oficiales el sentimiento de identidad latinoamericana y los orienta, en cambio, hacia la conversión de la Nación en furgón de cola del Norte. Desde ese momento su divorcio con toda alternativa democrática y de participación popular será marcado.”¹³

¹³El CEMIDA: militares argentinos para la transición democrática, Daniel Mazzei, págs. 68/69, Ed. Capital Intelectual, 2011.

Sus apreciaciones se complementan con las de su colega, el ya citado coronel José Luis D´Andrea Mohr:

“Durante largos años se nos inculcó a los integrantes de los cuadros la convicción de que debíamos vivir totalmente prescindentes del problema y del panorama político del país. Y se nos dijo con harta frecuencia que los políticos solo aspiraban a satisfacer ambiciones personales ... ¿qué produjo esto? ... una subconsciente impresión de que, tarde o temprano, la solución debía estar en nuestras manos ... Creo que esto predispuso los ánimos para que el partido único, temible instrumento de todas las dictaduras, fuera aceptado sin reticencias ... bajo las falacias de un partido con fines nacionales.”¹⁴

Ante el aumento del conflicto social, el gobierno de Arturo Frondizi, (1958-1962) puso en marcha el *plan CONINTES* (Conmoción Interior de Estado) que de modo explícito sentó las bases programáticas de la intervención de las FFAA en la represión interna. A la vez fue el complemento ideal para la introducción de la doctrina francesa ya que sirvió de soporte para la planificación del terrorismo de Estado aplicado entre 1975 y 1983. Fue un instrumento importante que se sumó a la larga cadena de decretos, leyes y disposiciones, a partir de las cuales se fue legitimando durante el siglo XX no sólo la represión sino el control político del conjunto de la sociedad por parte de las FFAA.

Implicó una profunda reformulación de las mismas en cuanto a su distribución territorial y sus asignaciones

¹⁴Nuestro ejército, nuestra democracia, artículo del coronel José Luis D´Andrea Mohr en la *Revista Militar*, mayo-junio de 1956, pág. 2. Citado por Alain Rouquié en *Poder Militar y Sociedad Política en Argentina II 1943-1973*, Editorial Emecé, pág. 358.

operativas. También involucró a todas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. En el marco de la *Doctrina de Seguridad Nacional* todos los recursos y esfuerzos de las FFAA y de Seguridad de la Nación se orientaron a combatir “la amenaza del llamado *movimiento comunista*, bajo cuya calificación las Fuerzas Armadas incluyeron a todos los sectores sociales y movimientos políticos que se oponían a los parámetros establecidos.”¹⁵

Podemos afirmar que el plan CONINTES fue un hito significativo y no siempre recordado en el proceso de reconversión definitivo de las FFAA que apuntó hacia el concepto del “enemigo interno” y el control total de la población.

¹⁵*Plan Conintes, represión política y sindical*, publicación del Área de Investigación Histórica del Archivo Nacional de la Memoria, pág. 37. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 2014.

REPRESIÓN LEGAL O ILEGAL, ESA ES LA CUESTIÓN

Siempre hubo una disputa entre sectores del poder político y el militar respecto a que, según la óptica militar, las normas legales muchas veces obstaculizaban la eficacia de la represión. Se otorgaban excesivas garantías a los detenidos y la normativa no terminaba de adaptarse a las necesidades operativas de la fuerza. Este conflicto se expresó en varias circunstancias durante el siglo XX y estuvo en tensión durante toda la década del '60, aunque para entonces el pensamiento dominante en las FFAA y el poder económico era que había que eliminar todo obstáculo legal. Sin embargo, las FFAA siempre necesitaron apoyarse sobre un esquema jurídico que de algún modo les otorgara cierta legitimidad, para eso mantuvieron históricamente sólidos vínculos con los sectores más conservadores del Poder Judicial. En agosto de 1967, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, el PEN dictó la ley 17.401 de represión al comunismo.

En 1971, durante la dictadura del general Lanusse, en un escalón más de la estrategia de combinar la represión legal con la ilegal, se instrumentaron una serie de leyes entre las que se destacó la Ley 19.081 que autorizaba la intervención de las Fuerzas Armadas para *“prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos”*, tal como lo expuso un editorial del diario *La Nación* del 23 de junio de 1971: *“la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de actos subversivos constituye una garantía para todos [...] garantía que reside en la solvencia moral de nuestras Fuerzas Armadas”*.

A la vez se sancionó la ley 19.110 que reglamentaba el funcionamiento, dentro de la Cámara Federal Penal Nacional del *fuero antisubversivo*, también conocida como “la Cámara del terror” o “el Camarón”. Este fuero, integrado por un conjunto de jueces federales y fiscales ultraconservadores, designados de modo directo por el Poder Ejecutivo de facto, fue efectivo a la hora de reprimir los movimientos sociales y políticos que combatían a la dictadura militar de entonces, si bien para los militares seguía siendo un camino poco eficaz. No obstante, esto hoy lo toman como argumento en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el “último intento de reprimir a la subversión con métodos legales”, de manera de justificar (¡y también de reconocer!) la represión clandestina que ya practicaban y que generalizarían pocos años después. También fue utilizado por los defensores más convencidos de la dictadura al afirmar que, aunque el “Camarón” metía presos a los subversivos, luego venía un gobierno elegido por el voto ciudadano y los liberaba a todos, (haciendo referencia a la amnistía otorgada a los presos políticos por el gobierno constitucional del presidente Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973) por lo que, a criterio de las FFAA y en particular del poder económico, no cabía otra posibilidad que hacer lo que hicieron entre 1975 y 1983.

Otra explicación a la que recurrieron los abogados de los militares fueron los decretos 2770/71/72 firmados en octubre de 1975 bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón,¹ donde se convocó a las FFAA a “*ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.*” Estos decretos ampliaron la intervención de las FFAA iniciada con el decreto 261 de febrero de 1975, que la circunscribía solo a la provincia de Tucumán. Con esta normativa en la mano

¹Ver fondo documental del Archivo Nacional de la Memoria.

intentaron darle un barniz de legalidad y constitucionalidad a los métodos de “aniquilamiento” que aplicaron y para los que se venían adiestrando desde 20 años atrás. Pero en su curiosa interpretación, se “olvidaron” del párrafo del Decreto 2772 que afirma que “las FFAA, *bajo el comando superior del Presidente de la Nación...* procederán a ejecutar las acciones...”. Ellos mismos se encargaron de malograr este argumento de defensa al derrocar, seis meses después, a *su comando superior*, es decir a la Presidenta de la Nación, al Consejo de Seguridad Interior (decreto 2770) integrado por todo el gabinete de Ministros, que era la autoridad de aplicación y a todo el gobierno constitucional, invalidando de este modo los decretos mencionados.

A la vez estos decretos fueron cuestionados en su momento por sectores de la oposición por no haber sido avalados ni debatidos por el Congreso Nacional, dato para nada menor.²

El doctor Ítalo Luder, presidente provisional al momento de la firma de los decretos de octubre, (la presidenta Isabel Martínez estaba de licencia por problemas de salud) declaró en el Juicio a las Juntas militares en 1985 que “aniquilar el accionar de los elementos subversivos aludía a inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significó aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal”.³

Un agravante que las propias FFAA se encargaron de introducir fue la Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976 que modificó los decretos mencionados, eliminando toda

²Ver declaraciones periodísticas del Presidente del Movimiento de Renovación y Cambio del radicalismo, Raúl Alfonsín en febrero de 1975.

³Ver *decretos de aniquilamiento* en wikipedia.org.

referencia a “*neutralizar*” suplantándola por “*aniquilar*” y extendiendo la referencia del “*accionar subversivo*” a todas las personas consideradas subversivas. Así queda claro hasta qué punto las FFAA aplicaron fielmente la doctrina francesa y la doctrina de seguridad nacional diseñada en Washington.

Es observable cómo, al menos desde el inicio de la “guerra fría”, el poder (económico, político y militar occidental) buscó diseñar toda una arquitectura jurídica concebida como instrumento de legitimación de la represión, en detrimento de las garantías constitucionales. Este mecanismo se entiende en un contexto histórico donde el valor de lo jurídico siempre fue relativo, al menos desde inicio del siglo XX y, en particular a partir del golpe militar de 1930, y siempre supeditado a los intereses dominantes. Ejemplo de esto hoy es el *lawfare*, que es como se instrumenta la guerra hoy para proscribir y eliminar movimientos y dirigentes políticos opositores al poder del capital.

Echando un vistazo al siglo XX se puede apreciar que las FFAA siempre jugaron su apuesta política asociada a los sectores económicos más poderosos, mantuvieron una clara alineación con el poder imperial de turno y presentaron serias dificultades para adaptarse a las normas legales y a la Constitución. Azuzadas por el poder económico, por la embajada estadounidense y por su propia historia y formación, presionaron permanentemente para modificarlas o neutralizarlas y, cuando no pudieron, derrocaron a los gobiernos a través de las armas.

Queda claro entonces que, en el marco de la doctrina francesa y de seguridad nacional, la legalidad constitucional significó siempre un estorbo para las FFAA a la hora de combatir a la *subversión* y a los movimientos sociales. Había que intervenir, a través de golpes militares, para garantizar la supervivencia

del sistema o, de otro modo, *adecuar* la legislación, de forma tal de dejar el criterio y las manos libres, para que éstas actuaran como creyeran conveniente, en caso de considerarlo necesario.

Para esto, las FFAA contaron con el invalorable aporte de los estamentos conservadores más consolidados de la sociedad argentina, donde la Iglesia Católica siempre pisó fuerte.

EGO TE ABSOLVO...

“La lucha antiguerrillera es una lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus altares... esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva, es una lucha en defensa de Dios ... por ello pido la protección divina en esta ´guerra sucia ´en que estamos empeñados.”

Monseñor Victorio Bonamín, provicario castrense, diario La Nación, 6 de mayo de 1976 (citado en Iglesia y Dictadura de Emilio Mignone, pág. 25)

Hay que tener en cuenta que, si bien las FFAA como hemos visto, tuvieron un rol protagónico en el “control social interno” fusilando en la Patagonia, en la Semana Trágica o bombardeando la ciudad de Buenos Aires en el ´55, aun no estaba del todo generalizada entre los honorables hombres de armas la costumbre de torturar a conciudadanos/as.

Esta era una faena que siempre cumplió eficientemente la Policía, desde su origen. En 1910 se creó dentro de la Policía de la Capital la *División de Orden Público* compuesta de tres secciones: *Orden Público, Orden Social y Servicio del Jefe de Estado*. Esta nueva estructura se ocupó de optimizar el control social y profesionalizar aún más la metodología del interrogatorio. Luego, en 1931, se recicló en lo que fue la *Sección Especial de Represión al Comunismo* (SERC), al frente de la cual fue nombrado el hijo del ya mencionado escritor y poeta Leopoldo Lugones.

Leopoldo *Polo* Lugones (h), comisario de la Policía de la Capital durante la gestión del general golpista José Félix Uriburu, siendo jefe de la SERC, introdujo en los interrogatorios la primicia de la picana eléctrica como instrumento de tortura con tenebroso éxito, dado que se popularizó rápidamente entre las fuerzas de seguridad hasta el día de hoy. La ironía trágica de la vida política de nuestro país hizo que la propia hija de *Polo* Lugones, Susana *Pirí* Lugones, una militante revolucionaria en los años ´60/’70, fuera secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, siendo torturada con la picana que difundió su padre entre las fuerzas del orden. Cuentan quienes la conocieron que, haciendo gala de su humor negro, solía presentarse como “la nieta del poeta y la hija del torturador”.¹

La picana eléctrica originalmente se utilizaba en el campo, para movilizar al ganado a través de la manga por donde lo subían a los trenes o camiones con destino al matadero. Parece una perversa metáfora, pero así es nuestra historia.

Con la doctrina francesa en una mano y la picana en la otra, las FFAA profundizaron entre los jóvenes oficiales y suboficiales el espíritu de cuerpo, e inculcaron un odio visceral hacia ese enemigo que ya no era otro militar, sino un civil, no era un extranjero, sino un connacional. Lejos había quedado el respeto al honor militar del adversario en las guerras convencionales, ahora se había transformado en el odio dirigido hacia un enemigo que era un ciudadano común, que podía ser varón o mujer, que podía ser un hijo, un hermano o un vecino, al que había que violar, humillar y destruir física y moralmente para luego hacerlo desaparecer.

¹ Ver *Los Lugones, una tragedia argentina*, Marta Merkin, Ed. Sudamericana, 2004.

De este modo asumieron la canallesca tarea de secuestrar civiles, recluirllos en centros clandestinos de detención, torturarlos con picana y otros métodos, para luego asesinarlos y quemar sus cadáveres o cargarlos encapuchados en aviones y helicópteros militares para arrojarlos vivos al mar. Ni hablar del tema del robo de bebés a prisioneras embarazadas, a las que luego de hacerlas parir esposadas y encapuchadas, asesinaban sin miramientos después de torturarlas hasta más no poder... todo esto en el marco de lo que denominaron “actos de servicio”.

Ante este cuadro dantesco, difícil de describir con palabras cabe preguntarse ¿dónde quedó el honor y la valentía de aquellos militares?

Evidentemente, al asumir como propia esta empresa criminal, demostraron haberlos perdido desde mucho tiempo atrás, si es que alguna vez los tuvieron.

Hubo sólo un puñado de hombres de armas que repudiaron este proceder, por lo que fueron exonerados y perseguidos. Tal es el caso del mencionado general Meyer y una centena de oficiales y suboficiales que años más tarde conformaron el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

Sin duda toda esta novedosa estrategia de *guerra interna* necesitó de un férreo soporte ideológico y espiritual. De este último aspecto se ocupó la Iglesia Católica Apostólica Romana que, desde su llegada a estas tierras con los españoles y portugueses, acompañó, sostuvo y justificó todas las atrocidades cometidas por los conquistadores en su momento y ahora por sus herederos. Firme en esa línea la Iglesia Católica y, en particular los sectores más conservadores dentro de ella, tuvieron un rol protagónico en la implementación de la “guerra sucia” y fueron el sostén moral

y espiritual para aquellos militares que flaqueaban en su tarea cotidiana de secuestrar, violar, torturar y asesinar a personas inermes.

A la vez los militares franceses no vinieron solos, trajeron con ellos a un sector ultramontano de la Iglesia que comulgaba con su visión del mundo occidental. La Ciudad Católica (*Cité Catholique*), fundada en 1946 en Francia por Jean Ousset, asoció su pensamiento a la tendencia antimodernista, filomonárquica y conservadora del catolicismo francés y se refugió en la idealización de un pasado situado en la Edad Media. Integrada por sacerdotes y militares franceses, el capellán Georges Grasset creó la sucursal en Argentina en mayo de 1959. Se distinguieron por su anticomunismo a ultranza y enfrentaron con férrea decisión lo que denominaron *la revolución anticristiana*, apuntando en particular al Concilio Vaticano II, al que calificaron como la infiltración comunista en la Iglesia.² Formaron parte activa del soporte teórico y espiritual en la formación de la “guerra antisubversiva”. En esta lucha -sostenían- no hay límites ni legales ni morales, es una *Guerra Santa*. Su principal medio de difusión, la revista *Verbo* editada en Argentina, publicó un artículo en septiembre de 1975, donde se legitimó la tortura como herramienta necesaria en la *guerra contra la subversión*.

El integrismo católico, durante la década del 60, nutrió a varios grupos de choque en su cruzada anticomunista. Basta mencionar a *Tacuara*, liderado por Alberto Ezcurra Uriburu, proveniente de una familia nacionalista católica. Esta

²Ver SCIRICA, Elena. “Visión religiosa y acción política. El caso de Ciudad Católica – *Verbo* en la Argentina de los años sesenta”, en: PROHAL MONOGRÁFICO, Revista del Programa de Historia de América Latina. Vol. 2. Primera Sección: Vitral Monográfico Nro. 2. Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 2010. www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/...N2/.../SCIRICA_Elena.pdf

organización desarrolló, durante la primera mitad de esa década, gran actividad de reclutamiento en colegios secundarios tanto públicos como católicos a través de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios (UNES). También tuvo presencia en la facultad de derecho de la UBA, donde creó el Sindicato Universitario de Derecho (SUD), agrupación que fue reconocida por las autoridades universitarias y de donde surgieron muchos abogados que ocuparon cargos en el Poder Judicial durante la dictadura militar de los generales Onganía-Levingston-Lanusse, (1966-1973) mientras algunos otros se incorporaron a la ortodoxia peronista. La *Guardia Restauradora Nacionalista* (GRN), fue un desprendimiento de Tacuara, con vínculos en el Colegio Militar, con varios generales y con el sacerdote Julio Meinvielle. Fueron militantes activos a la hora de perseguir judíos y *zurdos* de diversas vertientes y se fueron reciclando en otras agrupaciones similares de acuerdo a la coyuntura. Vale la pena mencionar que estos grupos *católicos-nacionalistas* también fueron atravesados por la agitación política e ideológica de la época, lo que produjo fracturas por izquierda, tal el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara que evolucionó hacia el marxismo y se integró al peronismo revolucionario.³

Un dato por demás curioso es que en los cursos de guerra contrarrevolucionaria se exhibía, como parte de la instrucción, la película “*La batalla de Argel*” (1966) del director italiano Gillo Pontecorvo. Esta excelente película, de gran éxito en los ´60, denunciaba las atrocidades del ejército francés durante la ocupación de Argelia. Tan bien recreadas fueron las escenas de la película, inclusive las escenas de tortura, que los propios militares franceses, partícipes

³ Ver *Tacuara, la pólvora y la sangre*, de Roberto Bardini. Editorial Océano de México. 2002.

protagónicos de aquellos hechos, reconocieron públicamente ante la periodista y documentalista francesa Marie-Monique Robin la veracidad que exponía el film. Fue por eso que en estas tierras se utilizó como “material didáctico” en la instrucción militar.

En el caso de los cursos que se dictaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la proyección fue presentada por el capellán naval.

A continuación, es elocuente el testimonio ante Marie-Monique Robin de dos cadetes de esta Escuela Naval que asistieron a esos cursos:

- ¿El capellán justificaba los métodos de La batalla de Argel?

Aníbal Acosta – Absolutamente.

- ¿Incluso la tortura?

Julio César Urien – Sí, la tortura no era considerada un problema moral, sino un arma de combate.

Aníbal Acosta – Un sector de la jerarquía católica sostuvo ese tipo de práctica. Nos presentaron esa película para prepararnos para un tipo de guerra que no era la que nos llevó a entrar en la Escuela Naval, la guerra regular. Nos preparaban en misiones policiales contra la población civil, que pasó a ser el nuevo enemigo.⁴

⁴Marie-Monique Robin *Escuadrones de la muerte, la escuela francesa*, citada en *El Silencio, de Paulo VI a Bergoglio, las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA*, Horacio Verbitsky, Ed. Página 12/Sudamericana 2006, página 36 y 37.

Fueron muchos los grupos ultra católicos y nacionalistas que frecuentaban los círculos del poder militar y eclesiástico, entre otros el movimiento de los *Cursillos de Cristiandad* y los *Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey*, muy activos en el golpe del general Onganía.

Además de los ya citados Julio Meinvielle y Alberto Ezcurra Uriburu, que fue secretario privado de monseñor Adolfo Tortolo, hubo muchos intelectuales y sacerdotes de destacada militancia anticomunista como el mencionado monseñor Victorio Bonamín, capellán del Colegio Militar de la Nación; Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA); el profesor Jordán Bruno Genta, el doctor Carlos Disandro, Carlos Sacheri, Héctor LLambías, Ricardo Zorraquín Becú, Máximo Etchecopar, secretario de redacción del periódico nacionalista *Azul y Blanco* y una larga lista de ensayistas que difundían sus ideas a través de editoriales, libros, artículos y numerosas publicaciones similares a la revista *Verbo*, muchos de ellos profesores en el Colegio Militar.

Pero está claro que no se trató solo de sectas ultraconservadoras. Fue la jerarquía católica la que prestó el mayor apoyo moral y espiritual a los militares, y para esto se firmó un acuerdo el 28 de junio de 1957 entre el Vaticano y el gobierno nacional *de facto* que llevó las firmas del general Aramburu y el almirante Rojas a partir del cual, entre otras cosas, se estructuró legalmente la instrumentación del Vicariato Castrense en Argentina.⁵

⁵Ver *Iglesia y Dictadura, el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar*, Emilio Fermín Mignone. Ediciones Universidad Nacional de Quilmes y Página 12.

Si bien el Vicariato Castrense fue una institución heredada de la colonia española, recordemos *la Cruz y la Espada* como concepto de dominación, fue a partir de este convenio que se amplió, se consolidó y se integró en las FFAA toda una estructura eclesiástica compuesta por vicarios, provicarios, capellanes, auxiliares y sacerdotes, cuya misión fue “el cuidado espiritual de los militares de tierra, mar y aire”. Aunque fue un tema no del todo resuelto a la hora de firmar el compromiso, todos ellos ostentarían grado militar con rango de oficiales de acuerdo a su jerarquía, derecho a ascensos, régimen de retiros y privilegios, cobrando un sueldo acorde a su escalafón por cuenta y cargo del Estado nacional.

El cardenal Antonio Caggiano, arzobispo de Buenos Aires, ejerció el vicariato castrense desde diciembre de 1959 hasta abril de 1975. En 1961 Caggiano inauguró el *Primer Curso de Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria* en la Escuela Superior de Guerra, junto al presidente Arturo Frondizi. El curso contó con el asesoramiento de los coroneles franceses Robert Bentresque y Jean Nougues, miembros de la misión francesa, y entre los profesores figuraron algunos intelectuales como el periodista Mariano Grondona y sacerdotes como monseñor Victorio Bonamín.⁶

Hay que decir que no debería sorprender la participación de la Iglesia Católica en estas sombrías labores teniendo en cuenta su historia. Mucho se ha investigado y mucho se sabe de la persecución implacablemente cruel y sangrienta que practicó la Santa Iglesia Católica durante toda su existencia. Tal vez el más tristemente célebre inquisidor fue Tomás de Torquemada, que encabezó el Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio en España en 1483. Fueron cientos de miles los hombres y mujeres salvajemente torturados y quemados

⁶ Horacio Verbitsky, op. cit. pág. 38, Ed. Sudamericana / Página 12, 2006.

vivos por supuestas herejías, tanto en Europa como en la América recién “descubierta” por los españoles y portugueses. Estos fueron los imperios que colonizaron estas tierras y esta fue la herencia cultural que nos dejaron. Nosotros somos hijos de esa colonización.

Otra reflexión: *¿Fue una guerra? Hay un detalle llamativo a destacar y es que los militares franceses nunca negaron que la base de su gran teoría contrainsurgente era ni más ni menos que **la tortura**, lo afirmaron públicamente y sin eufemismos en el documental francés “Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa” de Marie-Monique Robin⁷, y no demostraron ninguna vergüenza, al contrario, aseguraban que era necesaria para obtener la información rápidamente, era parte de lo que ellos definieron como su “trabajo”.*

Pero no ocurrió lo mismo con los militares argentinos. Salvo muy pocos casos individuales, como el del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, el conjunto de las FFAA y de Seguridad mantuvieron un silencio cerrado, un “pacto de sangre” que, a pesar de ellos, hizo agua por los cuatro costados ante la evidencia irrefutable y archidemostrada del uso sistemático del secuestro, tortura, asesinato y desaparición durante la última dictadura cívico-militar.

Cabe preguntarse entonces ¿por qué los integrantes de las FFAA argentinas ocultaron con tanta obstinación lo que ellos consideraban como “actos de guerra”?

En el discurso castrense estuvo siempre muy asentado y naturalizado el concepto de que, en la lógica de la guerra, el

⁷Existe el libro y el film documental del mismo nombre, ambos de la misma autora.

soldado no asesina, sino que enfrenta al enemigo. El argumento que lo sostiene es que en una batalla donde confrontan dos ejércitos se mata y se muere.

Dentro de ese razonamiento militar esto sería medianamente aceptable si esa batalla la protagonizaran ejércitos relativamente similares, de algún modo simétricos, como lo fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante este sea un argumento base de su defensa, no se puede aplicar al caso argentino justamente por la asimetría que caracterizó los enfrentamientos, cuando los hubo, que difícilmente puede considerarse una guerra. Tal vez este sea uno de los motivos del ocultamiento vergonzante de aquellos “actos de guerra”, que siempre fueron profusamente difundidos como heroicas batallas donde el EA luchó contra las arteras fuerzas de la subversión. No hubo tales heroicas batallas toda vez que no se desarrolló ninguna guerra civil declarada ni evidente. Lo que sí hubo fue un fuerte ascenso del conflicto social reprimido y negado durante 18 años (1955/1973), que el Estado y quienes lo administraban no supo resolver o procuró acallararlo, una vez más, recurriendo a la violencia extrema. Pero hay otro dato que es decisivo: excluyendo los enfrentamientos armados que hubo entre 1970 y 1976 donde esta asimetría era innegable, en Argentina y en América latina en general, se secuestró, se torturó, se violó y se asesinó a personas desarmadas a las que se secuestraba con total impunidad en sus lugares de trabajo, en sus casas o en la vía pública ¿Pueden llamarse a estas acciones “actos de guerra”, “actos de servicio” o “combates”? ¿Se puede estar orgulloso de haber “combatido” con estos métodos? Ante ese panorama donde estos hechos se repitieron de manera masiva y sistemática es difícil creer que se tratara de “una guerra”. Aquello no fue tomar prisioneros en una batalla; fueron secuestros de militantes políticos. No fue matar al

enemigo en una batalla, fue asesinato liso y llano de personas inermes, agravado por el secuestro, la tortura, la violación y la desaparición de los cuerpos. Toda esta evidencia desenterrada con mucho esfuerzo y durante décadas por los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, demuestra que no hubo una guerra sino un exterminio planificado de civiles a manos de las FFAA del Estado argentino. Y lo que lo convierte en crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles es justamente el hecho de que fueron cometidos por el Estado, por agentes del Estado, no por un grupo de civiles mal armados. “Los homicidios masivos los comete el poder punitivo. Fuera de toda duda es verificable que cuando el poder punitivo del Estado se descontrola, desaparece el Estado de derecho y su lugar lo ocupa el de policía”.⁸

Finalmente, pretender justificar lo injustificable con el argumento de que “aquí hubo una guerra”, es por lo menos pobre e inconsistente, porque aún en la guerra hay códigos que respetar.

Hasta aquí, esta breve descripción y enumeración de hechos (hay muchos más) forman parte de la demostración fáctica de que es el sistema el que siempre estuvo y está “*en guerra*” contra todo aquel que cuestione las injusticias del mismo y reclame derechos. La preparación de las FFAA y de Seguridad en la represión interna en todos los países del llamado *Tercer Mundo* fue un proyecto global diseñado en los países capitalistas centrales, liderado por los EEUU desde la posguerra.

⁸*Crímenes de masa*, Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 33, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2010.

Puede comprobarse empíricamente que esta “guerra” subterránea se desarrolló permanentemente en forma dirigida, selectiva, encubierta o no y fue mutando de acuerdo a las diferentes coyunturas políticas, pero nunca se detuvo. Cuando la Policía y los grupos parapoliciales no lograron contener y acallar la resistencia, intervino el Ejército ahogando en sangre a aquellos movimientos sociales emergentes durante el siglo XX.

De modo que los argumentos de los militares genocidas, que sostienen que ellos (las FFAA) actuaron ante una guerra ya declarada y en marcha (por las organizaciones guerrilleras de los ´70), pierden sustento ante los hechos aquí relatados, puesto que ellos y el occidente cristiano se venían preparando desde la posguerra (y desde antes) para una guerra ideológica declarada por ellos mismos contra el comunismo en cualquiera de sus envases o denominaciones.

También es un hecho comprobable que, como respuesta a esta *guerra* planteada desde el poder, las organizaciones guerrilleras que surgieron en nuestro país a principios de los ´70 se embarcaron en un proyecto de *guerra popular revolucionaria* para la toma del poder. Pero no bastó con proponerse esa estrategia y difundirla a través de la prensa partidaria y de diversas acciones de propaganda armada.

Más allá de la aspiración que tuvieron las organizaciones armadas de convertirse en un futuro ejército popular, hay por lo menos dos aspectos básicos que en la práctica no se verificaron. El primero fue que nunca lograron ese ingrediente infaltable y vital que es llegar a un estadio de la lucha en que, sectores importantes del pueblo adhieren y toman parte activa en la lucha armada, momento a partir del cual la dimensión del conflicto puede comenzar a masificarse progresivamente, convirtiéndose en una insurrección parcial

y generalizarse eventualmente hacia una futura guerra civil. El otro aspecto, que inevitablemente debe conjugarse con el anterior, es la necesidad de una crisis profunda en el seno del poder político y el quebrantamiento interno en las FFAA, donde la impotencia y ausencia de conducción política sean visibles para toda la sociedad. Las asimetrías se reducen cuando el poder y sus FFAA entran en descomposición, se resquebrajan y, en ese contexto, adquiere factibilidad la propagación de una insurrección popular con posibilidades de éxito.

Esto es algo que nunca llegó a ocurrir en la Argentina de los años '70, aunque sí hubo una fuerte crisis política entre 1955/1976, producto de un marcado ascenso de la lucha de clases y de la implosión del peronismo, pero no tuvo ninguno de los dos ingredientes descriptos en forma dominante. Por errores propios, que no son motivo de análisis aquí, las organizaciones armadas se fueron aislando de las masas populares, encerrándose paulatinamente en un aparato político-militar endeble y vulnerable y fue así que para las FFAA fue relativamente sencillo aniquilarlas, esto último reconocido por los propios militares que participaron del terrorismo de Estado. Dado lo polémico de muchos aspectos de este tema, lo retomaremos más adelante.

Pero existe un hecho más que demuestra la fragilidad de las excusas militares y tiene que ver no solo con cuáles fueron los orígenes de la violencia sino también en quiénes fueron las víctimas del genocidio de la última dictadura militar. En el marco de un plan mucho más sofisticado, elaborado durante años dentro de las FFAA y el poder económico, las víctimas volvieron a ser los obreros, los trabajadores, los pobres, de modo que se repitió la historia de la Semana Trágica, de los fusilamientos de la Patagonia, de la Forestal, de los basurales de José León Suarez y los bombardeos del '55. Y cuando

hablamos de “obreros, trabajadores y pobres” no solo nos referimos a los activistas y militantes políticos que lucharon y murieron por las reivindicaciones históricas de estos sectores, sino a la clase misma en su conjunto, porque con cada golpe militar, se instrumentó un plan económico que sumergió aún más en la pobreza y la exclusión justamente a esta masa mayoritaria de la sociedad que es la que genera la riqueza del país. En última instancia, en esencia, el núcleo duro del conflicto es la lucha de clases por el reparto de esa riqueza que se produce en el país, el reparto de la renta, de *la torta* nacional.

La asimetría y la violencia social que comporta esa distribución desigual, dentro del sistema capitalista, por cierto, da como resultado una confrontación que, invariablemente, termina siendo violenta porque *el sistema* nunca cedió ni un ápice de sus privilegios en esa puja distributiva. De esto hablaremos a continuación.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE FORMÓ POLÍTICAMENTE LA GENERACIÓN DEL '60 Y '70?

"Desde fines de la década de los años 50 el Ejército Argentino se venía preparando para la Guerra Revolucionaria"; dicha preparación tuvo "como base un cuerpo doctrinario constituido por numerosos reglamentos militares".

Guerra Revolucionaria en la Argentina (1959-1978);
Ramón Genaro Días Bessone, Buenos Aires, Ed. Círculo Militar, 1988.

En nuestra historia, cada golpe de Estado respondió a la implantación de un plan económico, siempre vinculado al contexto internacional de profundización del modelo capitalista-dependiente que redundó en el enriquecimiento cada vez mayor de los sectores más privilegiados y concentrados de la economía. Tal vez, en el caso del golpe de 1955 contra el gobierno peronista, se vea más claro por contraste. El objetivo de la autodenominada *Revolución Libertadora* fue dismantelar la intervención estatal en la actividad económica, la eliminación de los controles estatales sobre "el mercado" y diluir en la nada los derechos adquiridos por los trabajadores; por otro lado, se estimuló la exportación agropecuaria a través de una conveniente devaluación del peso. A la vez la Argentina dejó de ser un país acreedor -algo excepcional en nuestra historia- para volver a ser deudor, al

tiempo que la dictadura militar decidió ingresar al Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas medidas, sumadas a muchas otras, significaron una gran transferencia de ingresos hacia el sector económico más concentrado del campo, representado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en detrimento del mercado interno y las clases populares.¹ Esta estrategia se repetirá con otros ingredientes en los futuros golpes militares de 1966 y 1976. Las consignas marketineras de “cultivar el suelo es servir a la Patria” y “achicar el Estado para agrandar la Nación” difundidas profusamente por la SRA y sus representantes políticos, se seguirán esparciendo hasta nuestros días, pero la traducción al lenguaje común y a la realidad cotidiana del ciudadano de a pie, siempre fue achicar el bolsillo del trabajador para agrandar las ganancias del poder económico. En el fondo no hay más misterio que ese.

Con el peronismo proscripto y perseguido, miles de jóvenes y obreros que vieron perder de un plumazo sus derechos, implementaron la resistencia a través de diversos métodos de lucha clandestina como el sabotaje, las huelgas insurreccionales, los famosos “caños”, las bombas panfleteras, los clavos “miguelito”, todas ellas formas de lucha callejera que permanecían en la memoria popular desde la época de los anarquistas.

Muchos fueron los hitos de la resistencia, uno de ellos viene a cuento por la aplicación del plan CONINTES: fue la toma del frigorífico estatal Lisandro de la Torre, el 15 de enero de 1959. Comenzó con una huelga contra la privatización y el consiguiente desguace del frigorífico, continuó con la toma del establecimiento y se transformó en una insurrección popular que duró cuatro días, en la que tomaron parte no sólo

¹Ver *Historia de la economía argentina del siglo XX*, Alfredo Zaiat y Mario Rapoport, Ed. Página 12, pág. 393. 2010.

los obreros del frigorífico sino sus familias y todo el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, extendiéndose a Villa Lugano, Villa Luro, Liniers y parte de Floresta. De ahí surgieron líderes sindicales como Sebastián Borro, que más tarde formarían parte del peronismo revolucionario. La respuesta del Estado fue enviar 1500 efectivos del Ejército, Policía y Gendarmería y cuatro tanques Sherman que derribaron los portones del frigorífico, desatando una violenta represión en el marco de la aplicación del flamante plan CONINTES. El tanque que derribó el portón del frigorífico era conducido por un joven oficial del Ejército, Jorge Esteban Cáceres Monié, quien más tarde sería jefe de la Policía durante la dictadura del general Lanusse.²

Otros episodios que marcaron el tono de las tensiones sociales y donde también se aplicó con rigor el plan CONINTES fueron la huelga de los telefónicos en agosto de 1957, que duró 72 días, la huelga bancaria de enero de 1958 que, con más de 8000 empleados bancarios detenidos duró 52 días, la lucha de los ferroviarios contra el plan Larkin (desguace y privatización de la red ferroviaria del Estado) en 1958 también, la huelga metalúrgica de 1959, que se extendió por tres meses, durante los cuales fueron detenidos alrededor de 800 delegados en todo el país. Estos son quizás los de mayor envergadura de esos años, y hablan tanto de la extensión y profundidad del conflicto social, como de la invariable y violenta respuesta estatal.

Sobre el plan Larkin amerita detenernos brevemente para constatar, una vez más, que el diseño de nuestro futuro no estuvo casi nunca en nuestras manos, sino en las de los ambiciosos hombres del país del norte (EEUU). En 1960 una comisión de “consultores” enviados por el BIRF (Banco

²Ver Roberto Baschetti, *Óp. Cit.*

Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo que hoy conocemos como Banco Mundial) presentó un diagnóstico del estado de los transportes en el país. En el mismo se destacó la necesidad de invertir en caminos y autopistas a la vez que proponía clausurar 10.000 kilómetros de vías férreas, el cierre de talleres ferroviarios dedicados a la fabricación de material rodante y mantenimiento del sistema ferroviario estatal, lo que incluía el despido de miles de trabajadores ferroviarios. Toda la inversión debía volcarse a la construcción de rutas y caminos. El director técnico de este grupo de consultoras norteamericanas, holandesas e italianas era el teniente general del ejército estadounidense Thomas Larkin, de ahí el nombre del “plan”. Uno no puede dejar de percibir las coincidencias y conveniencias (para ellos) de este “plan Larkin” en el momento de mayor expansión de la industria automotriz en EEUU y Europa,³ y su desembarco en América latina, con el surgimiento de grandes consorcios de empresas constructoras de infraestructura caminera privadas, financiadas desde el Estado. Fue de este modo que se comenzó a reconfigurar la matriz de transporte de nuestro país en función de los intereses económicos de la poderosa industria automotriz estadounidense y europea. Desde ese instante hasta hoy el vaciamiento y desfinanciación de la red ferroviaria y subterránea nacional fue sistemático y permanente.

Las FFAA, en el marco del plan CONINTES, tenían la potestad de movilizar a punta de fusil a aquellos trabajadores en huelga, obligándolos a trabajar so pena de cárcel, esto fue un indicio claro de hacia dónde se direccionaba el concepto de “enemigo interno”. Las “depuraciones” de dirigentes y activistas obreros “subversivos” o de “ideas extremistas”,

³ Ver *El ferrocidio*, Juan Carlos Cena, Ed. La Rosa Blindada, segunda edición, 2008.

sometidos a Consejos de Guerra, pusieron en evidencia que el “enemigo interno” estaba o, más bien, *era* la clase trabajadora.

Es abundante lo escrito sobre esta etapa de la vida política argentina y son muchos también los actos de violencia a los que recurrió un Estado, habitualmente ilegítimo, para reprimir los movimientos sociales, episodios que no hicieron más que confirmar que la Constitución Nacional se había convertido desde varios años atrás en un texto tan olvidado como inútil.

Señalamos antes que el peronismo, como movimiento político, introdujo la novedad de abrirle a la clase obrera un espacio de derechos y participación en el debate político, lo que en sí mismo no lo convirtió en un movimiento revolucionario. De hecho no lo fue, nunca cuestionó a fondo al capitalismo como sistema, pero sí tuvo ingredientes suficientes como para intranquilizar al poder económico y consecuentemente al militar. En esta perspectiva, el peronismo significó para el poder la antesala del comunismo, y por eso había que combatirlo o cooptarlo o ambas cosas a la vez.

Los años de la resistencia no estuvieron exentos de tortura y desapariciones, basta citar el caso del obrero metalúrgico Felipe Vallese, secuestrado y desaparecido el 23 de agosto de 1962, para continuar con una larga lista que se extendió hasta 1973.

Coincidentemente con el retorno al país del mencionado teniente coronel Carlos Rosas trayendo bajo el brazo los innovadores cursos de contrainsurgencia diseñados por los franceses, la resistencia popular a la dictadura ya ensayaba respuestas violentas, para enfrentar a la violencia institucional.

Se puede afirmar que era la réplica lógica y esperable ante semejante panorama: el impacto que significó el bombardeo a la Plaza de Mayo, con cientos de civiles masacrados fue mayúsculo. A partir del golpe del '55 se volvió a las proscripciones, la ilegalidad de los partidos o movimientos de izquierda y la ausencia absoluta de espacios de participación política. El decreto 4161/56 prohibió expresamente aludir a Perón, a Evita y poseer cualquier símbolo referente al peronismo so pena de cárcel. La intervención militar en los sindicatos, el control policial en las Universidades, la fuerte censura a la prensa, la complicidad de ciertos medios de comunicación, la impunidad con que actuaban los *comandos civiles*, más la represión de las fuerzas armadas y de seguridad, fue lo que aplicaron los gobiernos dictatoriales ejercidos por las FFAA.

Cuenta la leyenda que para burlar el decreto 4161, la resistencia peronista solía identificarse con una flor de *no me olvides* adherida a la solapa de los abrigos, lo que habla de que el ingenio popular y la poesía estaban presentes, aún en las situaciones más duras.

Las crisis políticas generadas por la permanente intervención militar, impuso instancias de negociación con algunos sectores de la política lo que redundó en convocatorias a elecciones condicionadas a fin de descomprimir las tensiones. El resultado fue el surgimiento de gobiernos civiles débiles, sin legitimidad alguna, en la medida en que estaban proscriptos el peronismo, el partido comunista y todo aquel movimiento político considerado subversivo por el poder económico y militar. La fórmula se repetía como en décadas anteriores.

De este modo la violencia como única forma de acción política se fue arraigando entre las masas obreras y las capas

populares involucrando también a sectores de la clase media, como los estudiantes. Referido a estos últimos, es importante destacar que se integraron como un componente nuevo en la lucha de resistencia de la época. Hasta ese momento los movimientos políticos dentro del estudiantado universitario eran bastante conservadores, de hecho, hubo sectores estudiantiles que tuvieron participación activa en el derrocamiento del gobierno peronista, actuando como *comandos civiles*.

Es sabido que la política del gobierno peronista en materia de educación fue controvertida. Además de intervenir la autonomía universitaria, promovió el decreto ley 18.411 emitido por el gobierno surgido del golpe de 1943 que impuso la enseñanza católica, produciendo un quiebre en la tradicional postura laica, republicana y democrática establecida por la ley 1420 de 1884 de educación común, gratuita y obligatoria sin filtros religiosos. Esto generó una aguda polémica durante el debate parlamentario que terminó sancionándolo como ley y el cuestionamiento se extendió al ámbito universitario e intelectual. Más allá de la conveniencia coyuntural del gobierno en abrirle la puerta de la educación a la Iglesia Católica, lo cierto es que produjo una fuerte oposición dentro del mundo académico e intelectual toda vez que el sistema educativo se encorsetó cada vez más en una rígida y excluyente orientación de raíz católica integrista que desencadenó la cesantía de muchos profesores y académicos opositores.

Pero los tiempos y las coyunturas cambian permanentemente, y suelen producir quiebres en las posturas políticas de las personas. De hecho, en el segundo gobierno peronista la relación con la Iglesia se avinagró a partir de la ley de divorcio y la eliminación de la enseñanza religiosa, lo que puso en pie de guerra a la Iglesia contra el peronismo.

Con la instalación de la dictadura militar encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu se habilitó, a través del decreto-ley 6403, la posibilidad del surgimiento de Universidades privadas, una aspiración largamente apetecida por la Iglesia Católica y empresas que veían en la educación privada un excelente negocio. A partir de esto se instaló nuevamente el debate, que fue lo suficientemente ríspido como para provocar la renuncia del ministro de educación, Atilio Dell'Oro Maini. Durante la segunda mitad de los años `50 los estudiantes secundarios y universitarios confrontaron duramente con la dictadura de *la Libertadora*, en defensa de la educación pública. Muchos de aquellos sectores intelectuales opositores al peronismo que inclusive, después del golpe del `55, ocuparon cargos en la academia, empezaron a tomar distancia de *la libertadora* y comenzaron a hacer una relectura del peronismo. Probablemente, en ese proceso, el detonante de aquel cambio haya sido la áspera represión que sufrió el movimiento estudiantil en el año 1960 cuando el gobierno de Arturo Frondizi les aplicó el plan CONINTES en el marco de la disputa conocida como educación “*laica o libre*”. Esta lucha marcó profundamente al estudiantado universitario, a muchos académicos y referentes de la cultura, entre los que estaba el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Risieri Frondizi, hermano del Presidente, quienes se oponían a la privatización de la educación y a la concesión de títulos habilitantes exigidos al presidente Frondizi por la Iglesia Católica y empresas privadas. Tal vez este fue el inicio a partir del cual se empezó a invertir la ecuación entre la educación pública (el 80% en ese momento) y la privada (un 20%) a favor de esta última.

El debate y las grandes movilizaciones estudiantiles que se produjeron en ese momento, son recordadas por su magnitud. Más de 300.000 estudiantes se movilaron a la plaza Congreso con la adhesión de importantes sectores

juveniles, académicos y culturales pertenecientes a la clase media, contra el negocio de la privatización de la enseñanza.

Este proceso se intensificó aún más a partir del golpe militar del general Onganía en 1966, con la represión desatada contra la Universidad de Buenos Aires en la tristemente célebre “*noche de los bastones largos*”. El episodio, ocurrido en el mes de julio de ese año, mostró una vez más, la violencia en la que se hallaban encaminadas las FFAA, en este caso dirigida contra la Universidad pública, a la que consideraban un nido de agitadores laicos, anti católicos y comunistas. El resultado de este suceso fue el exilio de más de 300 profesores universitarios, de los cuales, al menos 200, eran destacados científicos formados en nuestro país. La Policía Federal, además de apalear y arrestar a cientos de estudiantes y académicos, destruyó laboratorios, bibliotecas universitarias, institutos de investigación y, entre muchos otros equipos, se desmanteló a *Clementina*, la primera computadora científica de América latina, instalada en el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. La intervención policial se extendió a todas las Universidades públicas nacionales y casas de altos estudios del país.

De este modo, cocinándose a fuego lento y fogueándose en este contexto, surgió una generación que se crió y se formó políticamente bajo esta realidad. Huérfana de experiencia política parlamentaria entre 1955 y 1973, la ilusoria “democracia” que vivió durante los breves lapsos de gobiernos civiles, la rechazó por excluyente e inconducente. El aislamiento de esa juventud redundó en autonomía y producción de nuevas ideas, que se fueron incorporando y transformando en nuevas formas de organización y de expresión política.

Vale la pena releer el libro *Educación Democrática*, de Mario Alexandre que fue, durante años, el texto de tercer año del secundario con el que nos formamos todos los jóvenes en aquella época, para constatar la contradicción flagrante entre la supuesta formación democrática que nos inculcaban y el convulsionado escenario político y social que vivía el país.⁴ Fue profundo el impacto de esa realidad cotidiana que se introdujo en los poros de esa juventud, de esa generación y que la llevó a contraer un compromiso social en la lucha contra la desigualdad, la explotación y la violencia del sistema, como nunca antes.

Pero hubo también un ingrediente nada menor que distingue esta etapa de cualquier otra: el contexto de la “guerra fría” ya descripto y las revoluciones triunfantes en el mundo.

La década del ´60 fue una época de revolución en todo el mundo.

Lo que se denominó como el “*Tercer Mundo*” (América latina, Asia y África) estaba totalmente estremecido y en pleno proceso de descolonización. Prácticamente en todos los países africanos existían movimientos armados de liberación nacional; el triunfo en 1962 del Frente de Liberación Nacional en Argelia, que logró la expulsión de los colonialistas franceses, aumentó el caudal de la ola revolucionaria. En Asia ocurría algo similar luego del triunfo de la revolución china en 1949 y la derrota de los franceses en Vietnam. En América latina la imprevista y luminosa victoria de la revolución cubana en 1959 y el Concilio Vaticano II inaugurado por el papa Juan XXIII en 1962, donde se cuestionó fuertemente a la Iglesia de los poderosos, fueron solo algunos de los muchos sucesos históricos que marcaron a fuego a la generación del

⁴*Educación Democrática*, Mario Alexandre, Ed. Ciordia, 1962.

‘60/‘70 en el mundo, en contraste con las violentas intervenciones militares norteamericanas en Vietnam y en Centroamérica.

En el plano regional el impacto de la revolución cubana fue formidable. Ante una realidad donde casi todos los países latinoamericanos (el *patio trasero* de EEUU) estaban sometidos por sangrientas dictaduras militares, surgieron infinidad de movimientos revolucionarios armados y no armados. La Argentina no fue la excepción.

Por supuesto que todos estos episodios no solo inundaron de aires revolucionarios a buena parte del planeta, también puso en alerta extrema al imperio, que no escatimó recursos para ahogar en sangre todo movimiento revolucionario que surgiera donde fuera y ya para entonces, como hemos visto, tenía planes en marcha.

Durante toda la resistencia peronista uno de los ejes organizativos fueron los famosos Planes de Lucha de la CGT. Era tal la turbulencia social, que desde el Estado no paraban de emitir decretos con nuevas leyes represivas, entre las que se destacó el ya citado Plan CONINTES.

Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, en el libro antes referido, citan al teniente coronel Hamilton Díaz, del Ejército Argentino, en una conferencia dictada el 19 de octubre de 1961, en la Escuela Superior de Guerra en el marco del *Curso de Guerra Contrarrevolucionaria. Lucha contra el terrorismo*, donde señala que entre mayo de 1958 (fecha de asunción de Arturo Frondizi a la presidencia) y el 30 de junio de 1961, se colocaron 1022 cargas explosivas (bombas y petardos); hubo 104 incendios de vagones ferroviarios, plantas industriales, gasoductos, etc.; y se realizaron otros 440 actos de sabotaje tales como obstrucción de vías férreas,

destrucción de torres de alta tensión, pérdidas intencionales de combustibles, etc. En total 1566 atentados, cifra superior, por ejemplo, a los hechos similares ocurridos en igual lapso en Argelia durante la guerra de liberación. Fin de la cita.⁵

En esta lucha, la resistencia peronista se fue nutriendo de nuevas camadas de obreros y fue permeable a las ideas revolucionarias que inundaban el continente, lo que generó un intenso debate dentro del movimiento peronista. Estas ideas no excluían el uso de la violencia armada organizada y prueba de esto fueron los rudimentarios intentos de focos guerrilleros en nuestro país, como la experiencia de Los Uturuncos en 1959, la primera guerrilla peronista, el Ejército Guerrillero del Pueblo, de orientación guevarista, comandado por el periodista Jorge Ricardo Masetti en 1964 y Taco Ralo en 1967. Todas estas fueron experiencias rudimentarias y fracasaron a poco de comenzar, pero dejaron una marca en el imaginario social.

En 1962 un sector de la CGT, encabezado por Andrés Framini (dirigente textil) y Amado Olmos (dirigente del gremio de Sanidad), realizó un plenario sindical en la localidad cordobesa de Huerta Grande donde se aprobó uno de los programas históricos más combativos del movimiento obrero argentino. Hubo un precedente que fue el programa de La Falda en 1957, en éste se basó el de Huerta Grande y marcó las diferencias políticas dentro del movimiento peronista. Los programas de La Falda (1957) y Huerta Grande⁶ (1962) fueron pilares fundamentales para el surgimiento de la combativa *CGT de los Argentinos* en 1968. Es muy recomendable volver a releer estos históricos programas, para apreciar la dimensión

⁵Óp. Cit. pág. 27.

⁶ Ver www.cgtagentinos.org/documentos.htm

del agudo proceso de radicalización de las ideas dentro de vastos sectores sindicales de la resistencia peronista y fuera de ella.

Estos antecedentes, sumados al surgimiento de una juventud peronista con ideas insurgentes, ahondaron las discrepancias políticas internas entre el peronismo ortodoxo y el naciente peronismo revolucionario de las que Perón, desde el exilio, no fue ajeno. Fue abundante la correspondencia que Perón envió a la militancia de la resistencia. Decenas de grabaciones con la inconfundible voz del líder llegaron clandestinamente al país y eran escuchadas secretamente en sindicatos, colegios, universidades y barrios. Sin duda *el Viejo*, como cariñosamente lo llamaban los jóvenes, jugó permanentemente en la interna de su movimiento y, en esa etapa, su apuesta fue decididamente por la juventud peronista. Para convalidar esta afirmación, vale la pena citar algunos párrafos de una de las cartas dirigidas por Perón a los jóvenes en octubre de 1965: “No intentamos de ninguna manera sustituir un hombre por otro, sino un sistema por otro sistema. No buscamos el triunfo de un hombre o de otro, sino el triunfo de una clase mayoritaria y que conforma el pueblo argentino: la clase trabajadora (...) Para el proletariado – la clase trabajadora de todo el país – la toma del poder es el principio de esta revolución que anhelamos, para el cambio total de las viejas y caducas estructuras demoliberales. (...) Desarrollar una clara actitud antiimperialista, anticapitalista y antioligárquica y feudal latifundista (...) no olvidar jamás que los combatientes provienen de la masa y que sin el apoyo de la masa es imposible la labor revolucionaria. (...) Es fundamental que nuestros jóvenes comprendan que deben tener siempre presente en la lucha y en la preparación de la

organización que es imposible la coexistencia pacífica entre las clases oprimidas y opresoras”⁷

Fue en este debate y al calor de las intensas luchas sociales que se fue gestando el peronismo revolucionario del que participaron dirigentes sindicales destacados, como los ya nombrados Sebastián Borro, Andrés Framini, Amado Olmos y otros como Atilio López, Jorge Di Pascuale, Horacio Mujica, Armando Cabo, Avelino Fernández, Julio Troxler, Atilio Santillán e intelectuales de la talla de John William Cooke, Rodolfo Walsh, Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui, Francisco *Paco* Urondo, Scalabrini Ortiz, entre muchos otros. Y muchos también fueron los intelectuales y dirigentes sindicales que desde posiciones de izquierda contribuyeron a ese debate.

En marzo de 1962 Frondizi fue derrocado por un nuevo golpe militar, entre otras causas, por haber pactado con el peronismo proscripto y por estar sospechado de haber sido tolerante con el comunismo, en particular por su indulgencia hacia Cuba. En medio de una gran inestabilidad política e institucional, y atravesadas por las luchas internas dentro de las FFAA (azules y colorados), se realizaron las elecciones de julio de 1963. En este marco surgió, de esas elecciones condicionadas y con partidos políticos proscriptos, el gobierno radical de Arturo Illia, que nació débil y con escasa legitimidad. Así todo intentó ser un gobierno socialdemócrata y tomó algunas decisiones de corte nacionalista, como la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi con empresas extranjeras y la propuesta de un proyecto de ley de control de los laboratorios multinacionales, algo que no cayó bien en los círculos del poder económico y militar. A

⁷*Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970*. Roberto Baschetti, Ed. Punto Sur, 1988.

pesar de los intentos del gobierno de Illia de institucionalizar el país y de tomar algunas medidas de perfil progresista, su fragilidad política no resistió las presiones militares y los embates de los sectores concentrados de la economía y en junio de 1966 fue derrocado por otro golpe militar. Una junta militar de gobierno nombró presidente al general Juan Carlos Onganía quien se autoproclamó el líder de la “*revolución argentina*”.

LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA” Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

“Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”

José Camilo Uriburu, interventor en la provincia de Córdoba durante la dictadura militar del general Onganía. La respuesta popular fue El Viborazo, que hizo rodar la cabeza del propio Uriburu. (1971).

Es interesante destacar cuán enraizada estaba (y está), en las FFAA y el poder económico, la idea fija de la lucha contra *el comunismo* y cuán fluidas fueron siempre las relaciones de este sector social, con los representantes de Washington en nuestro país. Para corroborar esto vale la pena citar los informes de la propia embajada de EEUU en vísperas del golpe contra Arturo Illia, donde se remarca como eje central “...la incapacidad (de Illia) para combatir la creciente subversión e infiltración comunista...” y la necesidad de “reorganizar los partidos políticos...” donde “las regulaciones serían diseñadas para impedir la formación de una multiplicidad de partidos y la creación de partidos políticos antidemocráticos.” También podemos mencionar el Memorando de la *Office of the Assistant Secretary of Defense* del 25 de febrero de 1965 donde, entre otras cosas, insiste en “Diseñar una nueva estrategia para tratar

con las fuerzas armadas latinoamericanas ... con énfasis dominante en la amenaza a la seguridad interna”, más adelante sigue “Las amenazas reales y más apremiantes a los intereses de los EEUU en Latinoamérica parten del desorden interno y de la inestabilidad política, producto de trastornos sociales que se desarrollan actualmente en el área y de las oportunidades que estas condiciones ofrecen para ser explotadas por elementos comunistas y de otra naturaleza hostiles a los Estados Unidos.”¹

El subrayado es nuestro e intenta destacar una vez más el rol de EEUU en resguardo de **sus** intereses en la región (nótese la ausencia de valor asignado a los intereses de los pueblos latinoamericanos) y el concepto genérico del enemigo comunista o *de otra naturaleza*, que da pie para incluir a todos y a cualquiera en el bando del enemigo a aniquilar.

En esta realidad recurrente, donde las masas obreras, los estudiantes e importantes sectores de la clase media se hallaban totalmente marginados de la participación política, social y cultural, es que en 1966 empezó a despuntar un proceso de radicalización de las ideas hacia la izquierda entre la clase media y una joven y nueva camada de obreros surgida de la radicación de nuevas industrias operada en esa década, en el eje comprendido por la región metropolitana, Zárate, Campana, San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, litoral santafesino, Córdoba y Tucumán. La naturalización de los golpes militares estaba instalada desde mucho tiempo atrás en el imaginario social, pero en un punto el golpe de Onganía fue la gota que colmó el vaso. Se recuerdan como hitos destacados la ya citada *noche de los bastones largos*, la férrea censura artística y cultural, la persecución política y sindical y la política económica liberal aplicada por el

¹Ver *Historia de la economía argentina del siglo XX*, Alfredo Zaiat y Mario Rapoport, Ed. Página 12, págs. 491 y 475. 2010.

ministro de economía Adalbert Krieger Vasena, apellido tristemente célebre, conocido por los trabajadores argentinos. Además del recuerdo de la Semana Trágica, Krieger Vasena, también como ministro de hacienda de *la Libertadora*, fue el que propició el ingreso de la Argentina al FMI. “Krieger Vasena no es un empresario, un creador de industrias, un productor del campo, un explorador del subsuelo. Nada de eso. Krieger Vasena es uno de los diez testaferros internacionales mejor cotizados en las sociedades de negocios de la Argentina”.²

Tal vez, por su lejanía de la metrópoli, quedó menos visible el agudo conflicto social que arrastraban las provincias norteñas de Tucumán, Jujuy y Salta, con el cierre compulsivo de once ingenios azucareros, la militarización de toda la región, que incluyó una dura represión con muertos y desaparecidos. El 12 de enero de 1967, durante una marcha donde confluyeron centenas de trabajadores cesanteados de los ingenios tucumanos, la policía desató una violenta represión donde cayó abatida a balazos Hilda Guerrero de Molina, esposa de uno de los despedidos. Hilda se convirtió en bandera de lucha y es probable que ese haya sido uno de los momentos y lugares donde empezó a germinar la idea de que el único camino posible para la emancipación, era la lucha armada. El asesinato de manifestantes a manos de las “policías bravas” era moneda corriente en esa época. Muchos fueron los obreros y estudiantes que murieron de esa manera, lo que sumó mayor odio e indignación popular hacia la dictadura. Pronto estallarían las puebladas y el país comenzaría a incendiarse.

²*Mercenarios y Monopolios en la Argentina, de Onganía a Lanusse 1966-1973*, Rogelio García Lupo. Editorial Achaval Solo 1971.

A todo esto, debe agregarse la sanción de leyes como la 17.401 de represión al comunismo y la 16.970 de Defensa Nacional Planeamiento y Acción para la Seguridad.

Los diez años que transcurrieron entre 1960 y 1970 estuvieron signados por dos debates fundamentales dentro de la nueva izquierda naciente: uno la caracterización del peronismo y el surgimiento del peronismo revolucionario, el otro: el proyecto de poder y la vía armada. Aunque no es objeto de este escrito analizar las diferencias entre la lucha armada, la estrategia de la guerra revolucionaria, o las teorías insurreccionales, es cierto que en definitiva todas señalaban distintas vías hacia un mismo objetivo.

Pero ¿cuál era ese objetivo?: en los 15 años transcurridos entre 1955 y 1970 buena parte de ese movimiento, en principio bastante heterogéneo y contradictorio, se fue agrupando alrededor de una meta final, la idea de una nueva sociedad más justa; el modelo era el socialismo. En este punto, se fue confluyendo hacia un compromiso unánime. La polémica era *cómo* acceder al poder para lograr esa transformación de fondo. Siempre hubo un consenso primario en cuanto a la necesidad de un cambio social profundo y la construcción de un modelo equitativo y solidario, algo parecido al socialismo. La memoria omnipresente de la experiencia peronista como una aproximación a la justicia social con la clase obrera como protagonista central, fue un ingrediente infaltable de ese debate. Estaba claro, además, que semejante cambio implicaba tomar el poder del Estado y que esa tarea iba a significar un enfrentamiento cruento con las FFAA y de Seguridad como brazos armados del Estado. Sin duda había unanimidad también en que nada de esto era posible si la clase obrera y los sectores populares, es decir la mayoría más castigada por la desigualdad económica y social, no asumían

un rol masivo, activo y protagónico en ese proyecto revolucionario.

Sobre este último punto se generaron las controversias más ríspidas que estaban teñidas por las circunstancias de la época; podemos resumirlas en las siguientes dos hipótesis contrapuestas: la militancia política debía concentrarse en la construcción de un partido revolucionario que surgiera en el seno de la clase obrera como herramienta necesaria para la toma del poder o, la otra, que consistía en la construcción de una estructura político-militar clandestina, una vanguardia, que fuera el embrión de ese partido revolucionario y a la vez de un ejército popular, al que la clase obrera y los sectores populares se irían sumando más temprano que tarde. A la vez estas hipótesis estaban atravesadas por un debate aún mayor que era, nada más ni nada menos, que el fenómeno del peronismo y su líder el general Perón, espacio político donde la clase obrera ya estaba enrolada.

Estos fueron, a muy grandes rasgos, algunos de los ejes de discusión de la militancia de los ´60. Lo que sorprende, releando las publicaciones de aquel momento, es la ausencia de un análisis profundo de nuestras FFAA y la escasa relevancia que se le otorgó a los planes de formación en los que se estaban instruyendo a instancias de Washington. Un dato sobre esto lo aporta Oscar Terán, citando a Jorge Abelardo Ramos y a Juan José Hernández Arregui, influyentes intelectuales de la izquierda de la época, “... durante este período existieron versiones que difundieron la imagen de sectores de las fuerzas armadas proclives a la adopción de políticas nacionalistas... (esto) ...residía en considerarlas un factor fundamental para la transformación y la liberación ya que ‘las necesidades nacionales se abrirán paso irresistiblemente también en la cabeza de los oficiales’ (Jorge Abelardo Ramos, cit. en Strasser 1959: 212). Extremando esta

vana esperanza, Hernández Arregui (1953, 1960:52) confiaba en la joven oficialidad para vaticinar que ‘un nuevo encuentro entre ejército y clase obrera estaba a punto de reeditar el 17 de octubre de 1945’³.

Otro dato lo agrega Isidoro Gilbert en su trabajo *El oro de Moscú*, donde relata que en 1971 el Partido Comunista Argentino anunciaba el “crecimiento en el Ejército de las fuerzas patrióticas y progresistas”.⁴

De la *doctrina francesa* se hablaba poco y nada en esa época y nos enteraríamos demasiado tarde, cuando ya habían muerto miles y desaparecido más de 30.000 jóvenes de esa generación. La borrosa y poco rigurosa investigación y estudio de la penetración, tanto francesa como norteamericana de sus doctrinas de contrainsurgencia y el muy escaso trabajo político dentro de las FFAA evidenció una cuota importante de desconocimiento e ingenuidad y, en algún sentido, padecemos, como generación política de esa época, del síndrome de Ptolomeo.

Así las cosas, en ese debate de los años ‘60 se fogueó la juventud obrera y estudiantil que luego explotó el 29 de mayo de 1969 en el *Cordobazo*. Un año antes se había fracturado la CGT dirigida por la corriente ortodoxa del peronismo, conformándose la ya referida CGT *de los Argentinos* conducida por Raimundo Ongaro dirigente del gremio gráfico, al tiempo que desde París llegaban las novedades de la revuelta obrero-estudiantil del *Mayo francés*. Las puebladas siguieron sucediendo una tras otra, *el Rosariazo*, *el Tucumanazo*, *el*

³Op. Cit. Oscar Terán, pág. 190.

⁴*El oro de Moscú. Historia secreta de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en la Argentina*. Isidoro Gilbert, pág. 319. Editorial Sudamericana, 1994.

Mendozazo, el Viborazo y otras tantas amplificaron el conflicto social con un alto nivel de violencia en la represión por parte del Estado y una respuesta organizada desde las masas obreras y estudiantiles, no exenta de violencia. En este contexto surgieron las organizaciones armadas y germinó el movimiento sindical clasista y combativo.

Una vigorosa generación de obreros altamente calificados de las grandes fábricas metalmecánicas de Córdoba que, con una clara orientación política al socialismo, comenzó a tener notoria incidencia en el movimiento obrero local, que fue generando una ruptura con las direcciones sindicales burocráticas del peronismo ortodoxo.

Es a partir de aquí donde se produce un salto cualitativo en la dirigencia obrera de base. A la confrontación con la burocracia sindical peronista, se sumó la búsqueda de un nuevo encuadramiento político, sin prescindir del peronismo, pero con un fuerte ingrediente socialista. A la lucha por las reivindicaciones laborales, se agregó el reclamo de democracia sindical y se fue por la recuperación de los sindicatos. A la prepotencia e impunidad empresarial, se respondió con tomas de fábrica y el control obrero de la producción, continuando el legado de los primeros planes de lucha de la CGT durante la resistencia.

La confluencia de ese novedoso y pujante movimiento sindical combativo y clasista de claras convicciones marxistas, con una masa de jóvenes cuadros sindicales peronistas curtidos en la resistencia volcados decididamente a la construcción de un “peronismo revolucionario” sin eufemismos, alentado por el propio Perón desde el exilio, más la masiva radicalización del movimiento estudiantil, originó un cóctel explosivo que preocupó sobremanera al poder económico y militar, y obviamente también a Washington.

¿A QUIÉNES HABÍA QUE “DESAPARECER”?

“El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”.

Decreto 504/77 que reemplaza la Directiva 222/76 Operación Piloto en el Ámbito Industrial. Reproducido en Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 2006, p. 378.

Podríamos afirmar que durante la dictadura de los generales Onganía – Levingston – Lanusse, la represión tuvo matices, el Estado instrumentó una metodología dual y combinada; legal y clandestina. Al movimiento obrero combativo se lo intentó someter con despidos selectivos, persecución y prisión para los activistas y los dirigentes más relevantes. También con la violenta represión de las *policías bravas* a las manifestaciones y a las huelgas, que incluyeron palos y plomo, mientras se coordinaba con las patronales y la burocracia sindical, diversas formas de neutralizar la influencia de estas ideas en la clase obrera. Esta estrategia represiva implicó las más de las veces maltratos, tortura y hasta estar “desaparecido” por unos días para luego ser “legalizado o “blanqueado”.

Al mismo tiempo, se arraigó la práctica del secuestro, tortura, asesinato y desaparición sobre las organizaciones de izquierda y del peronismo revolucionario. Existía, en los hechos, esta dualidad. Tácitamente se diferenciaba al obrero díscolo, acreedor de un “correctivo” que muchas veces podía incluir la tortura, del “subversivo” que era otra cosa; este era un enemigo ideológico, irrecuperable y, por ende, merecedor de un destino sin retorno. Estas metodologías pronto se unificarían y todos aquellos que protestaran recibirían este último tratamiento.

Pero en esa etapa los dirigentes y activistas sindicales generalmente eran arrestados a la vista de todos, juzgados por tribunales militares y confinados en las cárceles del país. Los militantes de organizaciones clandestinas de izquierda (armadas y no armadas) pasaban por otro tamiz, que consistía en la detención más o menos encubierta, la tortura durante varios días y la eventual “legalización” o el asesinato y desaparición del cuerpo. Todo esto ocurría en el marco de una ficticia “legalidad” respaldada por el recordado “Camarón”. Si bien no fue algo generalizado, hay una larga lista de militantes políticos que corrieron la peor suerte durante el período ‘66/’73. Podemos nombrar los casos de Alejandro Baldú, Luis Pujals, Marcelo Verd y Sara Palacio, el abogado Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno, Juan Pablo Maestre y Mirta Missetich que son solo algunos de los sucedidos, que se suman al ya señalado de Felipe Vallese.

Durante la etapa de la *Revolución Argentina* (1966/1973), proliferaron numerosos grupos paramilitares y parapoliciales algunos de los cuales fueron responsables de las desapariciones mencionadas. Pero además, la actuación de estos grupos se centró en las amenazas y colocación de explosivos a abogados defensores de presos políticos, familiares, jueces opuestos a los apremios ilegales, medios de

comunicación, editoriales, dirigentes estudiantiles, sindicatos y un sinnúmero de actores sociales, lo que formó parte de la llamada “guerra psicológica” ampliamente difundida por los medios de comunicación, para crear un clima de terror y violencia descontrolada que terminaba siendo atribuida a “la guerrilla”.

Esta “guerra psicológica” fue la puesta en escena de uno de los capítulos enseñados por los instructores franceses. La actividad clandestina de la represión estatal buscó mimetizarse con la actividad clandestina de las organizaciones revolucionarias y se mostró eficaz a la hora de generar confusión entre la población respecto a quiénes producían estos hechos. De este modo se intentó instalar desde el Estado, a través de los medios masivos de comunicación, la idea de “la violencia subversiva”.

El caso de Juan Pablo Maestre y Mirta Missetich, ocurrido el 13 de julio de 1971, fue un procedimiento realizado por miembros de la Policía Federal, luego negado por la institución en la voz de su jefe, el entonces general Jorge Cáceres Monié. A su vez el Ministro de Justicia, Jaime Perriau declaró: “no se puede hablar de paramilitares o parapoliciales. Fue un grupo subversivo”¹

La situación represiva se agudizó a partir de 1970, cuando hicieron su aparición pública las organizaciones armadas.

Paréntesis. Existe un mito recurrente acerca de la militancia política de los ´70 que eran todos *guerrilleros*. Se escribió mucho sobre las organizaciones armadas, mientras que

¹*Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino.* Pág. 51/52. Débora D’Antonio, compiladora. Ediciones Imago Mundi. 2018.

muchísimas otras *no armadas* que lucharon por los mismos objetivos y enfrentaron los mismos niveles de represión han quedado opacadas bajo un cono de sombra. Pero el dato destacado, del que poco se ha escrito, es el compromiso que asumió un importante sector de la clase obrera y el pueblo con el proceso revolucionario. Un testimonio elocuente es que casi el 60% de los desaparecidos fueron trabajadores, seguidos en porcentaje por los estudiantes (21%). Esta masa de trabajadores, estudiantes, profesionales, religiosos y pueblo en general se encolumnó detrás de un proyecto revolucionario identificado con el socialismo, independientemente de que lo haya hecho encuadrada dentro de organizaciones armadas o no armadas, o en el contexto de infinidad de otras formas organizativas que surgieron en esos tumultuosos años de lucha.

Habíamos mencionado algo de la estrategia de las organizaciones armadas surgidas en los ´70. Evidentemente la acción armada tuvo una gran resonancia mediática, mientras que el activismo político en las fábricas, en el territorio y lugares de trabajo era mucho menos visible. La década del ´70, como veremos, no solo fue lucha armada, hubo un sinnúmero de organizaciones políticas revolucionarias que no adhirieron a la estrategia de la guerra popular prolongada o guerra revolucionaria y que apuntaron a consolidar un sólido vínculo con la clase obrera y los sectores populares en la perspectiva de configurar un vasto movimiento político de masas hacia el socialismo.

Indudablemente existió una estrategia comunicacional para instalar en el imaginario social la idea de que “todos” éramos subversivos y, por lo tanto, “todos” éramos guerrilleros o terroristas y, consecuentemente, éramos los generadores de “la violencia”. De este modo, con este discurso montado,

“todos” los militantes y activistas políticos secuestraban, “todos” ponían bombas y “todos” asesinaban gente.

Es así que hoy hay quienes sostienen, en defensa de las FFAA, que éstas para poder combatir a las organizaciones subversivas tuvieron que utilizar “los mismos métodos que los subversivos”. Una afirmación difícil de sostener ante el peso de los hechos.

Aclaremos los tantos. En primer lugar, para combatir delitos tipificados en el Código Penal el Estado pudo y debió emplear todos los recursos legales que poseía (y posee), en lugar de utilizar a las FFAA, que originalmente fueron creadas para otra función.

En segundo lugar, está demostrado que las FFAA, abandonando su función original, se habían formado en la doctrina francesa desde mediados de los años 50, cuando aún no existían movimientos armados en nuestro país. A riesgo de ser recurrentes, para tratar de entender la génesis de esta política, no podemos soslayar el contexto geopolítico internacional y la presencia omnipresente del Departamento de Estado de los EEUU, observando y diseñando permanentemente políticas de intervención en su “*patio trasero*”. La preocupación era extrema en los encumbrados círculos políticos de Washington, enfrascados irreductiblemente en el conflicto este-oeste o “guerra fría” (contra el comunismo). La evolución de la Revolución cubana, la adversa repercusión mundial por la invasión militar norteamericana en Vietnam y en tantos otros países y el ascenso de la lucha de masas en los países emergentes, requería de una “mano dura” sin límites legales ni morales. Entonces, volvamos a destacar que la doctrina francesa y norteamericana introdujo el concepto de *enemigo interno*, a partir del cual el Estado y sus FFAA apuntaron sus armas

contra la propia población y cimentaron su efectividad ni más ni menos que en un plan sistemático basado en el secuestro, la tortura, el asesinato y la represión clandestina por fuera de cualquier marco legal, al que consideraban una atadura, según lo reconocen sus propios creadores.

Este plan solo fue posible con la imprescindible connivencia de todos los poderes del Estado y buena parte de la clase política, con lo cual podemos afirmar que el Estado argentino (y consecuentemente sus FFAA) ya, a mediados de los años '50, se había unido a la cruzada anticomunista impulsada por EEUU y se había preparado para aniquilar al "*enemigo interno*" del modo en que lo hizo, con la complicidad y colaboración de la mayoría de las dirigencias de los partidos políticos tradicionales, la cúpula de la Iglesia Católica, muchos dirigentes sindicales y, por supuesto, la clase empresaria, que fue la gran beneficiada. Es decir que ya entonces las FFAA se habían apartado definitivamente de su rol original, que fue la defensa de la soberanía nacional, y se habían resignado, otra vez, al triste papel de ser los gendarmes del imperio norteamericano en nuestro país, reprimiendo a su propio pueblo.

Luego, hablemos de *la guerrilla* quienes la conocimos de cerca. Existe una frondosa bibliografía sobre las organizaciones armadas de los '70 en Argentina, para quien quiera analizar con mayor profundidad el tema. Pero consideramos importante clarificar algunos puntos.

La guerrilla que actuó en Argentina nunca torturó a un prisionero. Más allá de que el confort de una *cárcel del pueblo* pudo no ser el ideal y que ser prisionero de un enemigo al que se desconoce y se teme pueda generar angustias, la tortura siempre estuvo clara y firmemente repudiada por todas las organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, en

sus principios y en sus acciones porque, entre otras cosas, se luchaba contra esa violencia cobarde e inhumana. No podemos afirmar lo mismo de las FFAA y de Seguridad.

Sin duda, la actividad de la guerrilla entre los años 1970 y 1976 generó (y genera) polémica, especialmente en el período constitucional de 1973/1976 y no tanto en el período 70/73, bajo la dictadura militar, momento en el cual obtuvo cierto consenso social.

Mencionamos antes que el impacto de la revolución cubana fue muy fuerte entre la juventud de los países latinoamericanos. La idea de un grupo reducido de ciudadanos que deciden tomar las armas y conquistar la simpatía del pueblo, con el objetivo de demoler un sistema injusto y crear una sociedad más justa y equitativa y, a la vez, acabar con un régimen dictatorial salvaje, como el de Batista en Cuba, tuvo una profunda influencia en todos los que vivimos aquellos años 60/70.

También señalamos que los recurrentes golpes militares en todos los países de América latina, redujeron a la nada las posibilidades de participación política, a lo que se sumaba la tremenda desigualdad social y la violencia represiva de estos regímenes.

En el caso de nuestro país, volvemos a citar a Oscar Terán, a propósito de la aplicación del plan CONINTES: “Como contrapartida en sectores radicalizados de la izquierda y del peronismo irá penetrando aun lentamente la idea de responder a estas agresiones lanzadas desde el Estado con la misma violencia promovida desde la sociedad civil. Si Perón desde Caracas había indicado a sus seguidores en octubre de 1957 que la salida violenta era la única posible, a una conclusión semejante llegaba uno de los dirigentes del

peronismo revolucionario cuatro años más tarde desde un periódico llamado *Trinchera*. ‘Solo nos queda el camino de la violencia’ (Gustavo Rearte en el diario *Trinchera*, agosto de 1961, cit. en Baschetti 1988: 31 y 29)” y continúa: “Cuando a principios de 1962 una nueva intervención militar apenas encubierta por una fachada de continuidad institucional puso fin al gobierno de Frondizi (a pesar de haberse plegado a la anulación de las elecciones de marzo de ese año en las que había triunfado el peronismo) se tornó aún más evidente que las mediaciones políticas representativas eran en este país más que dudosas. La democracia llamada formal lució otra vez inútil, cuando no francamente perjudicial...”²

Fue así que en nuestro país surgieron organizaciones armadas hacia fines de los ´60. La guerrilla, en los ´70, se estructuró como organizaciones político-militares clandestinas.

¿En qué consistió la actividad guerrillera?

Sus operaciones militares tuvieron metas muy precisas y eran minuciosamente planificadas, dado el alto nivel de riesgo que implicaba para los militantes. Con el objetivo de obtener un rescate en dinero, para financiar la actividad política o presionar a la dictadura de turno para lograr la liberación de presos políticos y sociales, secuestró empresarios y los retuvo prisioneros en lugares clandestinos. Estos lugares en general fueron las casas habitadas por los mismos militantes, que disponían de un dispositivo oculto, donde alojaban al cautivo. Estos sitios se conocieron popularmente como “*cárcel del pueblo*”.

²Óp. Cit. Oscar Terán, pág. 188.

También realizó acciones de propaganda armada confiscando, por ejemplo, un camión de reparto de alimentos para distribuirlos en un barrio obrero junto con la prensa partidaria. Efectuó demostraciones de fuerza ocupando militarmente un pueblo chico, recuperando armas de la comisaría local y leyendo una proclama a los pobladores para luego replegarse. Intentó tomar cuarteles militares con el objetivo de obtener armamento. También ejecutó a militares y policías por su responsabilidad en la tortura y en la represión, a empresarios y dirigentes sindicales por colaborar con esta.

Todas estas acciones, algunas espectaculares, tuvieron una intención centralmente propagandística y se caracterizaron por la audacia y la convicción de los combatientes, aunque muchas de ellas fracasaron. Dicha cuota de audacia y convicción eran necesarias para contrarrestar el alto riesgo que implicaba emprender esas acciones bajo condiciones extremadamente desfavorables.

La simpatía hacia la guerrilla comenzó a declinar en el período constitucional inaugurado en 1973, por un lado, por la insistencia de algunas organizaciones en continuar con la lucha armada, y por otro por la implosión del peronismo. En esa etapa es cierto que hubo una tendencia hacia el militarismo que se expresó de diversas maneras.

Tal vez una marca reconocible fue el lanzamiento en 1974 de la Compañía de Monte *Ramón Rosa Jiménez* en los cerros tucumanos por parte del PRT-ERP. Este intento de guerrilla rural fue contenido inicialmente por los comandos especiales de la Policía Federal y luego por el denominado *Operativo Independencia*, ejecutado por las FFAA, que inauguró el terrorismo de Estado sobre la población tucumana. La Compañía de Monte, aun en su mejor momento, nunca

superó el número de 40/60 combatientes, ni logró consolidarse en la zona³, pero fue un argumento más para terminar de justificar la intervención de las FFAA en la represión interna.

Toda esta actividad armada que, en principio, no es objeto de debate en este escrito, se realizó en la más estricta clandestinidad dado que - y esto es clave - la guerrilla en Argentina *nunca* tuvo dominio territorial⁴, motivo por lo cual *nunca* pasó de ser un grupo de ciudadanos alzados en armas *contra* el Estado cuya única forma de preservarse era la clandestinidad más absoluta. En virtud de esto podemos afirmar que los delitos que la guerrilla cometió (secuestro, robo, asesinato, etc.) tuvieron y tienen un tratamiento a través del Código Penal, algo que el Estado de ese momento desechó como posibilidad. Consecuentemente un grupo de civiles alzados en armas, *no* es el Estado, por lo cual la misión del Estado debe ser juzgarlo con las herramientas legales que únicamente el propio Estado posee. Precisamente es el Estado, a través del Poder Judicial y sus fuerzas de seguridad, el que dispone de los medios legales y todos los recursos para investigar, arrestar y llevar al/los acusados ante un Tribunal, en el marco de la ley y la Constitución, juzgarlos con las garantías del debido proceso y, en caso de demostrarse la culpabilidad, condenarlos y remitirlos a una cárcel federal. Cualquier otro “método” clandestino y fuera de la ley que

³ Ver *Hombres y mujeres del PRT-ERP, de Tucumán a La Tablada*, de Luis Mattini, Editorial De la Campana, 2003. Ver *La historia del PRT-ERP por sus protagonistas*, de Daniel De Santis. Editorial A formar filas, Editora Guevarista 2010.

⁴ Tomemos como ejemplo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que sostuvieron un conflicto armado con el Estado colombiano durante 50 años merced a que, entre otras cosas, contaban con el apoyo de las comunidades campesinas y de ese modo controlaban efectivamente el 40% del territorio nacional.

utilizare el Estado, que incluya ignorar los poderes y las leyes de ese mismo Estado, torturando, asesinando y haciendo desaparecer ciudadanos en forma sistemática y sin más trámite, lo transforma en un Estado terrorista.

En eso consistió el *terrorismo de Estado* y por eso son crímenes de *lesa humanidad* e imprescriptibles, porque fueron cometidos *por* el Estado, a través de sus FFAA y FFSS, y esos delitos son considerados permanentes mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.⁵

En síntesis, es un gran error equiparar a un conjunto de ciudadanos alzados en armas, con el Estado, no son lo mismo, tienen responsabilidades sustancialmente diferentes reconocidas por las propias leyes de la democracia burguesa; aquí reside la diferencia.

Pero las FFAA ya venían preparándose en estos “métodos” y sin duda un punto de inflexión fue la masacre de 16 prisioneros políticos pertenecientes a organizaciones armadas el 22 de agosto de 1972, perpetrada por la Marina en la base naval Almirante Zar en la ciudad patagónica de Trelew, durante la dictadura militar del general Lanusse.

Quizás ese año, 1972, fue el de mayor consenso social hacia las organizaciones armadas; se los llamaba “*los muchachos*” en un tono entre cariñoso y cómplice. Claro, a los ojos de los sectores populares, de la población familiarizada con la resistencia, “*los muchachos*” eran jóvenes luchadores que exponían sus vidas peleando por los derechos de los pobres y morían heroicamente combatiendo la violencia de la

⁵Ver Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad y Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

dictadura militar. El propio Perón desde el exilio alentó a las organizaciones armadas peronistas (Montoneros, FAR, FAP y Descamisados) a las que llamó “formaciones especiales” dentro del movimiento peronista. También los partidos políticos tradicionales que acudieron a la convocatoria del GAN (Gran Acuerdo Nacional), propuesta lanzada por el general Lanusse para intentar encauzar por la vía institucional el conflicto social que incluía la promesa de elecciones, fueron renuentes a condenar públicamente el accionar de la guerrilla, a pesar de las presiones de la dictadura para que lo hicieran. Esto cambió después del 25 de mayo de 1973.

Mientras las luchas sociales recrudecían y se extendían por todo el país, mientras el ciudadano de a pie buscaba afanosamente formas de supervivencia, ajeno a lo que se cocinaba en las altas esferas del poder, en 1964 circulaba secretamente, dentro del EA, el *Manual de la Comisión Especial de Reestructuración del Ejército Argentino* (RC-2-1). Allí se vierten las bases doctrinarias que dieron origen a la reglamentación del accionar de las tropas que combatirían a la “subversión” y se delimitó el concepto de “*guerra interna*”.

Sucesivamente se fueron difundiendo con carácter estrictamente secreto y para uso exclusivamente militar, varios manuales más. El manual RC-8-3: “Operaciones contra la subversión urbana” (29-7-69) estableció la siguiente definición: “El activista, el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra, y por tal motivo, no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales (pág. 93)”. *Fin del paréntesis*

Subversivo, activista o perturbador se consideró a todo aquel que hiciera reclamos y/o se identificara con proyectos políticos de corte revolucionario o contrarios a la dictadura,

esto incluyó a peronistas, marxistas o comunistas en cualquiera de sus tendencias, en cualquiera de sus formatos y a todo aquel que, a criterio del poder, representara una “amenaza” para el sistema. Si bien es un concepto muy abarcativo, abstracto para el común de la gente y hasta ambiguo, aunque parezca contradictorio fue aplicado en forma *selectiva* a quienes, según el poder, pudieran tener una opinión política distinta que pusiera en “peligro” el orden establecido; y ese individuo podía ser cualquiera. Aquí está la raíz del objetivo de implantar el terror y el miedo en el conjunto de la sociedad. Cualquiera podía ser un *subversivo*, “un enemigo de la Patria”, así este concepto demostró su eficacia a la hora de sembrar terror en la población, porque abarcaba a todos y era el poder, las FFAA en este caso, las que *seleccionaban* al/los individuos a eliminar. De este modo se asentó la idea de no hacer política porque era peligroso. De ahí en más se arraigó el “no te metas”, “por algo será”, “en algo andaría” o “algo habrá hecho” cuando desaparecía alguien o era arrestado algún vecino. De esta manera, a través del miedo, del terror promovido por el Estado, se buscó extender el disciplinamiento social.

En el marco de esta “guerra”, al no tener el *subversivo* un status de “prisionero de guerra” quedaba fuera del amparo de la ley y de cualquier convención internacional, lo que a los militares les dejaba las manos libres para hacer con esos prisioneros cualquier cosa, en este caso: torturarlos, asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. En resumen, el manual RC-8-3 explicita la posibilidad de una represión ilegal, clandestina, exenta de todo control, tanto local como internacional.

Los norteamericanos tenían sus manuales, inclusive varios de los utilizados por las FFAA aquí fueron elaborados en el Pentágono, pero siempre tuvieron un marcado interés por la

experiencia francesa. Como ya mencionamos antes, un aspecto que los diferenció fue que los militares franceses señalaron sin eufemismos que el terrorismo y la tortura eran los métodos más eficaces contra la subversión marxista, lo comentaban públicamente y con naturalidad ya que estaban convencidos de que ese era “su trabajo”. En la Escuela de las Américas establecida en Panamá, las fuerzas armadas norteamericanas desarrollaron manuales de tortura para la instrucción de miembros de las FFAA latinoamericanas, pero siempre fueron secretos.

Un dato por demás destacable en toda la producción de esta doctrina, es la ausencia de análisis de las circunstancias económicas, sociales y políticas que afectaban a las sociedades donde intervendrían, es decir el contexto. ¿Por qué se luchaba? ¿Qué defendían las FFAA? En el *Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo*, de abril de 1983 se afirma “La República Argentina a partir de mediados de la década del ‘60 comenzó a sufrir la agresión del terrorismo que, mediante la violencia, intentaba hacer efectivo un proyecto político destinado a subvertir los valores morales y éticos compartidos por la inmensa mayoría de los argentinos.” ¿Cuáles eran esos “valores morales y éticos”? ¿Quiénes eran la “inmensa mayoría” que los compartían? ¿Hubo espacio político para que “la subversión” expusiera su proyecto de país sin mediar violencia?

Nada de esto se preguntaba en los manuales o los documentos militares. Por lo que transmite la lectura de esos documentos, evidentemente la formación militar, al menos en este aspecto, se circunscribió a un relato abstracto, reduccionista, adaptado a la historia oficial, sin aspiraciones de reflexión o mirada crítica y omitiendo un factor elemental como es el conflicto social, que siempre existió en la sociedad donde ellos también vivían. La cuestión social ocupó un lugar

insignificante en relación a la formación en combate y a cómo hacer “su trabajo” sin importar quién era el oponente. Indudablemente los militares, encriptados dentro de la vida de cuartel y el micromundo de “la familia militar”, veían la sociedad como un todo homogéneo donde no existían las clases sociales o, en caso de existir, la única reconocible era aquella integrada por las buenas familias, con valores occidentales y cristianos, la clase dirigente.

Juan Gasparini, militante montonero sobreviviente de la ESMA, cuenta en su libro *La Pista Suiza* los diálogos que mantenía con sus captores, oficiales de la Armada argentina: “No eran capaces de sostener una discusión política profunda. Rápidamente llevaban la polémica a un punto en que todo se resumía entre el `terrorismo` y el `antiterrorismo`. Ellos eran partícipes de la cruzada que debía erradicar el `flagelo subversivo`. Decían que libraban la `tercera guerra mundial` formalmente no declarada contra un enemigo que no vestía uniforme, no ocupaba terreno diferenciado, hallándose inmerso en el cuerpo social de la Nación.”⁶

Más allá de los ribetes místicos de la postura, es notable observar que en el discurso militar referido al combate contra la subversión pareciera que en el país no pasaba nada “anormal”. Todo funcionaba dentro de la *normalidad*, si había pobreza consideraron que siempre la hubo y en todo caso no era un tema de su incumbencia. Los gobiernos pasaban de manos civiles a militares y viceversa como un hecho natural, sin conflicto social aparente, hasta que por obra de un destino sobrenatural y siniestro la Argentina fue víctima inocente de

⁶*La pista suiza*, Juan Gasparini, Ed. Legasa, 1986, pág. 144.

un “invasor” ajeno a nuestro “ser nacional”⁷ que generó la resistencia peronista, los Cordobazos, los Rosariazos y la violencia social.

Se advierte en este razonamiento un denodado esfuerzo en colocar el origen del conflicto *fuera* de las fronteras nacionales, ignorando cualquier contradicción social interna y, de esta manera, justificar la represión dirigida al *enemigo externo* infiltrado en el cuerpo social interno.

De este modo se abonó el concepto del *subversivo* como una enfermedad que ataca al organismo social, se hablaba del *subversivo* como un virus, o un zombie, un ser caído de otro planeta o *un invasor*. No era humano.

Esto no fue inocente: fue la manera de despersonalizar y demonizar al enemigo y, a partir de ahí, legitimar la necesidad de su exterminio, de modo similar a lo que se hizo con el *indio* en el siglo XIX. Forma parte de lo que, en la jerga militar y de los servicios de inteligencia, se denomina “guerra psicológica” para formar opinión y consenso social, ampliamente aplicada por los franceses y luego por el resto de los ejércitos occidentales en sus propios países.

La Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75, un mamotreto de 200 páginas, menciona como *ideas rectoras* lo siguiente: “a) disminuir significativamente el accionar subversivo para fines de 1975. b) transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976. c)

⁷Veralegato final del general de división Luciano Benjamín Menéndez, expuesto, el 24 de julio de 2008, ante la Cámara Federal de Córdoba, que lo juzgaba por crímenes de lesa humanidad.

aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977.”⁸

Evidentemente ya para 1975 anunciaban secretamente la inminente derrota militar de las organizaciones armadas.

Por eso la Directiva Militar 405 de febrero de 1976 establecía como “objetivos prioritarios a las OPM (organizaciones político-militares) y a todas las organizaciones gremiales, fundamentalmente las de base”, apuntando los fusiles a la clase obrera y sectores populares. Si tomamos los datos porcentuales del libro “*Nunca más*” podremos comprobar que casi el 54% de los desaparecidos fueron trabajadores (obreros industriales, empleados y docentes).⁹

Cuadro 1.Extracción social de los desaparecidos de la última dictadura (%).

Extracción social de los desaparecidos	Porcentaje
Obreros	30,00
Empleados	17,90
Docentes	5,70
Subtotal	53,60
Estudiantes	21,00
Profesionales	10,70
Autónomos	5,00
Amas de casa	3,80
Conscriptos y personal de FFAA y FFSS	2,50
Periodistas	1,60
Artistas	1,30

⁸*Documentos del Estado terrorista*, Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 404/75, (Lucha contra la subversión) Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional). Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria n° 4, Ed. ANM 2012, pág. 21.

⁹*Nunca Más*, informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ed. EUDEBA, 1984.

Religiosos	0,30
Total	100,00

Cuadro 2. Edad los desaparecidos de la última dictadura (%).

Edad de los desaparecidos	Porcentaje
De 16 a 20 años	10,6
De 21 a 25 años	32,6
De 26 a 30 años	25,9
De 31 a 35 años	12,3
Subtotal	81,4
Resto	18,6
Total	100,0

Más del 50% de los desaparecidos eran trabajadores asalariados y más del 80% no superaban los 35 años de edad.

Es pertinente preguntarse en qué circunstancias desaparecieron o murieron la mayoría de estos militantes. Una parte pertenecía a alguna organización político-militar (o armada) y estando destinado a la estructura militar, murió combatiendo; esta situación fue más común entre los años ´70/´75. Como ya señalamos, hacia finales de este último año la estructura militar de las organizaciones armadas estaba en declinación, producto de la represión y también por la insistencia en el error político de seguir operando militarmente bajo un gobierno constitucional, lo que generó cuestionamientos internos, toda vez que derivó en una política cada vez más militarista que terminó aislándolas de las masas. Pero ya dijimos que este es otro debate.

A partir de 1976 se generalizó la represión ilegal de las FFAA y las FFSS y así muchos activistas de los frentes de masas de las organizaciones armadas y no armadas fueron secuestrados

del mismo modo que muchos otros militantes populares, en su mayoría jóvenes y trabajadores, como muestra la estadística.

La CONADEP en 1984, luego de nueve meses de ardua tarea de investigación y búsqueda en la que los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes fueron pilares fundamentales, pudo verificar alrededor de 340 Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE). Hoy (2015) hay más de 700 CCDTyE identificados en todo el país.

Lo mismo ocurre con el número de desaparecidos, la CONADEP registró en su momento alrededor de 9.000 casos. Con el paso del tiempo se constató que eran muchos más. El problema es que nunca lo sabremos con precisión hasta que las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica no abran sus archivos. Esa información siempre la tuvieron las FFAA y la Iglesia, pues lo que sí se sabe y se comprobó es que llevaron un minucioso registro de la represión clandestina, pero “el pacto de silencio” sellado desde entonces lo siguen manteniendo hasta el día de hoy. Según Gasparini el 20 de diciembre de 1983 partió hacia Europa, sin conocimiento de las flamantes autoridades, un Hércules C 130 del Ejército argentino, transportando misteriosos baúles con información secreta de las FFAA.

Aparentemente una parte de este cargamento quedó en el aeropuerto de Chateauroux, en Francia, y el resto siguió por tierra hacia cajas de seguridad de la banca Suiza.¹⁰

¹⁰Juan Gasparini, óp. cit, pág. 281.

1973 A 1976: DE LA PRIMAVERA CAMPORISTA A LAS COORDINADORAS DE GREMIOS EN LUCHA

“Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad”

Pancarta del Frente de Liberación Homosexual (FLH) en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo de 1973 durante la asunción del presidente Héctor Cámpora.

El triunfo de Cámpora en las elecciones del 11 de marzo 1973 se vivió como una fiesta popular, fue una explosión de alegría y esperanza contenida en millones de gargantas durante 18 años. Se había logrado derrotar a la dictadura militar y se respiraba en el aire la proximidad de una revolución social, casi a la vuelta de la esquina. También fue el momento en que el peronismo revolucionario, que ya se concentraba en torno a la Juventud Peronista y la organización Montoneros, tuvo el punto más alto de adhesión popular.

La presión del pueblo en las calles, indujo al gobierno de Cámpora a liberar a todos los presos políticos y sociales en su primer día de gobierno. A la vez los reclamos obreros estallaron por todo el país en una espiral incontenible de luchas y participación popular, nunca vista hasta entonces.

Simultáneamente en esta marea de expectativa revolucionaria confluyó, con diversas miradas, todo el espectro político de la izquierda y el peronismo revolucionario e incluso aquellos sectores progresistas no revolucionarios, entendiendo por estos últimos a los que aspiraban sólo a reformar el sistema, convirtiéndolo en un capitalismo más humano, sin que esto implicara un cambio estructural y de fondo.

En relación al movimiento obrero, ya eran conocidos los nombres de referentes como Agustín Tosco, René Salamanca, Raimundo Ongaro, Jorge Di Pascuale, Armando Jaime, Alberto Piccinini, Atilio López y podríamos mencionar a muchos más, pero por debajo de esta dirigencia sindical combativa ya reconocida, emergió una numerosa camada de jóvenes dirigentes obreros de base con su experiencia forjada en la resistencia peronista, los sindicatos combativos y las luchas de los años '60, sobre los que se sustentaron las nacientes *Coordinadoras de Gremios en Lucha*.

Si bien nunca se abandonó la idea de recuperar los principales sindicatos que estaban en manos de la dirigencia sindical del peronismo ortodoxo, conocida en ese entonces como *la burocracia sindical*, el particular ascenso del conflicto de clases que caracterizó a esta etapa, llevó al activismo obrero a crear nuevas y originales formas organizativas, empujado por las propias bases.

La recuperación del control en las fábricas y la coordinación a nivel territorial con otras fábricas y las barriadas circundantes, le otorgó mayor consistencia a la lucha obrera. Esta forma de articulación se fue extendiendo paulatinamente a todo el eje industrial, con diversos grados de profundidad.

La práctica cotidiana de la militancia obrera con criterios de construcción política democráticos y participativos, le dio un carácter genuino a la representatividad de los delegados y una participación masiva en las luchas sentidas como propias.

El control obrero de la producción fue un elemento preocupante para el poder económico, toda vez que ponía en tela de juicio el componente parasitario de la clase empresarial, al tiempo que los obreros avanzaban sobre formas superiores de organización colectiva, en una perspectiva revolucionaria. Un ejemplo hoy, aunque en un contexto muy diferente, podrían ser las fábricas recuperadas.

Esta forma inédita de construcción política que trascendía los límites de las fábricas para entramarse con otras fábricas, otros gremios y los barrios obreros, desembocó en el surgimiento de las *Coordinadoras de Gremios en Lucha*. Su carácter plural, donde participaba activamente todo el arco político de la izquierda y el peronismo revolucionario amplió sobremanera la base social y la participación obrera, generando, de hecho, un frente revolucionario de base que se extendía día a día.

Como fenómeno político y social, las *Coordinadoras de Gremios en Lucha* fueron un movimiento embrionario que no llegó a desarrollarse por el genocidio que, en breve, perpetrarían las FFAA sobre la sociedad argentina, pero no es errado considerar esa experiencia como el punto más alto de organización política y sindical que alcanzó la clase obrera en Argentina.

Fue lo que el dirigente radical Ricardo Balbín llamó, en 1975, “la guerrilla fabril” a la que había que liquidar. Es significativo el valor simbólico de las declaraciones del jefe de la UCR ante los periodistas extranjeros, al agregar que estaba más preocupado por la *infiltración* en las fábricas que por la

situación en los montes tucumanos, en referencia al frente de guerrilla rural abierto recientemente en esa zona por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Pero Balbín no era el único preocupado, a pedido del Departamento de Estado, la embajada de los EEUU hizo un minucioso seguimiento del tema; en un documento del 2 de diciembre de 1975 señala:

“El terrorismo es un hecho y una forma de vida en la Argentina. Las actividades guerrilleras en las zonas rurales de Tucumán y en las zonas urbanas de Córdoba y Buenos Aires han sido objeto de comentarios en todo el mundo y en interminables análisis. Sin embargo, otras formas de guerra de guerrillas, probablemente incluso más insidiosa, y a la cual se le ha prestado – hasta el momento – poca atención, está en plena operación en Argentina. Es la guerra que la guerrilla industrial está llevando a cabo, que opera en la planta de producción, en el sindicato (...) Esta tiene como objetivo radicalizar a los trabajadores, alienarlos de sus dirigentes legítimos y de su gobierno, y ganarse su apoyo y solidaridad para así poder convertirlos en sus serviciales cómplices o dóciles seguidores”.¹

Fue lo que las fuerzas policiales llamaron “la serpiente roja del Paraná”, refiriéndose a la efervescencia obrera en toda la zona industrial de la ribera paranaense. La democracia representativa no alcanzaba para contenerla, dado que estaba siendo confrontada a un concepto superador de democracia. Fue el gran ogro que espantó a la mayoría de la clase política,

¹*Terrorismo industrial: guerra de guerrillas en la fábrica.* Fragmento del documento emitido por la embajada de EEUU en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1975, para el Departamento de Defensa y las sedes diplomáticas en los países latinoamericanos. Citado en *Cuentas Pendientes, los cómplices de la dictadura*, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, pág. 242-243. Editorial Siglo XXI. 2013.

los empresarios, la burocracia sindical, el imperialismo yanqui, la jerarquía eclesiástica y las FFAA. Todos ellos se unieron para aniquilarlo.

Siguiendo lo instruido por los franceses y norteamericanos, la “guerra” durante el período constitucional del 73/76 se desplegó bajo el formato de la represión paraestatal, conocida sin eufemismos, como *la Triple A* o las *Tres A* por la sigla *Alianza Anticomunista Argentina*. Con la modalidad del secuestro, tortura y ejecución sumaria, la *Triple A*, en sus diferentes versiones, se cargó con aproximadamente 2000 asesinatos de militantes políticos y sindicales durante ese lapso de gobierno. Un detalle categórico es que la mayoría de esas víctimas fueron activistas sindicales y militantes de base, particularmente trabajadores, lo que nos lleva a pensar que ya se instrumentaba una estrategia planificada de aniquilación del vínculo o el punto de unión entre las organizaciones revolucionarias y la clase obrera.

“...al examinar la composición de los objetivos humanos de las acciones represivas de la Triple A y de las fuerzas legales del Estado, encontramos que se dirigieron mayormente a los activistas de base, antes que a los militantes de los “aparatos armados”. Entre marzo del ‘73 y mayo del ‘74 más del 80% de las bajas del campo popular no pertenecían a una fuerza armada.”²

La represión ilegal paraestatal en esa coyuntura, tuvo diversas expresiones. La más difundida fue la inspirada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega y los jefes de la Policía Federal, comisarios Alberto Villar y Luis Margaride. Nucleó a miembros de la Policía Federal, como el comisario

²*Las guerras obreras en la Argentina. Villa Constitución en 1973-1975*, de Agustín Santella (PDF).

inspector Juan Ramón Morales, el subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón y Miguel Ángel Rovira entre los más conocidos; reclutó mercenarios contratados por el Ministerio de Bienestar Social, militares retirados y en actividad y también algunos delincuentes comunes. Pero además hubo otras versiones de las *Tres A* que estuvieron a la par, como el *Comando Libertadores de América* en Córdoba, el *Comando Restaurador del Norte* en Tucumán, que eran controlados por el Tercer Cuerpo de Ejército a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, también la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, entre otras. Asimismo, estaba la *Triple A* sindical que se nutrió de los sectores ortodoxos del sindicalismo peronista, como la *Juventud Sindical Peronista (JSP)*, el *Comando de Organización (CdeO)*, la *Concentración Nacional Universitaria (CNU)*, la *Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA)*, y remanentes de la *Alianza Libertadora Nacionalista (ALN)*. Todas fueron bandas mixtas compuestas por policías y miembros de las fuerzas de seguridad, matones sindicales, militantes de ultraderecha, militares en actividad y retirados y desarrollaron impunemente su actividad en todo el país con apoyo del Estado y la anuencia del gobierno.

La mayoría, sino la totalidad, de las víctimas fueron militantes políticos y sociales de diversas agrupaciones de izquierda, peronistas y revolucionarias y, dentro de esta cifra, hay un importante número de militantes sindicales de base.

Un dato poco difundido y convenientemente disimulado fue que la actividad de las múltiples versiones de la *Triple A* no se limitó al secuestro y asesinato de militantes populares únicamente. A modo de *purga* también incluyó asesinatos de miembros de fuerzas de seguridad disconformes con esos procedimientos. A la vez sumó amenazas y atentados con colocación de explosivos en locales partidarios, medios de

comunicación, domicilios particulares, escuelas y universidades, incluso a personajes afines a la derecha, como parte de una estrategia claramente diseñada a la hora de crear “caos social” y apuntar hacia un callejón donde la única salida sería el golpe militar. La mayoría de estos ataques y asesinatos fueron eficazmente atribuidos a “la guerrilla” a través de los medios masivos de comunicación.³

Es conocido el incidente que ocurrió en febrero de 1974 cuando, durante una conferencia de prensa con el presidente Perón, una periodista del diario *El Mundo*, Ana Guzzetti, lo interpeló al General: “En dos semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas...” (de la JP, JTP y JUP, todas agrupaciones del peronismo revolucionario), “hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo - Julio César Fumarola, muerto a balazos - ...” “evidentemente todo está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha”, le dijo. Perón, visiblemente molesto, le espetó: “¿Usted se hace responsable de lo que dice? Lo de *parapoliciales* lo va a tener que demostrar” e inmediatamente se dirigió a su edecán y le ordenó: “Tome los datos necesarios para que el Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita”.⁴

Hay que destacar que, de algún modo, se dio una situación que puede interpretarse como paradójica. En un escenario político, donde después de 18 años de proscripción el peronismo accedió, por la vía de las elecciones, a la administración del Estado y se concretó el ansiado retorno de

³Ver *La búsqueda, una entrevista con Charlie Moore* de Miguel Robles. Ediciones del Pasaje, Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba. 2010.

⁴*El Descamisado, Periodismo sin aliento*, de Ricardo Grassi, página 267. Editorial Sudamericana, 2015.

Perón al país, estalló el conflicto dentro del movimiento peronista. Ante la existencia de una pujante corriente interna renovadora y revolucionaria, el movimiento peronista entró en una aguda tensión.

Aquella otrora columna vertebral del movimiento peronista, - la clase trabajadora - estaba siendo disputada por una lozana dirigencia sindical revolucionaria que venía a insuflar un nuevo oxígeno a ese anquilosado movimiento obrero peronista organizado, intentando reconvertirlo en un movimiento revolucionario hacia el socialismo.

En esas circunstancias se produjo el 25 de septiembre de 1973, la ejecución del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, por parte de un comando de Montoneros. Rucci, además de ser el secretario general de la CGT, tenía fuertes vínculos con la CNU, la JSP y demás grupos de choque de la derecha peronista y a la vez poseía una relación muy cercana con el general Perón.

Este episodio generó una gran conmoción en la sociedad y repercutió fuertemente al interior de la estructura política de Montoneros, contribuyendo a una crisis interna que se haría visible más tarde.

Es aquí donde la reacción de ese peronismo conservador y verticalista, formado por la vieja estructura política del PJ y la burocracia sindical, no se hizo esperar. Prueba de esto fue la *Orden Reservada* del Consejo Superior Peronista del 1º de octubre de 1973⁵ dirigida a los delegados del Movimiento Nacional Justicialista, donde se hace clara referencia a la “infiltración marxista” en el Movimiento y se declara la guerra en todos los terrenos a la izquierda marxista en

⁵www.elortiba.org/old/pdf/documento_reservado.pdf

general. Tal como lo publicó el diario *LaOpinión*, en su edición del 2 de octubre, la lectura del documento se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada ante todos los gobernadores de las provincias, con la presencia del presidente provisional, Raúl Lastiri, el ministro del interior, Benito Llambí y del presidente recientemente electo, el general Perón. Esto significó la implosión del peronismo e indudablemente fue decisivo el aval del viejo líder, que tomó partido por ese sector conservador, desatando una encarnizada guerra sin cuartel contra todo activismo sindical de color rojizo. La postura de Perón en esa coyuntura se hizo sentir públicamente en varias ocasiones, pero la más conocida fue en aquel famoso discurso que el líder pronunció el 1º de mayo de 1974 desde los balcones de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, donde agravió y amenazó a la JP-Montoneros, razón por la cual la Juventud Peronista se retiró de la plaza. Ese discurso fue el último y el más claro respaldo al ala más conservadora y ortodoxa del peronismo, por parte de Perón. Esta ruptura fue el punto de inflexión a partir del cual la estrategia política de Montoneros comenzó a hacer agua y produjo, no sólo una fuerte crisis interna dentro del peronismo revolucionario, sino también el comienzo de su aislamiento de las masas populares que era el primer objetivo de las FFAA.

La represión clandestina planificada y sistemática dirigida contra el movimiento obrero fue tan profunda como disimulada en el fárrago cotidiano de hechos violentos. Con la consigna “*ni yanquis ni marxistas, peronistas*” como grito de guerra, la versión sindical/PJ de la Triple A, contando con fuerte apoyo estatal comenzó, el mismo día del retorno de Perón al país, el 20 de junio de 1973, con la masacre de Ezeiza⁶ y continuó con una matanza sin fin de activistas políticos y sindicales, eclipsando la cálida y breve primavera camporista.

⁶Ver Ezeiza, de Horacio Verbitsky, Ed. Contrapunto, 1985.

Todo fue avalado por la dirigencia política y sindical del PJ, por los principales partidos de la oposición y a la vez bendecido por un Perón ya viejo y enfermo, pero lúcido.

Como muestra de un nuevo escalón ascendente del baño de sangre que se aproximaba, debemos señalar que en febrero de 1974 se desencadenó el violento golpe de Estado policial contra el gobierno popular de la provincia de Córdoba.

Conocido como el *Navarrazo*, a partir de la insubordinación del coronel Antonio Navarro, jefe de la Policía cordobesa que encabezó la rebelión, de un día para otro se inundó la ciudad de Córdoba de matones fuertemente armados; ocuparon las radios y otros medios de comunicación y se destituyó a punta de ametralladora al gobernador Obregón Cano, a su vicegobernador Atilio López y a dirigentes y funcionarios del peronismo revolucionario. Este verdadero golpe de Estado en la provincia de Córdoba, la más combativa de las provincias, fue una fuerte señal cargada de simbolismo y un globo de ensayo de lo que se venía, dado que contó con el consentimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el beneplácito del Tercer Cuerpo de Ejército y el silencio medroso y cómplice de la Legislatura provincial. De hecho, el gobierno nacional decretó la intervención de la provincia enviando como interventor federal al brigadier Raúl Lacabanne, quien puso a disposición de los grupos parapoliciales todos los recursos del estado provincial.

En un año fueron destituidos, por diversos medios de dudosa legitimidad, todos los gobernadores que respondían a la tendencia revolucionaria del peronismo, un total de seis. Sumado a esto, ocho diputados de la Juventud Peronista renunciaron a sus bancas en enero de 1974 en desacuerdo con la dureza represiva del nuevo Código Penal (Ley 20642) enviado por el Poder Ejecutivo y votado en el Congreso, lo que

redujo a la mínima expresión todo el espacio político que había logrado la Juventud Peronista dentro de la estructura del Estado. Evidentemente la puesta en marcha de la *orden reservada* era un hecho incontrastable y nadie se acordó que esos gobernadores defenestrados y esos diputados renunciantes habían sido elegidos en elecciones libres y tenían mandato popular.

Ante estos episodios el ciudadano común podría preguntarse y reclamar a la clase política de entonces dónde quedó el respeto a las instituciones republicanas, la democracia y la seguridad jurídica; ¿qué hizo, por ejemplo, el Congreso Nacional y la Legislatura cordobesa para preservarlos? Pues evidentemente avalaron los hechos mencionados, dejando al desnudo su vergonzosa complicidad.

Simultáneamente las armas del Estado, en sus versiones legales e ilegales, ya apuntaban al movimiento obrero.

La zona de Villa Constitución, equidistante de la ciudad de Rosario y la localidad bonaerense de San Nicolás, formó parte del cordón industrial más desarrollado del país con 435 establecimientos industriales que ocupaban a más de 8000 obreros. Las fábricas metalúrgicas Acindar, Marathon, Metcon y Villber concentraban aproximadamente 6000 trabajadores calificados con gran participación política y sindical. Por su ubicación y nexos con ciudades altamente industriales y politizadas y por ser industrias de base (producción de aceros) era una zona estratégica.

En marzo de 1975, durante el conflicto obrero en Villa Constitución, que involucró a miles de obreros metalúrgicos y a los pueblos de la zona, se lanzó el operativo *Serpiente Roja*. Se inició con el desembarco de grupos parapoliciales, financiados por las mismas empresas, que se cobraron

numerosas víctimas entre los obreros (se estima en aproximadamente 30 asesinados) y con el despliegue de 4000 efectivos militarizados de la Policía Federal, Policía Provincial, Prefectura, Gendarmería, SIDE, militantes de la Juventud Sindical Peronista y miembros del Ministerio de Bienestar Social armados e identificados con brazaletes, que se distribuyeron entre San Nicolás, Villa Constitución y Rosario, y arrestaron a más de 300 activistas, lo que sumó otro antecedente a la ofensiva que se cernía sobre la clase obrera, los sectores populares y la militancia revolucionaria.⁷

Sería largo extendernos en los numerosos hechos de violencia política de esa época y hay mucho escrito y publicado al respecto, pero esta acotada muestra de solo algunos de los sucesos más destacados producidos o generados desde el Estado durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, formaron parte de una avanzada planificada y funcionaron como un laboratorio de ensayo de lo que vendría, contribuyendo a oscurecer el panorama político y social, y creando de ese modo, el clima social necesario para instalar el terrorismo de Estado generalizado durante la dictadura cívico-militar.

El ciudadano de a pie y la sociedad toda, asistió a través de los medios masivos de comunicación a una magnificada espiral de violencia, ampliada y extendida por la acción de los muchos grupos parapoliciales y paramilitares. Tanto las acciones de las organizaciones armadas de izquierda como las de las distintas versiones de la *Triple A*, fueron eficazmente mezcladas en un cóctel explosivo y alarmante. En una acción mancomunada, con grandes titulares catástrofe, los medios publicaban a diario atentados, asesinatos, cuerpos mutilados

⁷Ver *Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura*, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Op. Cit. Págs. 206/207.

y episodios violentos que, ante la duda, eran atribuidos a las organizaciones guerrilleras, metiendo todo en la misma bolsa de “la violencia extremista”.

De esta forma el *partido militar*, concretó su estrategia de “guerra psicológica” minando el ánimo social, enrareciendo el clima político y aislando a las organizaciones armadas revolucionarias.

El 1 de julio de 1974 murió Perón. Su muerte fue el último ingrediente para completar una crisis de carácter terminal, este episodio fue convenientemente aprovechado por las FFAA que avanzaron fuertemente sobre el debilitado gobierno justicialista presidido, a partir de ese momento, por la endeble viuda de Perón, María Estela Martínez, conocida como *Isabelita*. Cumplido este objetivo, a menos de un año y medio del triunfo de Cámpora, dentro de las FFAA se comenzó a debatir la fecha del próximo golpe de Estado.

Fueron, tal vez, los tres años más vertiginosos y convulsionados de la historia política argentina. La primavera democrática sumó miles de jóvenes a los ya miles que venían combatiendo las dictaduras militares. Fue tan nutrido y fuerte el aluvión de militancia revolucionaria como el pánico que generó en el poder económico y del imperio. Pero lo más preocupante para estos fue que un sector importante de la clase obrera argentina comenzaba a abandonar la dependencia del sindicalismo ortodoxo peronista, para reconfigurar su identidad política en una nueva representación con la vista puesta en un modelo social diferente, bastante parecido al socialismo. Como sostiene Agustín Santella en su trabajo *Las guerras obreras en Argentina. Villa Constitución 1973-1975*, “El análisis de los hechos armados, y no sólo el caso de Villa Constitución, muestra que la violencia atravesó a los sectores obreros

previamente al golpe de 1976. Entre 1973-1976 en la Argentina una parte de las acciones armadas fueron dirigidas directamente contra trabajadores o representantes gremiales.”⁸

Dicho esto, ya comienza a advertirse quienes conformarían el grueso de los desaparecidos.

A riesgo de ser recurrentes, volvemos a insistir en cómo, cuando las papas queman, el poder no vacila. Del mismo modo que en la Semana Trágica, o en las huelgas de la Patagonia, o en La Forestal o en los bombardeos a la Plaza de Mayo o a La Moneda, en Chile, no importa cuán constitucional sea un gobierno: si el poder capitalista, *el mercado*, se ve en riesgo, acciona toda la maquinaria de guerra del Estado para ahogar en sangre cualquier movimiento que lo cuestione.

En este convulsionado clima fue que en febrero de 1975 la presidenta Isabel Martínez de Perón firmó el decreto 261/75 que ordenaba la intervención del Ejército en la provincia de Tucumán. A partir de ahí las FFAA comenzaron a instrumentar su plan sistemático con la apertura de los primeros centros clandestinos de detención tortura y exterminio. Para esa fecha, socavada su autoridad política, el gobierno de *Isabelita* rodaba inexorablemente por la empinada pendiente de la impotencia y era sometido a presiones de todo tipo. Las luchas intestinas dentro del peronismo ortodoxo agudizaron esta situación, que fue fogueada y aprovechada por el *partido militar* en connivencia con los grandes grupos económicos. Había que

⁸*Las guerras obreras en Argentina. Villa Constitución 1973-1975*, Agustín Sante-lla (pdf) pág. 305. Capítulo del libro en prensa: Inés Izaguirre compiladora *Genocidio, lucha de clases y guerra civil en Argentina*. EUDEBA 2009.

ponerle freno a esa clase obrera contestataria y beligerante, tarea que se le asignó a las FFAA con la colaboración directa de los principales dirigentes del sindicalismo ortodoxo peronista y obviamente de las empresas. En agosto de 1975 fue creada la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) como expresión acabada del apoyo empresario al futuro golpe de Estado que, a la vez, funcionó como proveedora de ideas, planes económicos y funcionarios para el nuevo gobierno de facto. La integraron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras entidades empresarias. A la par comenzaron los ensayos de un nuevo plan económico -ya instrumentado en otros países- consistente en un severísimo ajuste, la reducción a la mínima expresión de la intervención del Estado en la economía, la apertura a *los mercados*, el ingreso irrestricto y definitivo del capital financiero internacional especulativo y la consecuente destrucción del aparato productivo nacional con las consecuencias imaginables, luego comprobadas empíricamente.

A partir de marzo de 1976 las FFAA pudieron poner en práctica, ya sin ningún obstáculo, lo que habían aprendido y para lo que se venían preparando con los franceses y los norteamericanos desde 20 años atrás. Buena parte de la militancia, tanto de las organizaciones armadas como de tantas otras que no lo fueron, cayó en manos de la represión ilegal, muchos combatiendo y muchos otros en sus casas, en sus lugares de trabajo o la vía pública fueron secuestrados, torturados en centros clandestinos de detención y asesinados. De estos, la inmensa mayoría desaparecieron para siempre. Otros aparecieron acribillados en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Esta última modalidad se acentuó después del golpe de marzo del '76 por dos motivos: el primero es lo ya dicho, las organizaciones armadas, para esa época, ya estaban muy castigadas y con escasa capacidad operativa en el plano militar, razón por la cual la represión apuntó centralmente al activismo en fábricas, sindicatos, universidades, colegios, barrios, en el Estado y en todo recoveco donde hubiera actividad política. El segundo era un motivo más propagandístico de la dictadura militar: se secuestraban militantes obreros, trabajadores, estudiantes, en sus lugares de trabajo, hogares o en la vía pública, se los torturaba, se los asesinaba y se escenificaba un “enfrentamiento”. Esto servía para que los medios masivos de comunicación, la mayoría cómplice de la dictadura, difundieran estas noticias para consolidar en el imaginario social la idea de una “guerra contra la subversión” y el avance hacia la victoria final por parte de las FFAA.

Mientras esto ocurría, los grandes grupos económicos multinacionales se asociaron a los locales y se instalaron cómodamente en la estructura del Estado para realizar sus jugosos negocios particulares a expensas del Estado, de los trabajadores y buena parte de la sociedad.⁹

⁹Ver *Carta abierta de un escritor a la Junta Militar*, de Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. Distribución clandestina.

EL ESTADO Y LAS TRANSFORMACIONES HOY

“Antes como ahora hay, desde mi humilde y seguramente sesgado punto de vista, una falta de política, en el sentido fuerte del término, en el sentido de lo colectivo, lo común y lo público; una política que no se espanta de la violencia, pero la reconoce como una dimensión que puede y debe subordinarse a los consensos tanto tiempo como sea posible.”

Política y/o Violencia, una aproximación a la guerrilla de los años setenta, Pilar Calveiro, pág. 20, Ed. Siglo XXI, 2013.

El mundo y nuestro país sufrieron profundos cambios a partir de 1975, tanto en el aspecto económico, como en el plano político y social, donde lo más destacable es que el capitalismo financiero especulativo se apoderó del control mundial de la economía occidental, relegando a un segundo plano al capitalismo productivo.

A partir de aquí la guerra tomará otras formas, como ocurrió durante los siglos XIX y XX, pero seguirá. Por ahora no será necesario que la lleven adelante las FFAA, pero estas se mantendrán en reserva. El Imperio cambió las estrategias y las armas también, lo que no quiere decir que las armas, las de fuego, las haya dejado de lado. Muy por el contrario. Esto es verificable, en el plano internacional, con las atroces invasiones militares comandadas por EEUU y sus aliados de la OTAN y, en el plano local, en la cantidad de muertes y

torturas generadas por la violencia institucional en lo que va de gobiernos constitucionales.

En nuestro país se exterminó y se hizo desaparecer literalmente a una generación de jóvenes militantes políticos de ideas progresistas y revolucionarias, que no solo integró organizaciones armadas, sino que participó también en otros espacios políticos que incluyó, hasta donde se pudo, la gestión de políticas públicas desde el Estado. Después de la dictadura quedó lo que quedó: una clase política acomodaticia y sumisa a los poderes económicos de turno, una dirigencia sindical cómplice y partícipe del genocidio, al igual que instituciones como la Iglesia y el Poder Judicial. Hubo excepciones individuales, pero pocas, muy pocas.

Ante la ausencia de esa generación, ese vacío político, fue ocupado por esa clase política mediocre y servil a los mandatos del imperio, por lo que nuestro lugar en el mundo, entonces, quedó sujeto a las decisiones tomadas en Washington.

El resultado de ese genocidio vino acompañado de un cambio en el rol económico de nuestro país dentro del concierto de las naciones occidentales. Se modificaron las relaciones de producción en todo el planeta y, una vez más, atrás quedó el anhelo de una Argentina industrializada y soberana. Volvimos a ser un país proveedor de materias primas a bajo costo.

Consecuentemente con este cambio, aquella otrora clase obrera pujante, altamente calificada y cuantitativamente poderosa que iba a ser la vanguardia de una revolución social comenzó, junto con la industria nacional, un profundo e inexorable proceso de extinción que la redujo a la mínima expresión. Lejos quedó aquel país donde esa clase obrera

participaba en casi un 50% del PBI y cuyo índice de desempleo en 1974 era el 2.7%, donde el Estado utilizaba las herramientas que disponía para controlar la inflación y el índice de pobreza estaba por debajo del 5%. No existía “*el riesgo país*” y la deuda externa no era un problema central de la economía, ya que en esa fecha sólo ascendía a poco más de 7.000 millones de dólares, menos de un tercio de las exportaciones anuales.

Habrá que definir entonces quién (o quienes) es hoy el sujeto de una revolución o al menos de un cambio social favorable a los sectores populares de la sociedad, dado que, luego del genocidio que se desató sobre el segmento más avanzado de la clase obrera argentina durante la última dictadura cívico-militar y, en el transcurso de más de treinta años de una democracia formal y restringida que mantuvo la continuidad del modelo económico instalado por la dictadura, surgió un numeroso sector social de trabajadores precarizados, desocupados e indigentes que, con la profundización del modelo capitalista financiero especulativo, se consolidó definitivamente.

Al menos dos generaciones no conocieron el empleo formal, “en blanco”, la sindicalización, el derecho a vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, etc. Se perdió el concepto de *derechos*, la cultura del trabajo y los saberes que la misma transmite de generación en generación y, en ese transcurrir, empezamos a ver - y a naturalizar - a desocupados hurgando en los contenedores de la basura para comer. Tal vez este sea el rostro más cruel de la derrota de clase que infligió la dictadura.

Está demostrada la injusticia y la violencia social que genera el modelo de acumulación capitalista. Está claro también que, la clase parasitaria que lo encabeza, se ha esforzado

denodadamente para que ningún otro modelo diferente prosperara. Los modelos socialistas del siglo XX fueron intentos válidos por instalar un sistema social más justo, aunque hoy se hayan desvanecido opacados por errores propios, pero fundamentalmente, por la guerra sorda e implacable que instrumentó occidente contra ellos.

Suena obsoleto hablar hoy de socialismo, pareciera que el derrumbe de la Unión Soviética enterró para siempre la utopía socialista. A lo sumo miramos, con nostalgia, hacia Cuba que resiste estoicamente.

Pero mientras la exclusión y la desigualdad perduren, continuará el conflicto social y seguirá la lucha por la emancipación de aquellos sojuzgados, que hoy siguen siendo la mayoría en el mundo.

Desde el retorno de los gobiernos constitucionales, las FFAA pasaron a un segundo plano dado que, cumplida su funesta misión, volvieron a los cuarteles para ocuparse de “su rol profesional”. Claro que tuvieron que hacerlo con un perfil más bien bajo, teniendo en cuenta el fuerte cuestionamiento social debido a su actuación, tanto en la llamada “guerra contra la subversión”, como en la guerra de Malvinas.

Se replegaron, no sin antes seguir provocando a la sociedad, como lo hicieron durante la investigación de la CONADEP y el juicio a las tres primeras juntas militares, mediante amenazas de bombas en escuelas, intimidaciones telefónicas a jueces, fiscales, testigos, sobrevivientes y familiares, aprietes a punta de pistola por *personal de civil*, tal como ya lo habían hecho en los ´70, para crear el “clima social” a favor del golpe.

Cuando asomó la posibilidad de extender los juicios al *personal militar subalterno*, algo que reclamaba una sociedad

azorada por los crímenes de la dictadura, directamente se pintaron la cara y salieron a la puerta de los cuarteles armados hasta los dientes, para desafiar al gobierno y a la comunidad. Lejos estuvieron de lograr algún reconocimiento de la sociedad, pero sí obtuvieron algo que les otorgó la representación política de ese momento: la impunidad, a través de las leyes de *obediencia debida*, el *punto final* y los indultos. Luego se retiraron a los cuarteles a rumiar su desprestigio, pero con la corporación intacta. A partir de esta nueva etapa inaugurada en 1983, se habló de “recuperación de la democracia”.

Desde la clase política y dirigente se desarrollaron diversas conceptualizaciones respecto del Estado.

Mientras la sociedad intentaba digerir la atroz experiencia de la dictadura militar y algunos sectores debatían en torno al concepto de *terrorismo de Estado*, en las esferas de la política partidaria deliberaban sobre modelos de *democracias* ya experimentados en Europa. De acuerdo a quién gobernara, el Estado podía ser “de bienestar” interviniendo en la economía y las cuestiones sociales, generando más derechos, una distribución de la riqueza menos asimétrica y mediando en la disputa entre capital y trabajo, de modo tal de establecer un capitalismo “más humano”, “más democrático”.

Por otro lado, los sectores más concentrados del poder económico continuaron presionando por un Estado funcional a sus intereses, que no interviniera y dejara en manos del capital y del *mercado* el manejo de la cosa pública. Esto último, que se dio en llamar *neoliberalismo* es, en definitiva, el ya viejo y conocido capitalismo salvaje puro y duro. Este *debate* - si así podemos llamarlo - entre estas dos únicas opciones, es el que continúa en la agenda política al día de hoy, aunque no debería ser el único.

En nuestro país, quienes promueven el Estado de bienestar dentro del sistema capitalista, han abierto la discusión sobre conceptos tales como el *Estado democrático* en oposición al *Estado terrorista*, fundamentalmente en los últimos treinta años, lapso en que se definió el concepto de *Estado terrorista* o *terrorismo de Estado*, a partir de la sangrienta experiencia de la última dictadura cívico-militar.

Si bien esto constituyó un importante avance y se profundizó en la descripción del terrorismo de Estado, la discusión no llegó a desentrañar la compleja trama de pasar de un *Estado terrorista* a un *Estado democrático* y más aún, la definición de *Estado democrático* todavía navega en un mar de ambigüedades, donde cada cual le imprime el contenido que mejor le convenga, por lo que sigue siendo un territorio en disputa.

A modo de aporte a esta polémica, podemos volver al pensamiento de buena parte de la generación del '70 que, sin eufemismos, señalaba a la democracia burguesa como imperfecta, limitada y beneficiaria de un sector minoritario de la población. Proponía en cambio una democracia superadora, entendiendo por esto último una sociedad más igualitaria, donde la población tuviera una participación protagónica que le permitiera intervenir para garantizar sus necesidades básicas de manera real y efectiva, lo que implicaba una modificación profunda y estructural, no solo del Estado y de la economía, sino de la sociedad toda. Pero estamos lejos de esto y semejante aporte solo nos remitiría a una estéril declaración de principios, calificada por algunos como *setentista*.

Entonces, pensar en una transformación amplia de las estructuras básicas del terrorismo de Estado, esto es, desarticular completamente el aparato represivo aun intacto,

las usinas ideológicas (*think tank*) que lo sustentaron y lo sustentan, el Poder Judicial que le dio amparo jurídico, el sector civil de la sociedad que le sirvió de base, las empresas mediáticas que promocionaron la impunidad y, en línea con estas últimas, los grandes grupos económicos y financieros que impulsaron, participaron y se beneficiaron con el genocidio, implicaría un debate al que la clase política y una parte de la sociedad le rehúye.

El obstáculo principal en esta cuestión reside, entre otros puntos, en que una porción no menor de esa dirigencia política, la más tradicional, fue partícipe necesario del genocidio por acción u omisión, en particular los sectores más conservadores de los partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, además de muchos partidos conservadores nacionales y regionales. Ni hablar de otros poderes, como el Poder Judicial, la cúpula de la Iglesia, ciertos dirigentes sindicales y el omnipresente poder económico. La aceptación de esta realidad por parte de la sociedad como un hecho irreversible y el “hacer la vista gorda” de muchos sectores que no fueron partícipes del genocidio se asentó en la cultura argentina.

Por otro lado, quienes podrían instalar el tema, por ejemplo, los defensores del *estado de bienestar*, aparentan no tener la suficiente fuerza social y política (o la convicción necesaria) como para hacerlo y, las más de las veces, optan por la decisión política de no avanzar, dejando expuesta su debilidad ante los poderes fácticos.

De este modo es algo empíricamente comprobable que el aparato represivo del Estado post-dictatorial y todo el andamiaje jurídico y económico que lo sustenta no sólo no se desarticuló, sino que hubo consenso entre la clase política tradicional de no insistir en su desmantelamiento.

En tanto la sociedad toda es devorada por el fárrago de una agenda política ajena, que escapa y silencia la posibilidad de una discusión de fondo.

Esto deja de manifiesto que hoy *no hay* una demanda social ostensible que impulse esta cuestión, una masa crítica que lo implante en la agenda de la discusión política, lo que habla también del escaso eco social de aquellos espacios políticos que sí lo tienen, en algún lugar de su agenda.

La primera conclusión que podemos extraer es que, el reclamo por el desguace del Estado terrorista dejó de ser una demanda de masas o “de la sociedad”, para recluirse en el núcleo duro de las organizaciones de DDHH y aquellos sectores y espacios políticos que las acompañan.

Podemos afirmar entonces que la última dictadura cívico-militar cumplió su misión: en estos más de 30 años, el modelo social, (capitalista, ergo, desigual), goza de buena salud, sigue fuerte, con una clase política que lo sostiene sin demasiadas dificultades.

A nivel local, los factores de poder siguen vigentes hoy, ¿Quiénes son?, pues lo ya dicho: la clase empresaria en el formato de corporaciones multinacionales, la Iglesia, buena parte de los sindicatos actuales, cuyos muchos de sus líderes son prósperos empresarios, el Poder Judicial y amplios sectores de la clase política y, por supuesto, las FFAA y las fuerzas de seguridad, todas corporaciones fuertemente enraizadas en la estructura del Estado. Claro está que nunca debemos olvidarnos de la inefable presencia del imperio, a través de su lobby empresarial y su embajada, siempre muy activa. Todo esto sigue intacto y con un nivel de concentración de poder bastante mayor que hace 40 años atrás.

Como agravante, la clase política es cada vez menos creíble. Se puede observar con claridad cómo los partidos políticos tradicionales han sido colonizados por las corporaciones económicas. Ya no hay un partido *delas corporaciones* o del poder económico financiero, como lo fue en su momento el Partido Conservador o el Partido Unitario y el Partido Autonomista Nacional en el siglo XIX, sino uno o varios candidatos de ellos mismos, en cada partido que tenga posibilidades electorales.

En este sentido, y aquí la novedad, - si lo fuera - pareciera que el concepto de “guerra permanente” o “guerra total” acuñado en los ya lejanos años ´50, en plena Guerra Fría, hoy sigue vigente, pero se han diversificado los medios para llevarla adelante. Las armas son otras, aunque la presencia “disuasiva” del aparato militar, siempre está presente, hoy representado por las fuerzas de seguridad y el “gatillo fácil”.

Nada de toda esta operatoria es nueva. La aplicó la generación del `80 en el siglo XIX y siguió con otros matices en la década del `30 o después del golpe del `55. Hoy continúa con características propias de esta época. Es así que, si en el *juego democrático electoral* se da la carambola histórica de que asuma un gobierno de corte popular, promotor de un “estado de bienestar”, este queda encorsetado dentro de un Estado con profundos componentes del viejo y arraigado Estado Terrorista. Esto se puede expresar en que tenemos “*Estados dentro del Estado*”. Hay organismos que operan corporativamente, prescindiendo del control parlamentario, presidencial o social. Tienen presupuesto, estructura y poder dentro del *Estado democrático*. Operan por fuera, por encima o al margen de la ley maniobrando, en diversas coyunturas, a favor de intereses corporativos y sectoriales que nunca coinciden con “el bienestar general”. El panorama toma mayor complejidad, al observarse la participación de sectores

de la clase política, en connivencia con estos “*Estados dentro del Estado*” y la presencia cada vez mayor de funcionarios *lobbistas* de determinados grupos económicos o *de negocios* en toda la estructura estatal. Si bien hay sectores de la clase política que pretenden controlar o moderar el poder de aquellos estamentos del Estado que conspiran, en general no lo logran por falta de instrumentos institucionales efectivos para ello o por ausencia de suficiente respaldo político.

Esto ha ocurrido durante los últimos 35 años ante los ojos de todos: se han sublevado los militares para no responder ante sus crímenes (rebeliones carapintadas), lo mismo ha pasado con las policías y otras fuerzas de seguridad, también podemos sumar a los diferentes servicios de inteligencia o a sectores del Poder Judicial.

Las empresas, con su característico perfil bajo y entre bambalinas, han operado fuertemente con sus lobistas, para desviar y diluir en la nada de los polvorientos despachos judiciales su responsabilidad en el genocidio y los jugosos negocios que resultaron del mismo. Por otro lado, han utilizado la herramienta de los golpes financieros o institucionales, para torcer decisiones del gobierno de turno o derrocarlo directamente.

Simultáneamente, en la calle, lejos de *las altas esferas del poder*, en lo que va de gobiernos constitucionales, a la fecha ya hubo casi 5000 muertos por violencia institucional (“gatillo fácil”, “suicidados” y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías), en su inmensa mayoría jóvenes, de tez morena y pobres¹. La dualidad represiva del Estado que describió Eduardo Luis Duhalde en su trabajo *El Estado terrorista*

¹Ver informe CORREPI 2015.

*Argentino*², continuó bajo la forma de una encubierta guerra de baja intensidad.

Recurrentemente los muertos siguen siendo de un solo lado: los pobres, y los beneficios del otro lado: las corporaciones empresarias. Esto solo es un panorama, lapidario, por cierto, de un terrorismo de Estado enmascarado aún activo.

Un capítulo especial, en el marco de la avasallante revolución tecnológica que vivimos, es el de los medios masivos de comunicación (o de intoxicación), hoy grandes empresas hegemónicas. Se sabe que siempre jugaron un rol protagónico en todo lo que es la batalla por las ideas, en la formación de opinión y “sentido común”. A su vez, como empresas que son, están estrechamente ligadas al capital financiero internacional y a grandes corporaciones.

Con semejante poder, no les resulta difícil “cooptar” a jueces, fiscales, periodistas, militares, policías, funcionarios y políticos en general. Hoy las armas más usadas de esta guerra, además de las novedosas pistolas Taser, son las *fake news* y el *lawfare*, armas por demás eficaces a la hora de derrocar gobiernos y demonizar movimientos y dirigentes sociales y políticos.

El resultado de todo esto es una sociedad fragmentada y un Estado viciado y colonizado por intereses corporativos ajenos al *bien común*, lo que es muy parecido a lo que siempre ha sido, en mayor o menor medida, un Estado capitalista.

²El *Estado Terrorista argentino*, Eduardo Luis Duhalde, Ediciones Colihue. 2013.

La vieja teoría de cierta izquierda de que el capitalismo estaba en crisis y en su fase terminal, hace rato que se derrumbó. Solo fue un anhelo.

La prueba de que goza de buena salud la encontramos en otra novedad más, y esta es que el capitalismo, que siempre demostró ser muy dinámico, en los últimos 40 años ha evolucionado a una etapa superior, de un nivel de concentración mundial nunca visto hasta ahora, a partir de lo cual se consolidó una lumpenburguesía, concepto que muy bien desarrolla Jorge Beinstein en su artículo *Origen y auge de las lumpenburguesías latinoamericanas*,³ de donde citamos un breve párrafo: **“Los grupos locales se caracterizan por una dinámica de tipo “financiero” combinando a gran velocidad toda clase de negocios legales, semilegales o abiertamente ilegales, desde la industria o el agrobusiness hasta el narcotráfico, pasando por operaciones especulativas o comerciales más o menos opacas.** Es posible investigar a una gran empresa industrial mexicana, brasileña o argentina y descubrir lazos con negocios turbios, colocaciones en paraísos fiscales, etc. o a una importante cerealera realizando inversiones inmobiliarias en convergencia con blanqueos de fondos provenientes de una red-narco a su vez asociada a un gran grupo mediático. Las élites económicas latinoamericanas aparecen como una parte integrante de la lumpenburguesía global, son su sombra periférica, ni más ni menos degradada que sus paradigmas internacionales.” (negritas en el original).

Lo que confirma Beinstein en su texto, es que hoy ya no hacen falta Fuerzas Armadas ni escuelas francesas para que esa

³*Origen y auge de las lumpenburguesías latinoamericanas*, Jorge Beinstein publicado en el número 6 de la revista *Maíz*, Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, 2016.

lumpenburguesía financiera controle los Estados; con golpes financieros o institucionales y mediáticos pueden hacerlo. Bancarizados como estamos obligados a estar, para no quedar *fuera del sistema*, esclavos de un pedazo de plástico que vence a fin de mes, e hipnotizados por la magia del I-Phone, internet, la conectividad y las *redes sociales*, somos presa fácil de esa lumpenburguesía que se maneja como pez en el agua en las transacciones tan virtuales como turbias viabilizadas a través de la intrincada red de la banca mundial.

Esta reseña, que con admirable estoicismo han leído quienes llegaron hasta acá, describe de algún modo el modelo de *democracia* que tenemos y nos lleva a enumerar los muertos que esta *democracia* esconde dentro del ropero y a preguntarnos qué hacer con ellos, dado que ya empiezan a oler feo:

¿Qué hacer con las FFAA hoy? ¿Para qué sirven? ¿Es posible hoy, en este contexto, optimizarlas, cambiar totalmente su formación y orientación, configurarlas hacia una real defensa de la soberanía nacional y regional?

¿Qué hacer con los servicios de inteligencia, hoy cooptados por sus colegas norteamericanos e israelíes?

¿Cómo sanear el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad?

¿Cómo transformar a las Policías, que desde hace más de 150 años tienen la costumbre de torturar y fusilar con el aval del poder político a jóvenes pobres y desarmados?

Y por último y principal ¿qué hacer frente al capital financiero, las corporaciones, los fondos de inversión (fondos buitres) que hoy dominan y determinan la economía, e inciden de modo decisivo en las resoluciones políticas de los gobiernos y parlamentos?

Atento al oscuro y desolador panorama descripto hasta aquí podemos afirmar que, hoy por hoy, no hay condiciones de modificar algo de lo que esas preguntas plantean, aunque también debemos preguntarnos por qué ningún gobierno constitucional desde 1983 a la fecha tomó el tema del saneamiento de las FFAA y FFSS y el Poder Judicial como política de Estado con un plan de corto, mediano y largo plazo para su transformación.

Pero antes de que el lector/a tome una decisión drástica, o se precipite al abismo de una profunda depresión, en esta oscuridad sin duda hace falta encender, al menos, un fósforo. Sabemos, y es un hecho visible, que se han invertido litros de tinta y toneladas de papel en diagnósticos y descripciones de nuestra historia y situación social, de hecho, este mismo escrito es un diagnóstico, una lectura, una interpretación de lo que pasó, porqué pasó y por qué pasa lo que pasa.

Pero poco se ha dicho acerca de *qué hacer* para avanzar en la construcción de un cambio social profundo, con la profundidad que soñaron los militantes de los ´70.

Este es el desafío, esta es la utopía desde siempre y hacia ella debemos caminar.

Martín Mujica,

Buenos Aires,
Noviembre 2015.

ANEXO I. ¿QUÉ HACER?

“La única lucha que se pierde es la que se abandona.”

Ernesto Che Guevara.

Este capítulo nunca lo pensé como parte de este escrito. Tal vez sea por las dudas que me invaden frente a esa pregunta. Pero lo intento.

Claro está que no tengo una respuesta a las preguntas planteadas, pero sí algunas ideas para volcar a un debate colectivo.

Hoy la herramienta más efectiva para garantizar un proyecto popular y de bienestar para las mayorías es el Estado, aunque no la única. Es ahí donde se cuenta con la estructura necesaria y los instrumentos posibles para ejecutar las políticas públicas que comiencen a revertir la situación de exclusión y pauperización de la mayoría de los habitantes del país.

Para eso hace falta otra herramienta fundamental: un movimiento político consolidado y una nueva generación de dirigentes/as que realmente encarnen con energía, decisión y valentía un proyecto nacional y popular.

¿Qué piensan y qué se preguntan los/las jóvenes de hoy? (entendiendo por “jóvenes” a aquellos que nacieron a partir de

1975 en adelante). O más aún, los/las jóvenes que nacieron a partir de 1983 o... del 2001.

Espacio libre para responder: porque ellas/os son la futura dirigencia.

Ante la ausencia de un movimiento político y social lo suficientemente consolidado que pueda encaminarse hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria, debemos rescatar los aspectos más positivos de los gobiernos que impulsaron un *Estado de bienestar*: uno de ellos es que algunos de los temas mencionados se han puesto en la agenda de debate. Fueron importantes los avances en cuestiones de derechos sociales y civiles, en las posibilidades de un cierto ascenso social de los sectores populares, lo que abrió un espacio de inclusión para los más precarizados.

Pero el techo es invariablemente bajo y por algún motivo, en los niveles ejecutivos de gobierno, no se discuten temas más estructurales, como la matriz económica y financiera del país y la región, la tenencia de la tierra, la matriz energética, de transporte, la reformulación del funcionamiento del aparato del Estado y sus FFAA y FFSS, la estatización de las empresas estratégicas como agua, energía, comunicaciones, transportes, entre otros, aunque algunas de estas premisas sí estuvieron en agenda.

El aspecto central está en el plano político, en el proyecto de país y de poder.

Debemos abrir un debate profundo y masivo respecto a qué tipo de “democracia” aspiramos, palabrita esta - *democracia* - tan meneada por los diversos personajes del poder real. Esta *democracia* tal cual está planteada sólo es funcional al poder económico concentrado y a los que maman de sus tetas. No

contribuye al “bien común” y deja afuera a la mayoría de los habitantes del país.

Aspectos políticos claves a revisar son cómo reducir la gran indefensión de la mayoría popular y pobre ante el poder. El sistema político es un espacio tan limitado como inaccesible para una abrumadora mayoría de la población. Votar cada dos o cuatro años no basta en un marco electoral siempre condicionado donde casi nunca se elige, sino que se opta por el menos peor, y terminamos gobernados hoy -2015- por una plutocracia. Pero tampoco podemos dejar ese espacio vacío, esto es importante recalcarlo.

Esta puede ser una primera conclusión: no podemos volver a permitir que los *Ceos* del poder económico dispongan libremente de la estructura del Estado. Este debería ser un límite definitivo, un *nunca más*.

Se impone la necesidad de consultas populares vinculantes, nacionales, regionales y locales, para temas de fondo como deuda externa, privatizaciones, extranjerización de la tierra, modelo latifundista basado en el monocultivo, preservación del medioambiente y recursos naturales, penetración de multinacionales, la agroecología y tantos otros. Todos temas, cuyas consecuencias negativas por manejos espurios caen, más temprano que tarde, sobre las espaldas de las mayorías más pobres.

Estas consultas o iniciativas populares son herramientas participativas previstas en la Constitución Nacional y se pueden poner en práctica a escala barrial, zonal o regional como modo de informar y movilizar al ciudadano/a de a pie y también de presionar a sectores de la política para que las tomen en cuenta y se promuevan a mayor escala. Todo lo que

se haga en esta línea suma, por mínimo que sea, si se articula entre las organizaciones sociales.

Y aquí puede haber una segunda conclusión: la organización y la construcción política desde la base es la que puede poner en uso estas herramientas para controlar y redireccionar políticas públicas. Debemos estar menos en la pantalla del celular y empezar a vernos las caras más seguido.

En lo político institucional es necesaria la descentralización del poder de modo que abra la posibilidad a la participación ciudadana. Poner en funcionamiento los parlamentos comunales a escala barrial y regional que funcionen como control ciudadano de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, (Ley 1777 de Comunas en la ciudad de Buenos Aires) es la manera de articular la democracia representativa con la democracia participativa. Debemos rescatar conceptos ya olvidados como *soberanía popular* y el *derecho a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos*.

Instalar estas cuestiones, que son determinantes para el futuro de los que vivimos en este país y en esta región del planeta, implicaría modificaciones de fondo en la Constitución vigente o reemplazarla por una nueva Constitución Nacional; pero antes de llegar a esta, por ahora, lejana instancia hay instrumentos que se pueden utilizar hoy para la construcción política.

Todos sabemos que nada de esto es posible sin una masa crítica de la población organizada y comprometida activamente con estos principios. Existen infinidad de colectivos vecinales, movimientos sociales, partidos populares, asambleas, cooperativas, fábricas recuperadas por sus trabajadores y organizaciones sociales desparramados por todo el país, todos ellos con diversos procesos de

construcción, pero con muchas afinidades políticas e ideológicas, lo que aún falta es la confluencia de todos en un proyecto común.

¿Está mentalizada la clase política para estos debates? No todos, solo algunos pocos a los que la única manera de acercarlos es con la presencia de un movimiento popular organizado y munido de un proyecto político a ser debatido.

¿La sociedad es permeable a estos temas? No toda, pero del mismo modo que a cierta dirigencia política, se la puede permeabilizar.

Con mucha más movilización y participación política es posible construir el camino hacia esos objetivos. Hay que abrir el grifo. Y para que esto ocurra, siempre es mejor construir bajo un gobierno *populista*, partidario del *Estado de bienestar*, que bajo uno neoliberal y salvaje.

Sin duda la construcción de un movimiento político y social que encarne estas premisas es indispensable y esto es posible en la medida en que los ya existentes confluyan.

Todas las organizaciones sociales antes mencionadas emergieron del pantano de la derrota infligida por la dictadura al movimiento obrero y popular. Tuvieron que organizar trabajadores precarizados, desocupados e indigentes y desde ahí combatir el hambre y transformarse en organizaciones políticas. Construyeron cuadros políticos, hombres y mujeres jóvenes hoy con una sólida experiencia y formación política que deben empezar a reemplazar a la rancia, anquilosada y conservadora clase política actual. Esto es clave, no es posible avanzar con un proyecto de país inclusivo y soberano con la actual clase política. Falta este salto cualitativo.

Pero saliendo un poco de la cuestión local que, a veces nos absorbe totalmente, hay un aspecto que considero neurálgico y vital y que ha sido poco o nada debatido: el plano regional y nuestro lugar en la disputa geopolítica.

Nos cuesta pensar la política desde una mirada geopolítica, más macro.

Remarco esto porque debemos entender que estuvimos, estamos y estaremos siempre atravesados por los movimientos que haga el Imperio en el tablero político mundial. Si EEUU estuvo *ocupado* en otras regiones como el Golfo Pérsico, Irán, Irak y Afganistán, no quiere decir que no nos estuviera mirando. En cuanto detectó la presencia de sus rivales chinos y rusos en la zona, más varios gobiernos con la intención de crear un bloque regional, comenzó a mover sus alfiles locales y puso en funcionamiento la 4ª flota.

Las guerras de baja intensidad siguen siendo la herramienta más utilizada por los EEUU y las oligarquías criollas. Colombia es un ejemplo: uno de los países con mayor desigualdad de la región y con siete bases militares donde están asentados militares estadounidenses y la DEA en su territorio, es el principal refinador de cocaína del mundo y el principal proveedor para los EEUU y Europa. A la vez, es el país con mayor índice de violencia paraestatal - junto con México - donde cientos de líderes sociales y militantes políticos son asesinados a diario impunemente.

Hubo un intento de construcción de un bloque regional entre el 2005 y el 2015.

Esa coyuntura demostró la posibilidad (y la necesidad) de crear ese bloque regional, que consolidara un proyecto común, política y económicamente soberano.

Fue, a mi entender, una oportunidad inédita, tal vez escasamente apreciada.

El socialismo en un solo país - sabemos - siempre fue por demás dificultoso en la actual coyuntura mundial, exige de un pueblo muy comprometido y sacrificado. Cualquier proyecto soberano e independiente del Imperio, será débil si está aislado. Más claro quedó cuando vimos cómo EE UU, una vez más, apuntó sus cañones políticos, económicos y militares, en esta ocasión, contra el proceso hondureño, ecuatoriano, venezolano, brasileño, boliviano, paraguay, uruguayo y argentino. Evidentemente la construcción del Alba, la Celac, la Unasur y el Banco Regional del Sur, con una nueva arquitectura financiera, independiente de Wall Street, erizó los pelos del Imperio y se intensificaron los golpes de Estado parlamentarios y financieros, la *lawfare*, las *fake news*, siempre con el intenso fogoneo permanente y silencioso de la *embajada* y la presencia “disuasiva” del Comando Sur.

Esta reacción ha sido un indicio de que ese era un camino acertado. Hoy también se abre la posibilidad de integrarse al BRICS como alternativa de inclusión en un mundo multipolar con una postura más soberana.

Otro dato es que, en el plano local y también regional hasta ahora, las propuestas han venido de *arriba*, encarnadas en un *líder o lideresa*. Hubo una gestión de gobierno, entre 2003 y 2015, que tomó determinadas medidas políticas populares en cuestiones de derechos humanos, derechos civiles y derechos económicos, y un sector importante de la población que acompañó. Pero la construcción política es más que eso, tiene que venir de abajo también, tiene que haber construcción, formación y participación del ciudadano de a pie. Además de “acompañar” pasivamente, tiene que darse una participación activa y colectiva, que se transforme en conciencia,

compromiso y organización. Para eso hace falta militancia y que el Estado -sus funcionarios- salgan del microclima de los confortables palacios ministeriales y “bajen” al llano, ocupen el territorio y ahí se instalen con políticas públicas de inclusión y articulen, con las organizaciones sociales existentes, formas más profundas y extendidas de construcción política colectiva.

En buena parte del arco político actual, se ha arraigado la campaña mediática en época electoral, el márketing político vía *redes sociales*. Solo durante la campaña electoral se sale de la comodidad del palacio a “caminar el país”, a “timbrear”. No es así como se construye poder popular.

El activismo político de las décadas del ´60 y ´70 no caminaba los barrios en “época de elecciones” (algo desconocido en aquel tiempo), *vivía* en los barrios, *trabajaba* en las fábricas, *compartía* los 365 días del año con los trabajadores, los jóvenes, las mujeres de los barrios populares. Construía junto con ellos, aprendía de la sabiduría de ese pueblo y se integraba a él. La presencia física, la cercanía, el compartir el mate, el debate de los problemas discutidos cara a cara, es lo que genera aquellos lazos invisibles pero indestructibles en el proceso humano de construcción política.

Hay que volver a esa forma de construir en política. No es la única, pero es la más válida, si se inspira en un proyecto de poder popular, por un modelo de país inclusivo y solidario.

Pero la construcción política y la organización es solo una parte dentro de un proceso social, la historia muestra que esa construcción, esa militancia, pega un salto cualitativo recién cuando *el sistema* se resquebraja por alguna crisis. Así se produjeron las revoluciones en el mundo, así ocurrió aquí durante las décadas del ´60/´70 o durante la crisis del 2001, aunque no implicó el triunfo de ninguna revolución.

Hablar de *otra forma de hacer política* está vinculado a un proyecto de poder y a un modelo social diferente al capitalista, pero, sin duda hay otros factores que tienen que ver con el hoy, el mundo siguió girando, cambió, y las propuestas políticas deberán ser adecuadas a estos tiempos.

En esa estrategia de construcción política debemos incluir no solo a los trabajadores, los sectores populares, las mujeres, los jóvenes, las pymes, también debemos incluir a sectores del poder real como las FFAA y las FFSS lo que implica un trabajo de construcción política en su seno.

Ningún proyecto popular tiene garantizado el triunfo definitivo y mucho menos la supervivencia sin el respaldo real y efectivo de una fuerza armada movilizada. Los ejemplos están a la vista: Cuba y Venezuela resisten estoicamente los embates del Imperio con el respaldo de un pueblo y sus fuerzas armadas.

De esto trata el contenido de este escrito: cómo hacemos para instalar y sostener un proyecto de país inclusivo frente a un enemigo, sí, un enemigo no un rival político, un enemigo que está dispuesto a todo, con tal de hacernos desaparecer de la faz de la tierra, tal como lo hemos tratado de demostrar a lo largo de estas páginas.

Ciertamente hoy no podemos hablar de revolución en el sentido clásico, o como se planteó en los años ´60/´70, pero sí se puede avanzar en algunas transformaciones. El Estado dispone de herramientas y la posibilidad de esto solo es sostenible con la movilización organizada y con la perspectiva de un acuerdo regional, que se oriente a la construcción de un bloque soberano e independiente, como se intentó en su momento con el Mercosur, la Unasur, la Celac y

el Banco del Sur, organismos regionales que aún existen y son la base institucional de esa construcción.

Habrà que ver por qué todo ese proceso quedó a medio camino y a partir de ahí revitalizarlo.

El lema de las Juntas de Buen Gobierno en el estado zapatista de Chiapas, México es: “Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”.

Rotatividad, revocación de mandato y rendición de cuentas: de este modo garantizan que el “mandar obedeciendo” no sea sólo un lema.

Disponemos de algunas herramientas, solo hay que proponerse usarlas.

ANEXO II. CIVILES Y MILITARES: LA GUERRA FRÍA Y LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

DE LAS BOMBAS ATÓMICAS SOBRE
HIROSHIMA/NAGASAKI AL ASESINATO, VÍA DRON, DE
QASSEM SOLEIMANI.

Históricamente en Argentina la clase política habló de *subordinación de las FFAA/FFSS al poder político*.

Esto, sin duda, se relaciona con nuestro convulsionado siglo XX en el que, de modo casi permanente hubo golpes militares que derrocaron gobiernos civiles, además de innumerables insubordinaciones por cuestiones políticas dentro de las FFAA/FFSS.

A raíz de esta historia en 1983, con el retorno a un gobierno constitucional luego de la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983), el poder civil buscó, con muchas dificultades, consolidar el control sobre las FFAA y las FFSS.

En esa línea fue la sanción de la Ley de Defensa Nacional (1988) que, con amplio consenso parlamentario, delimitó la intervención de las FFAA ante la agresión por parte de un Estado extranjero (defensa), excluyéndolas de la participación en conflictos internos (seguridad interior). Si bien fue un paso muy importante, la reglamentación de esta ley se realizó mucho después, en 2006.

Habr  que preguntarse por qu  se demor  18 a os.

Pero adem s de esta pregunta surgen otras:  por qu  se aborda el tema FFAA como una corporaci n a la que hay que *dominar* y *subordinar* como a un animal salvaje?

Hay una respuesta r pida y casi obvia a esta pregunta: porque las FFAA han sido extremadamente salvajes durante el siglo XIX y todo el siglo XX.

Otra respuesta puede ser que en nuestro pa s todo se dirime dentro de una l gica binaria, por un inestable equilibrio entre diferentes sectores sociales en pugna: obreros-empresarios, civiles-militares, cipayos-nacionalistas, peronistas-radicales, gorilas-nac&pop, fachos-progres, etc.

Pues bien, esto es as  porque somos una sociedad dividida en clases sociales y con proyectos de pa s contrapuestos.

Pero en la medida en que no se resuelva esta contradicci n de fondo  c mo integramos a las FFAA a la “*vida democr tica*”¹?

Pasar de la idea de *subordinaci n* a la de *integraci n* es un  tem que la clase pol tica pareciera no haber tenido en su agenda desde 1983 a la fecha.

Subordinaci n es un concepto muy arraigado en las FFAA dada su estructura verticalista, jer rquica, de mando, de dominio de uno sobre otro, de disciplinamiento sin cuestionamientos.

Integraci n en cambio alude a *ser parte*, a una relaci n m s sim trica con la sociedad civil, de m s reflexi n, de objetivos comunes. De compartir un proyecto de pa s soberano e

¹ Eufemismo bastante ambiguo que amerita un debate en particular.

independiente, sin injerencia de “la embajada” ni la cuarta flota.

¿En qué consistiría la integración? ¿Es posible teniendo en cuenta nuestra historia?

Sin duda que muchos de aquellos miembros de las FFAA/FFSS que estuvieron en actividad entre 1955 y 1983 difícilmente puedan integrarse, salvo honrosas excepciones (el CEMIDA, por ejemplo). Esta afirmación se sustenta en que todos los miembros de las FFAA/FFSS que estuvieron activos en ese período participaron, por acción u omisión, en crímenes de lesa humanidad. Prueba de esto es el “pacto de silencio” dentro de la corporación militar-policial-eclesiástica que, a 50 años, sigue vigente.

Pero muchos de ellos siguieron (y siguen²) en actividad después de 1983, es más, fueron los que formaron a las nuevas camadas de oficiales y suboficiales que ingresaron a la carrera militar o policial durante *la democracia*,³ sin contar la influencia que tienen los “retirados” a través del control que ejercen en distintas instituciones militares como el Círculo Militar, las obras sociales, mutuales, etc.

A 37 años del retorno a los gobiernos constitucionales nos encontramos con que estos desatendieron la posibilidad de

²En respuesta a varios reclamos y pedidos de Informes que se vienen realizando desde 2016, recién el año pasado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de su Jefatura de Gabinete, informó que son 282 los policías que hoy cumplen funciones en la fuerza porteña, que tienen el antecedente de haber actuado durante la dictadura cívico-militar. <https://www.pagina12.com.ar/240198-los-resabios-de-la-represion-ilegal>

³ Sustantivo cuyo contenido es tan genérico que cada quien le añade el que más le conviene. Como el agua, se adapta a cualquier envase.

introducir un cambio de fondo en la formación de los cuadros militares y policiales.

Una política de intervención implica un proyecto interdisciplinario de corto, mediano y largo plazo, es decir una política de Estado, consistente en abstenerse de enviar militares y policías a *formarse* en EEUU y en las diferentes “Escuelas de las Américas”, intervenir todos los institutos y liceos militares, cambiar de raíz sus planes de estudio y rediseñar el plantel de profesores integrándolo con docentes con formación democrática, eliminando definitivamente el concepto del “enemigo interno” y restaurando los conceptos de soberanía nacional, independencia económica y justicia social. De ese modo se podría obtener en 10 años, militares con otra cabeza. Esta sería una manera de empezar.

En el tironeo permanente entre gobernantes civiles y jefes militares se dilapidaron décadas en las que se siguieron formando jóvenes militares y policías con los parámetros del “gatillo fácil”, la picana y las pistolas Taser.

Lo que hoy llaman la “doctrina Chocobar” es lo que la *escuela francesa* en 1950 llamó “el enemigo interno”.

La introducción de algunas materias de contenido humanístico o referidas a “derechos humanos” dentro de los planes de estudio en el nivel universitario, sin negar su importancia, no tuvieron un resultado relevante⁴. Lo mismo ocurrió con los diferentes servicios de inteligencia.

Los resultados hoy están a la vista.

⁴ Gestión de Nilda Garré 2005/2010.

Nos encontramos desde 1983 con una amenaza latente, por momentos invisibilizada, hasta que, recientemente se puso de relieve con el golpe cívico-militar en Bolivia. Episodios similares es factible que ocurran ante cada crisis política y social en cualquier país suramericano.

Las políticas de Estado en nuestro país (y en la región) han sido muy endebles en estos temas. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner iniciaron una reconversión de las FFAA con la integración de la UNASUR que si bien no fue a fondo fue muy importante, pero el gobierno de Mauricio Macri borró todo a fuerza de decretos.

¿Podía ganar Macri una elección presidencial? ¿Podían derrocar a Dilma Rousseff, meter preso a Lula y poner a Bolsonaro? ¿Podía ocurrir un golpe cívico militar en Bolivia?

Sí, pasó y está pasando, aunque para muchos esto era impensable.

Hoy, el flamante ministro de Defensa de un nuevo gobierno progresista que acaba de asumir tiene que entrar al Ministerio en puntas de pie, como en un campo minado, y encuentra archivos referidos a derechos humanos tirados en un sótano inundado y una caja de proyectiles de mortero al lado del despacho de una funcionaria civil de alto rango.⁵

Son episodios puntuales, tal vez insignificantes, pero nos están diciendo algo.

Nuestro vínculo tortuoso con el imperio de turno, EEUU y la OTAN, nos ha llevado y nos conduce hoy también al agravamiento de nuestros padecimientos sociales y a una

⁵<https://noticias.perfil.com/noticias/politica/alarma-encontraron-explosivos-en-la-oficina-de-una-funcionaria-de-defensa.phtml>

perspectiva de balcanización y de disolución como país soberano.

Esto es algo que nuestra sociedad debe entender.

Carl von Clausewitz, como oficial del ejército prusiano en la primera mitad del siglo XIX, pensó a la guerra como un instrumento de la política. Su concepto tal vez más conocido: “la guerra no es simplemente un acto político sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”.⁶

Siendo un concepto teórico acertado, esta concepción es la que impera aún hoy en las clases dirigentes y las FFAA occidentales, con los resultados que están a la vista.

Debemos salir de la lógica de la guerra, la violación de la soberanía territorial, política y económica y recuperar los conceptos políticos relacionados con el respeto entre países soberanos, la no intervención extranjera en asunto internos y la libre autodeterminación de los pueblos, como único camino a la paz mundial.

Este es nuestro desafío.

Martín Mujica.

Buenos Aires,
enero de 2020.

⁶<https://politicayplanificacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/190/2012/04/Von-Clausewitz-K.-2005-Ramas-del-arte-de-la-guerra-Captulo-I-del-Libro-II-y-Estrategia-Captulo-I-del-Libro-III-en-De-la-Guerra.-Buenos-Aires-AGEB-Aterramar.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

Alexandre, Mario (1962): “Educación Democrática”, Editorial Ciordia.

Álvarez, Juan (1972): “Las guerras civiles argentinas”, Editorial EUDEBA, Buenos Aires.

Andersen, Martin (1993): “Dossier Secreto”, Editorial Planeta, Buenos Aires.

Ayala Tomasini, Natalia; Chiarini, Sebastián (2016): “La figura del enemigo interno en el marco del Plan Conintes”, Seminario 2016.

Bardini, Roberto (2002): “Tacuara, la pólvora y la sangre”, Editorial Océano, México.

Baschetti, Roberto (1988): “Documentos de la Resistencia peronista 1955-1970”, Editorial Punto Sur, Buenos Aires.

Baschetti, Roberto (2013): “Violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964”, Editorial Corregidor, Buenos Aires.

Bayer, Osvaldo (1974): “Los Vengadores de la Patagonia Trágica”, Editorial Galerna, Buenos Aires.

Beinstein, Jorge (2016): “Origen y auge de las lumpenburguesías latinoamericanas”, Revista Maíz, N° 6. Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata.

Bialet-Massé, Juan (1985): “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzo del siglo”, Centro Editor de América Latina (tres tomos), Buenos Aires.

Calveiro, Pilar (2013): “Política y/o Violencia, una aproximación a la guerrilla de los años setenta”, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.

Cena, Juan Carlos (2008): “El ferrocidio”, Editorial La Rosa Blindada, segunda edición, Buenos Aires.

Chaves, Gonzalo Leónidas (2015): “Rebelde acontecer, relatos de la resistencia peronista”, Editorial Colihue, Buenos Aires.

CONADEP (1984): “Nunca Más”, informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de *Personas*, Editorial EUDEBA, Buenos Aires.

Coordinación de Investigación Histórica (2010): “Bombardeo, 16 de junio de 1955”, Edición Archivo Nacional de la Memoria, Buenos Aires.

Coordinación de Investigación Histórica (2014): “Plan CONINTES, represión política y sindical”, Edición de la Coordinación de Investigación Histórica del Archivo Nacional de la Memoria. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

D’Andrea Mohr, José Luis (1999): “Memoria Debida”, Editorial Colihue, Buenos Aires.

D’Antonio, Débora (Compiladora) (2018): “Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino”, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires.

Di Meglio, Gabriel (2007): “¡Mueran los salvajes unitarios! la Mazorca y la política en tiempos de Rosas”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Días Bessone, Ramón Genaro (1988): “Guerra Revolucionaria en la Argentina (1959-1978)”, Editorial Círculo Militar, Buenos Aires.

Duhalde, Eduardo Luis (2013): “El Estado Terrorista argentino”, Ediciones Colihue, Buenos Aires.

Feinmann, José Pablo (2006): “La sangre derramada, ensayo sobre la violencia política”, Editorial Planeta, Buenos Aires.

García Lupo, Rogelio (1971): “Mercenarios y Monopolios en la Argentina, de Onganía a Lanusse 1966-1973”, Editorial Achával, Buenos Aires.

Gasparini, Juan (1986): “La pista suiza”, Editorial Legasa, Buenos Aires.

Girbal-Blacha, Noemí (1998): “Ayer y hoy de la Argentina rural, gritos y susurros del poder económico 1880-1997”, Editorial La Página, Universidad Nacional de La Plata.

González Janzen, Ignacio (1986): “La Triple A”, Editorial Contrapunto, Buenos Aires.

Grassi, Ricardo (2015): “El Descamisado, Periodismo sin aliento”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Liborio Justo (Quebracho) (1962): “Pampas y Lanzas”, Editorial Palestra.

Löbbecke, Héctor (2006): “La Guerrilla Fabril”, Ediciones Razón y Revolución, Buenos Aires.

López, Vicente Fidel (1970): “Historia de la República Argentina”, Editorial Sopena, Buenos Aires.

Lorenz, Federico (2013): “Algo parecido a la felicidad”, Editorial Edhasa, Buenos Aires.

Martínez Sarasola, Carlos (2012): “La Argentina de los caciques o el país que no fue”, Editorial El Nuevo Extremo.

Marx, Carlos (1980): “La guerra civil en Francia”, Editorial Progreso, Moscú.

Mattini, Luis (2003): “Hombres y mujeres del PRT.ERP, de Tucumán a La Tablada”, Editorial De la Campana, Buenos Aires.

Mazzei, Daniel (2011): “El CEMIDA: militares argentinos para la transición democrática”, Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires.

Mazzei, Daniel (2013): “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la guerra sucia 1957-1962”. Revista de Ciencias Sociales 13, 105-137. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes.

Merkin, Marta (2004): “Los Lugones, una tragedia argentina”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Ortega Peña, Rodolfo; Eduardo Luis Duhalde (2002): “Felipe Vallese, proceso al sistema, a 40 años, la lectura del crimen”, Editorial Punto Crítico, Buenos Aires.

Peña, Milcíades (1975): “De Mitre a Roca, consolidación de la oligarquía anglo criolla”, Ediciones Fichas, Buenos Aires.

Peña, Milcíades (2012): “Historia del pueblo argentino (1500 1955)”, Emecé (Grupo Editorial Planeta), Buenos Aires.

Plan del Ejército (2012): “Documentos del Estado terrorista”, Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 404/75, (Lucha contra la subversión) (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional). Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria n° 4, Ed. ANM, 2012.

Potash, Robert (1985): “El Ejército y la política en Argentina 1928-1945”, Tomo I, Editorial Hyspamerica, Buenos Aires.

Potash, Robert (1994): “*El Ejército y la política en Argentina 1945-1962 y 1962-1973*” (Tomo II y III), Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Robin, Marie Monique (2004): “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Robles, Miguel (2010): “La búsqueda, una entrevista con Charlie Moore”, Ediciones del Pasaje, Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba.

Rodríguez, Adolfo Enrique (Crio. (R)), Zampietro, Eugenio Juan (Crio. Insp.) (1999): “Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio, génesis y desarrollo desde 1580 a la fecha”, Editorial Policial, Buenos Aires.

Rouquié, Alain (1982): “Poder militar y sociedad política en Argentina”, Tomo II 1943-1973, Editorial Emecé, Buenos Aires.

Santella, Agustín “Las guerras obreras en la Argentina. Villa Constitución en 1973-1975”, (PDF).

Scavino, Dardo (2010): “Narraciones de la independencia, arqueología de un fervor contradictorio”, Editorial Eterna Cadencia, Buenos Aires.

Schmidl, Ulrico(2009): “Viaje al Río de la Plata”, Editorial Claridad, Buenos Aires.

Scirica, Elena: “Visión religiosa y acción política, el caso de Ciudad Católica-Verbo en la Argentina de los años ´60”,PROHAL MONOGRÁFICO, Revista del Programa de Historia de América Latina. Vol. 2. Primera Sección: Vitral Monográfico Nro. 2. Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires,

Sebreli, Juan José (1971): “Los Oligarcas”, Editorial Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

Sierra, Julio (2008): “Fusilados, historia de condenados a muerte en Argentina”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Terán, Oscar (2013): “Nuestros años sesentas, la formación de la nueva izquierda intelectual argentina”, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Torre, Juan Carlos (2011): “La vieja guardia sindical y Perón”, Ediciones RyR.

Torres Molina, Ramón (2014): “La lucha armada en América Latina y otros escritos”, Editorial Controversias, Buenos Aires.

Trías, Vivian (1975): “El Paraguay de Francia el Supremo a la Guerra de la Triple Alianza”, Cuadernos de Crisis n° 19.

Vázquez, Enrique (2015): “El osario de la rebeldía, Campo de Mayo de Roca a los Kirchner”, Editorial Planeta, Buenos Aires.

Verbitsky, Horacio (1985): “Ezeiza”, Editorial Contrapunto, Buenos Aires.

Verbitsky, Horacio (1987): “Civiles y Militares”, Editorial Contrapunto, Buenos Aires.

Verbitsky, Horacio (2006): “El Silencio, de Paulo VI a Bergoglio, las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA”, Editorial Sudamericana / Página 12, Buenos Aires.

Verbitsky, Horacio (2006): “La última batalla de la Tercera Guerra Mundial”, Editorial Página 12/Sudamericana, Buenos Aires.

Verbitsky, Horacio; Bohoslavsky, Juan Pablo (2013): “Cuentas Pendientes, los cómplices de la dictadura”, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.

Viñas, David (1996): “Literatura argentina y política, De Lugones a Walsh”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (2010): “Crímenes de masa”, Editorial Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

Zaiat, Alfredo; Rapoport, Mario (2010): “Historia de la economía argentina del siglo XX”, Editorial Página 12, Buenos Aires.

Zeballos, Estanislao (1986): “La conquista de quince mil leguas”, Editorial Hyspamerica, Buenos Aires.



ISBN 978-987-47691-9-0



9 789874 769190